

afkar / ideas

Revista para el diálogo entre el Magreb, España y Europa

Núm. 64, otoño/invierno 2021

España 6 € / Marruecos 24 dirhams / Argelia 125 dinares / Túnez 2,5 dinares / Francia 6 € / Bélgica 6 €



Túnez: ¿democracia o autoritarismo?

Khadija Mohsen-Finan □ Ricard González □ Lilia Weslaty □ Thierry Bréssillon □ Youssef Cherif

Afganistán y las dinámicas regionales

Ana Ballesteros □ Mariano Aguirre □ Weeda Mehran □ Fatima Rahmati y Nilab Nusrat



Ideas para la acción en el Mediterráneo

EuroMeSCo está compuesta por 104 institutos de 29 países europeos y del sur del Mediterráneo, siendo así la red más importante de centros de investigación y think tanks en el Mediterráneo. Actualmente, EuroMeSCo trabaja en un proyecto cofinanciado por la Unión Europea y el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) EuroMeSCo: Connecting the Dots. Este proyecto tiene como finalidad contribuir en la formulación de políticas inclusivas a través de la investigación en relación con las prioridades de la política europea en cuanto a su Vecindario Sur, con especial atención al desarrollo económico, la migración y la seguridad.



MISIONES CLAVES

Advocacy

EuroMeSCo tiene por objetivo aumentar la capacidad de influencia de los institutos de investigación y reflexión así como contribuir activamente al desarrollo de políticas. Con este fin, los resultados de las investigaciones, todos disponibles *on-line* en la web oficial, son ampliamente compartidos con expertos y responsables de instituciones nacionales, europeas e internacionales especializados en relaciones euromediterráneas.

Investigación

EuroMeSCo impulsa la reflexión sobre las políticas euromediterráneas a través de programas conjuntos de investigación, que involucran institutos e investigadores de especialidades y orígenes diversos, a través de sus publicaciones: *Policy Studies*, *Papers*, *Policy Briefs* y *Recommendations*, *Spot Ons* e informes.

Diálogo

A través de numerosas actividades, como las conferencias anuales, talleres, seminarios, debates y webinars, EuroMeSCo ofrece una plataforma para el diálogo entre los investigadores de la red, expertos y los principales actores políticos de la región euromediterránea, para debatir las actuales tendencias y desafíos de la región y reforzar las capacidades de estos centros.

IEMed.

Secretaría de EuroMeSCo

Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)
Girona, 20 08010 Barcelona
T (+34) 93 244 98 50 | F (+34) 93 247 01 65
www.euromesco.net
euromesco@iemed.org
@euromesco



í n d i c e

9 / CRISIS EN LÍBANO, ENTREVISTA CON **Nizar Saghieh** POR ORIOL ANDRÉS GALLART
“[Gracias al juez Bitar] por primera, vez tenemos una batalla por la impunidad, por la independencia judicial y los derechos de las víctimas. Otra evidencia del cambio total de paradigma de la política libanesa desde 2019” opina este abogado y activista por los Derechos Humanos.

14 / TÚNEZ: EL GIRO AUTORITARIO, **Khadija Mohsen-Finan**
Con el golpe de julio, el presidente, Kais Said, ha desestabilizado la vida política tunecina y a sus principales actores (PDL y Ennahda). El éxito de su proyecto depende de su capacidad de responder a las expectativas de un país ahogado por la deuda y la crisis económica.

34 / EL FIN DE LA GUERRA, **Mariano Aguirre**
Afganistán está llamado a ser terreno de tensiones e influencias regionales, mientras que la situación interna del país abre muchos interrogantes. El mayor o menor grado de estabilidad interna repercutirá en las relaciones de sus vecinos hacia este país y entre ellos.

■ Editorial	3
■ Revista de prensa	6

■ GRAN ANGULAR

Kais Said se impone como ‘salvador del pueblo’	18
---	-----------

Lilia Weslaty

El presidente, presentándose como arquetipo de la integridad y la justicia, ha concentrado todos los poderes y sumido a Túnez en un autoritarismo cuyo desenlace es incierto.

Ennahda se enfrenta a su peor crisis.	22
---	-----------

Ricard González

Acechado por las guerras internas, el partido islamista, actor ineludible de la escena política tunecina de los últimos años, se encuentra al borde de la escisión.

La década perdida de la economía tunecina	26
--	-----------

Thierry Brésillon

A lo largo de estos años de democracia, los tunecinos no han logrado alcanzar un horizonte de progreso social, ni de mejor distribución de los ingresos. Todo lo contrario. Este fracaso económico explica el apoyo de parte de la población al golpe de Kais Said.

Europa y el julio tunecino	30
---	-----------

Youssef Cherif

La UE debería ayudar a modernizar la economía, impulsar la democracia parlamentaria y el poder local, además de presionar a los actores externos –eje Riad-Abu Dabi-El Cairo, por un lado, y eje Ankara-Doha, por otro– que intentan influir en la política tunecina.

■ IDEAS POLÍTICAS

El retorno talibán: el papel de Pakistán y la región	38
---	-----------

Ana Ballesteros Peiró

La retirada de Estados Unidos de Afganistán ha abierto una fase de competición entre las grandes potencias –Rusia, China, Irán, India y Pakistán– preocupadas por las consecuencias sobre la seguridad.

La victoria talibán y la nueva escena yihadista	42
--	-----------

Weeda Mehran

La presencia en Afganistán de Al Qaeda o ISIS y las relaciones de los talibanes con varios de estos grupos han suscitado preocupación, a nivel regional e internacional, por la posibilidad de que vuelva a convertirse en un refugio terrorista.

Índice

La interseccionalidad de los agravios en Afganistán 46 *Conversación con Fatima Rahmati y Nilab Nusrat*

Estas dos activistas de la organización Women for Afghan Women (WAW) repasan el calvario al que se enfrenta el país y coinciden en que la ideología talibán no ha cambiado, en concreto en asuntos relacionados con la vida social y los derechos civiles.

■ **TENDENCIAS ECONÓMICAS**

El coste económico de la no integración del Magreb 50 *Zied Saadaoui*

La falta de integración comercial, productiva y financiera obstaculiza la creación de un bloque económico magrebí. Los acuerdos de asociación con la UE han conducido a una consolidación de los flujos comerciales Norte-Sur en detrimento del comercio intramagrebí. Es necesario mejorar las infraestructuras relacionadas con el comercio y la lucha contra la corrupción.

Argelia y Marruecos: ¿rivales o enemigos? 54 *Luis Martínez*

El conflicto del Sáhara occidental bloqueó el desarrollo económico del Magreb y paralizó todo el proyecto de integración regional. La rivalidad se expresa en el Sahel: si Argel quiere hacer perder a Marruecos el Sáhara Occidental, Rabat puede plantear la cuestión tuareg y su reivindicación del Azawad. La cuestión de un conflicto abierto entre ambos países está sobre la mesa.

Consecuencias para Europa de la ruptura entre Argelia y Marruecos 58 *Karima Benabdallah*

En sus relaciones con el Magreb, la Unión Europea ha dado prioridad a la economía sobre la diplomacia y otras cuestiones que obstaculizan la construcción de un espacio económico magrebí. Si la crisis entre Argel y Rabat se agrava, habrá graves consecuencias para la UE, que lleva mucho tiempo subestimando a la región a la que le une un destino común.

■ **DIÁLOGOS**

Política de asilo: de la interceptación al abandono . . . 64 *Brad Blitz*

La débil respuesta de la Unión Europea a la crisis afgana deja al descubierto las pretensiones de cooperación exterior y de seguridad en materia de políticas migratorias.

Clima y refugiados 68 *Etienne Piguet*

El cambio climático provocará desplazamientos forzados. Sin embargo, hay que matizar el discurso catastrofista sobre las perspectivas de los movimientos migratorios internacionales.

El nacimiento de las ciudades regionales 71 *Ricard Zapata-Barrero*

Los centros urbanos pueden ayudar a tener una visión más holística e integrada del sistema migratorio y a potenciar la identidad y los valores mediterráneos.

Publicaciones 75

afkar

ideas

Editorial

Revista para el diálogo entre
el Magreb, España y Europa

La retirada estadounidense de Afganistán ha marcado para muchos el fin de una era, la de la “pax americana”, la del intervencionismo estadounidense. Más allá de los debates en torno a las consecuencias del regreso al poder de los talibanes, la realidad es que Oriente Medio es cada vez menos Oriente y más Asia Occidental. Aunque parezca una cuestión meramente terminológica, esta tendencia a una nueva denominación de la región que, tradicionalmente, más ha centrifugado intereses europeos y estadounidenses refleja una deriva, una “asianización” del antiguo Oriente Medio.

Ante el vacío que deja Estados Unidos en Afganistán –y el que dejará cuando decida retirarse totalmente de Irak o de Siria–, otros actores globales aprovechan la ventana de oportunidad que se les presenta. China emerge como una alternativa pragmática, resuelta y bienvenida para aquellos regímenes poco dados a la democratización. Rusia, por su parte, juega sus cartas en varias mesas, siendo la apuesta de su vecindario inmediato –Ucrania, por ejemplo– más clara que la de los confines del Mediterráneo, donde ya se ha asegurado cierta posición con su baza siria. Bashar al Assad está empezando a ser “normalizado” entre sus vecinos árabes, porque de algún mal hay que morir y el régimen sirio parece el menor de todos ellos a ojos del pragmatismo regional y occidental –especialmente cuando los sectores democráticos del país han sido exterminados o forzados al exilio. China, Rusia e Irán han ganado la partida siria, y Estados Unidos y Europa no asienten, pero consienten una realidad política que si bien les incomoda, no han logrado evitar.

Es precisamente Irán la clave por donde pasa el futuro de Oriente Medio. En Siria, en Yemen y también en Irak, que cae cada vez más del lado iraní. Así lo demostraron los resultados de las últimas elecciones con la posición de fuerza de Muqtada al Sadr, a pesar del hastío que demuestra la población iraquí ante tanto dominio exterior, primero de Estados Unidos y luego, desde la sombra, de Irán. Por otra parte, la tímida distensión con

Arabia Saudí, que a su vez distiende con Catar, refleja un cierto replanteamiento, o como mínimo una *détente*, de la estrategia agresiva del eje saudí-emiratí. Irán es la contraparte a la que no se ha logrado vencer desde los despachos de Riad y Abu Dabi, que a su vez inicia un reencuentro con Turquía. Veremos si esa incipiente reconciliación tiene efectos positivos en otros terrenos como Libia, donde ambos países han jugado en campos contrarios.

Está por ver qué nos deparan las conversaciones entre el P4+1 (y Estados Unidos desde el otro lado de la calle), respecto al acuerdo nuclear con Irán, el JCPOA. Las expectativas son bajas, especialmente ante el liderazgo iraní de Ebrahim Raisi, que capitalizó políticamente el descarrilamiento del acuerdo con la retirada estadounidense decidida por Donald Trump. Irán está en el centro de la ecuación, y mucho de lo que se juega en el Mediterráneo hoy acabará pasando, en un momento u otro, por Teherán.

Mientras, desde Europa seguimos mirando hacia otro lado, no solo porque Oriente Medio se aleja inexorablemente hacia Asia, sino porque hemos perdido capacidad de influencia, o interés por tenerla. El ejemplo más paradigmático es Túnez. La que ha sido en la última década la esperanza democrática en la orilla sur, ha sufrido este último año un revés peligroso. El golpe del presidente Kais Saïd pone en riesgo el proceso de transición tunecino, y la incertidumbre política se suma a la grave crisis económica y sanitaria que ha sufrido el país. Y es que la pandemia no ha perdonado a nadie, y menos a los Estados más débiles.

Las realidades biopolíticas se imponen con nuevas variantes y picos de contagio. Según la Organización Mundial de la Salud, el G7 solo ha donado un 15% de las dosis de vacunas prometidas a los países con menos recursos. Es el fruto de la asimetría global de la vacunación. Para no desfallecer, habrá que pensar que quizás en 2022 algunos de los actores regionales continuarán el proceso de desescalada y, en un acto de responsabilidad, las potencias globales decidirán no mirar hacia otro lado. ■

Mirar hacia otro lado



**ESTUDIOS DE
POLÍTICA
EXTERIOR S.A.**

IEMed.
Instituto Europeo del Mediterráneo

afkar/ideas

Revista para el diálogo entre el Magreb, España y Europa

Directores

Senén Florensa, Josep Piqué

Redactoras jefas

Lurdes Vidal, Gabriela González de Castejón

Redacción

Jordi Bertran, Elisabetta Ciuccarelli, Julia García

Infografía

Adriana Exeni

Colaboraciones

Mariano Aguirre, Xavier Aragall

Ana Ballesteros Peiró, Karima Benabdallah

Brad Blitz, Thierry Brésillon, Blanca Camps-Febrer

Luis Miguel Cañada, Youssef Cherif, Oriol Andrés Gallart, Ricard González

Sadjia Guiz, Luis Martínez, Weeda Mehran, Khadija Mohsen-Finan

Nilab Nusrat, Etienne Pigué, Fatima Rahmati, Zied Saadaoui

Nizar Saghieh, Maisara Sassi, Clara Vila, Lilia Weslaty

Redacción, administración y publicidad

Estudios de Política Exterior SA, Núñez de Balboa 49, 28001 Madrid. Tel. 00 34 91 431 26 28

www.politicaexterior.com

IEMed, Girona 20, 08010 Barcelona. Tel. 00 34 93 244 98 50

www.iemed.org

Suscripciones

Núñez de Balboa, 49 - 28001 Madrid

Tel.: 00 34 91 431 27 11- Fax: 00 34 91 435 40 27

suscripciones@politicaexterior.com

© 2021. Estudios de Política Exterior SA (Madrid)

© 2021. Instituto Europeo del Mediterráneo, IEMed (Barcelona)

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso expreso de los editores.

ISSN: 1697-0403 / Depósito Legal: M-49925-2003

Foto de portada: YASSINE GAIDI/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

afkar/ideas es una revista editada por

Estudios de Política Exterior SA (Madrid) y el Instituto Europeo del Mediterráneo, IEMed (Barcelona).

Los artículos publicados no reflejan los criterios de **afkar/ideas** expuestos en sus notas editoriales.

La revista recoge distintos estudios y opiniones, fiel a su propósito de animar el debate periódico sobre la evolución de España, el Magreb y la Unión Europea.



Esta revista ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte.

Revista impresa con papel procedente de bosques sostenibles.



Estudios de Política Exterior y el Instituto Europeo del Mediterráneo, a los efectos previstos en el artículo 32.1, párrafo segundo del vigente TRLPI, se oponen expresamente a que cualquier a de las páginas de **afkar/ideas**, o partes de ellas, sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de la totalidad o parte de las páginas de esta obra sólo podrá ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos -www.cedro.org), si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Un clásico radicalmente moderno

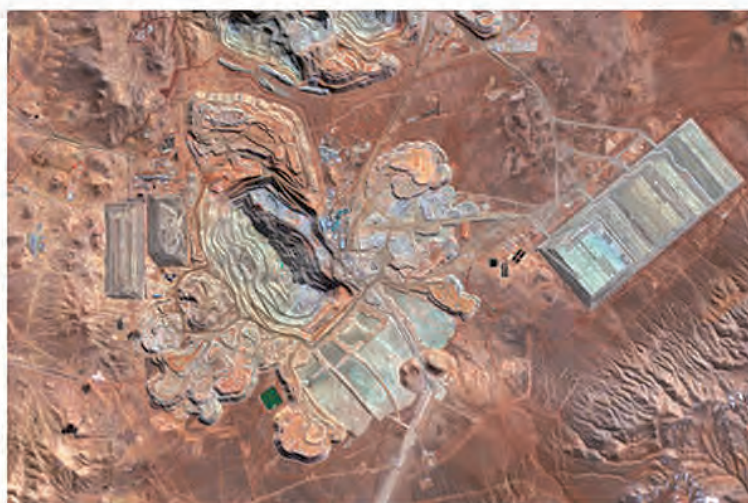
Visita la nueva politicaaexterior.com



POLÍTICA EXTERIOR



Inicio Actualidad ▾ Política Exterior ▾ Informe Semanal ▾ Afkar-Ideas ▾ Libros ▾ Eventos **Suscríbete** 🏠 (0) 👤 🔍



La geopolítica de la transición energética

Si los países ricos en cobre, aluminio, cobalto, litio y tierras raras consiguen industrializar esos recursos y darles valor agregado, serán quienes más ganarán en la transición energética que ya está en marcha.

LUIS ESTEBAN G. MANRIQUE

¿Hacia una 'tercera vía' europea en el Indo-Pacífico?

ZACHARY PAIKIN



Cuando la democracia envejece

FEDERICO FUBINI



Scholz toma el mando

HENNING HOFF



Los mapas digitales y la invención de la realidad

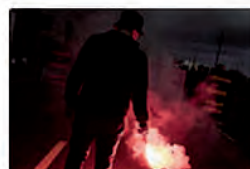
LUIS ESTEBAN G. MANRIQUE



La influencia de España en la UE pospandemia
RAQUEL GARCÍA LLORENTE
E IGNACIO MOLINA



Cómo puede Europa aprovechar la COP26
OLIVIA LAZARD



Agenda Exterior: invierno del descontento en Europa
POLÍTICA EXTERIOR



Cuatro escenarios para el acuerdo nuclear con Irán
RICCARDO ALCARO

politicaaexterior.com

Facebook - Twitter

Tragedia de Calais: el asilo en tela de juicio para París y Londres Editorial-*Le Monde* (25-11-2021)

“Eran en su mayoría kurdos, procedentes de Irak o Irán, y soñaban con vivir en Inglaterra. Su viaje tuvo un final dramático cuando, el miércoles 24 de noviembre, un barco pesquero descubrió unos quince cadáveres flotando frente a la costa de Calais. Al menos 27 personas, entre ellas siete mujeres, se ahogaron en el Canal de la Mancha.

Esta frase, que resume lo peor de los naufragios de los migrantes entre Francia y Reino Unido, nunca debería haberse escrito. Esta insoportable tragedia avergüenza a ambos países. Refleja el fracaso de sus políticas de gestión de fronteras. Pero el desastre también es europeo, ya que el Canal, desde el Brexit, es una frontera exterior de la Unión Europea (UE).

Desde 1999, más de 300 inmigrantes han muerto en la costa, según las asociaciones humanitarias. Desde hace más de veinte años, el Canal de la Mancha es una herida abierta en el corazón del continente europeo. Los migrantes han sido aplastados por los trenes o asfixiados en camiones al intentar cruzar por el túnel. Desde 2018 y el cierre de los accesos, se embarcan en frágiles lanchas neumáticas y a veces mueren ahogados, víctimas del cinismo de los contrabandistas pero también de la irresponsabilidad de París y Londres.

(...) Si los cruces desesperados aumentan, si los contrabandistas proliferan, es por-

que prácticamente no hay ninguna vía legal de inmigración a Reino Unido (...) El *statu quo* ya no es una opción, ni para Londres, ni para París, ni para Bruselas. Estos cadáveres que flotan en las aguas heladas del Canal de la Mancha, en el corazón de una de las regiones más ricas del mundo y de un continente con una historia demasiado llena de tragedias de exilio y deportación forzadas, son espeluznantes. En un mundo de fronteras cada vez más disputadas, ¿cómo es posible que los dos países aliados y amigos, Reino Unido y Francia, sigan dando el penoso espectáculo de su mortal enemistad vecinal?”

La crisis monetaria de Turquía es obra de Erdogan Editorial-*Financial Times* (28-11-2021)

“Turquía está atravesando una crisis cambiaria muy inusual. El colapso en el valor de la lira, que se ha devaluado en una quinta parte en las últimas dos semanas, no ha sido causado por problemas en los pilares económicos del país como había ocurrido en el pasado. El país, que ha sufrido durante mucho tiempo un déficit por cuenta corriente, registró un superávit por segundo mes consecutivo en septiembre gracias a un enorme aumento de las exportaciones y una recuperación del número de turistas extranjeros. Los problemas de la moneda son resultado, casi por completo, de la toma de decisiones cada vez más erráticas del presidente Recep Tayyip

Erdogan y su influencia sobre el Banco Central turco, supuestamente independiente.

Erdogan culpa a fuerzas externas por la caída en el valor de la lira. Pero los problemas comenzaron en marzo de este año cuando despidió al titular del Banco Central Naci Agbal. (...) El nombramiento de Sahap Kavcioglu, leal a Erdogan, hizo que la lira cayera un 15% poco después. La caída se volvió precipitada a principios de este mes después de que el Banco Central recortara los tipos por tercera vez en otros tantos meses.

Es cierto que las monedas de los mercados emergentes en general se han comportado mal frente al dólar este año. (...) En este contexto, las tendencias autoritarias y conspirativas de Erdogan hacen más daño de lo habitual (...) y parece decidido a seguir adelante con su compromiso ideológico con los bajos tipos de interés.

Los partidos de oposición son optimistas de que Erdogan está en sus últimos años en el poder, (...). La popularidad de Erdogan se está desvaneciendo a medida que el alza de los precios afecta el nivel de vida (...). La inflación ya está a una tasa anual del 20%, lo que significa que los tipos de interés reales rondan el 5% negativo. Si el presidente continúa aplicando un programa de recortes de tipos de interés, la lira seguirá cayendo y los precios subirán inexorablemente. En esas circunstancias, la única forma de que los turcos defiendan sus ahorros será recurrir a una moneda fuera del control de Erdogan. A menos que cambie repentinamente de rumbo, la única pregunta a la que se enfrenta

Turquía es cuánto tiempo más se quedará el presidente y cuánto daño puede hacer antes de marcharse.”

La Europa de la indiferencia Editorial-*El País* (20-11-2021)

“Fue el papa Francisco, recién llegado al Vaticano, el primero en denunciar la globalización de la indiferencia en uno de los momentos más dramáticos de los naufragios y de los rescates de pateras de inmigrantes en el Mediterráneo. Hace ya ocho años de eso, y su clamor sirve todavía para definir la actitud de algunas estructuras europeas hacia los millares de inmigrantes que se hallan atrapados en la frontera de Bielorrusia con Polonia, por la acción de unos gobernantes que han organizado el tráfico de personas como arma indigna para obtener beneficios políticos e incluso económicos.

(...) Quienes imaginaron y planificaron esta acción inhumana quieren destruir la Unión Europea y la han atacado por su flanco más débil, el de una Polonia gobernada por la extrema derecha populista, con el propósito de provocar la división entre los 27 y erosionar los principios fundacionales del proyecto europeo. Quieren que quienes derribaron muros en Europa central ahora se vean obligados a levantar nuevos muros de separación, quienes promovieron la libre circulación construyan ahora una Europa fortaleza y quienes promovieron el pluralismo, las libertades y el Estado de derecho entreguen pri-

mero los gobiernos a los extremistas y terminen destruyendo sus democracias.

(...) Las peores ideas sobre la inmigración, que identifican con una invasión, una gran sustitución de población étnica y religiosamente distinta, o incluso una guerra, están haciendo mella en las sociedades europeas, cada vez más sumidas en la perturbadora y manipulada agenda ideológica de la extrema derecha.

El síntoma es la indiferencia ante el sufrimiento de los migrantes atrapados en sus fronteras, repetición de una tragedia mediterránea que sucede una y otra vez, desde el Egeo hasta Gibraltar, en el mar, en las playas y, lo que es peor, en unos campos y centros de acogida que no siempre están a la altura de los valores y los principios que rigen en la Unión Europea. Pero el origen de esta tragedia, peligrosa para la propia UE, es la ausencia de una política europea común de inmigración, asilo y fronteras que sea acorde con la legalidad internacional y con el respeto a los derechos humanos. Solo eso evitará que seamos rehenes de los regímenes autocráticos y sin escrúpulos a los que hemos venido subrogando el control de los flujos migratorios.”

Marruecos se hace con una cúpula antidrones israelí
Ibrahima Bayo Jr.-Tel Quel
(22-11-2021)

“ En su protección del espacio aéreo (...) Marruecos está en la lista de compradores del Skylock Dome, un dispositivo israelí de pro-

tección y destrucción de drones maliciosos. Además, se confirma la militarización de las relaciones normalizadas entre Israel y Marruecos.

Este es otro signo de que las relaciones entre Marruecos e Israel han pasado de la fase de normalización a la de militarización. La relación entre los dos países, que se va a formalizar con la firma de acuerdos en el ámbito de la defensa, se está fortaleciendo.

(...) Israel se ha convertido en un proveedor cada vez más importante en la cartera de pedidos de armas de Marruecos. Tras la firma el pasado mes de julio de un acuerdo sobre ciberdelincuencia y ciberdefensa entre ambos países, se esperaba que la normalización tuviera también su componente militar. Esto último se materializa con el proyecto de creación de una planta bipartita de fabricación de armas en Marruecos mediante una asociación con BlueBird Aero Systems Ltd, filial de Aerospace Industries, empresa israelí especializada en equipos de defensa.

Se espera que el Ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, refuerce esta cooperación durante su visita a Marruecos los días 24 y 25 de noviembre. Como vendedor de la industria israelí, el ministro será recibido en audiencia por Nasser Bourita, jefe de la diplomacia marroquí. Con Abdellatif Loudiyi, su homólogo marroquí, el jefe de seguridad del Estado hebreo debe firmar un acuerdo de defensa para el suministro de sistemas de misiles de corto y medio alcance, vehículos blindados y tanques. Con el Skylock Do-

me, los drones israelíes y los medios para protegerse deberían entrar en el arsenal de Marruecos.”

Tras las elecciones, Argelia necesita urgentemente reformas económicas y políticas
Riyad Hamadi-Tout sur
l'Algérie(29-11-2021)

“ El 27 de noviembre, Argelia completó la última etapa del proceso de renovación de las asambleas elegidas, con la elección de las asambleas comunales y de wilayas.

Desde el inicio del *Hirak* en febrero de 2019 (...) y la salida de Abdelaziz Buteflika, estas son las cuartas elecciones (...), tras las presidenciales de diciembre de 2019, el referéndum sobre la revisión constitucional de noviembre de 2020 y las legislativas de junio de 2021, con un importante índice de boicot en común.

Para estas [elecciones] locales de 2021, se ha producido una ligera mejora, con un índice de participación del 35%, pero la desafección sigue siendo considerable, especialmente para unas elecciones locales.

Más allá de la participación e incluso de los resultados (...) hay motivos para preguntarse por el futuro, ya que el país ha completado oficialmente la renovación de sus instituciones elegidas.

¿Influirá esto en la doble crisis política y económica? ¿Serán los nuevos elegidos capaces de hacerlo mejor que sus predecesores en tér-

minos de desarrollo local y de atender las preocupaciones de la población?

Los argelinos así lo esperan y confían en que el anuncio hecho por el presidente de la República en vísperas de las elecciones de proceder a una profunda revisión de los códigos comunales y de las *wilayas* (...) para dar más prerrogativas a los cargos electos locales y permitirles desempeñar plenamente su papel se ponga rápidamente en práctica.

La otra gran pregunta se refiere a las otras grandes reformas prometidas en los dos últimos años. (...) Además de la crisis política (...), la madre de todas las reformas es la de la economía. (...)

(...) Argelia ha perdido un tiempo precioso. La inversión productiva está paralizada y no se puede hacer nada si no se relanza. Las cifras (...) son asombrosas: habría 2.500 proyectos de inversión a la espera de la aprobación del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), que no se reúne desde hace dos años. Su valor total es al menos el equivalente en dinares a 90.000 millones de dólares.

Al anunciar la inminente revisión de los códigos comunales y de las *wilayas*, el jefe de Estado, Abdelmayid Tebún, anunció también que ‘el año 2022 se dedicará a las reformas estructurales de la economía’.

No es casualidad que haya hecho este doble anuncio unas horas antes de la apertura de las urnas. Sin estos dos ajustes, el funcionario electo local, por muy competente y honesto que sea, solo reproducirá los fracasos de los que le precedieron.” ■



LA RED DE GRUPOS DE REFLEXIÓN DEL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL



Ante la necesidad de promover el diálogo y la investigación para favorecer la integración regional y la cooperación en el Mediterráneo occidental, en el año 2016 la red de think tanks del Mediterráneo occidental MedThink 5+5 fue creada por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) con el apoyo de más de 30 think tanks y centros de investigación

pertencientes a los diez países del Mediterráneo occidental. Colaborando de cerca con el Foro del Mediterráneo occidental o Diálogo 5+5, la red MedThink 5+5 se configura como una plataforma única que da soporte experto a las necesidades que surgen en el marco del Diálogo 5+5, a la par que posibilita la reflexión y el diálogo a través de diversas conferencias, seminarios y eventos con actores principales de la región.

La red MedThink 5+5 sirve también como una plataforma conjunta de investigación y difusión que permite informar los procesos de toma de decisión de los líderes políticos que participan en el Foro del Mediterráneo occidental. Además, su posición ideal intermedia le permite canalizar tanto las demandas de la sociedad civil hacia la esfera de las políticas públicas, como viceversa.

ACTIVIDADES RECIENTES

WEBINAR - De la crisis a la recuperación en el Mediterráneo occidental: Retos y oportunidades en el camino hacia el crecimiento sostenible después de la Covid-19

WEBINAR - Aumentar la resiliencia a las crisis sanitarias mediante la cooperación reforzada en el Mediterráneo occidental: el papel del diálogo 5+5 en la era post-Covid-19

FORO - Fomentar las alianzas innovadoras en el Mediterráneo occidental: nuevas oportunidades para un futuro sostenible

INFORME- El nexo agua-energía-seguridad alimentaria en el Mediterráneo occidental: desarrollo y sostenibilidad en la región 5+5

SEMINARIO TEMÁTICO - Camino hacia la integración: transporte y logística en el Mediterráneo occidental



SECRETARIADO DE LA RED MEDTHINK 5+5

Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)

Girona, 20 08010 Barcelona

www.medthink5plus5.org

medthink5plus5@iemed.org

T (+34) 93 244 98 50



Crisis en Líbano

“[Gracias al juez Bitar] por primera vez, tenemos una batalla por la independencia judicial y los derechos de las víctimas. Otra evidencia del cambio total de paradigma de la política libanesa desde 2019”.

ENTREVISTA con Nizar Saghieh por Oriol Andrés Gallart (Beirut-Líbano)

Nizar Saghieh lleva dos décadas trabajando para transformar Líbano en un país mejor, como activista por los Derechos Humanos y también desde su rol como abogado y fundador de la organización Legal Agenda. Sus causas incluyen los derechos de las víctimas de la guerra civil, de las mujeres, de las personas LGTBIQ y de los migrantes. También la prostitución o las drogadicciones. A través de litigios estratégicos, ha luchado por conseguir reivindicaciones laborales, medioambientales o de grupos minoritarios.

Y, sobre todo, nunca ha dejado de abogar por la independencia de la justicia. Ahora menos que nunca, cuando el país afronta un histórico proceso judicial por la explosión en el puerto de Beirut del 4 de agosto de 2020, que mató a más de 200 personas, hirió a miles y devastó parte de la ciudad. Una batalla inédita contra la impunidad de la élite política –según lo describe Saghieh– que podría hacer tambalear el sistema de repartición sectaria del poder, corrupto y clientelar, vigente desde el final de la guerra civil (1975-1990). Tampoco contempla abandonar el país, pese al éxodo masivo que sufre un Líbano en caída libre. Más de la mitad de la población se hunde por debajo del umbral de la pobreza, privada de sus ahorros por un “corralito” bancario evitable y en medio de una creciente escasez de productos básicos, como la gasolina o las medicinas. La moneda se ha devaluado un 90% en apenas dos años. Todo

ello, ante la pasiva indiferencia de los líderes sectarios, que tras provocar el hundimiento, ahora se muestran solo interesados en su propia supervivencia. Contra ellos, Saghieh salió a la calle durante las jornadas de entusiasmo revolucionario posteriores al 17 de octubre de 2019. De hecho, nunca ha dejado de salir, ni antes ni después de esos días. Y recuerda con una sonrisa: “antes éramos pocos a oponemos al régimen, ahora somos muchos. Podemos decir que vamos caminando hacia la democracia”.

ORIOLO ANDRÉS GALLART: *Últimamente se ha popularizado mucho la reflexión de Antonio Gramsci de “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. En el caso de Líbano, parece especialmente pertinente. ¿Cree que Líbano está en la fase de claroscuro o aún está atrapado en el viejo mundo?*

NIZAR SAGHIEH: El viejo mundo fundado y basado en la figura de los líderes no existe más. Esa relación tan particular entre el pueblo y seis o siete líderes que lo dominan todo, que controlan la esfera y el debate público, es mucho más débil. Sigue perviviendo quizás en torno a la figura de [el chif] Hasan Nasralá o en los más feudales como [el druso] Walid Jumblatt, pero en general se está desvaneciendo en todas las confesiones, sobre todo desde octubre de 2019. La idea de que mi líder es mi líder so-

lo porque siempre lo ha sido, ya no se da por válida. Llevará tiempo, pero los ciudadanos están clamando que no creen más en estas personas y que no buscan sustituirles con otros líderes.

El problema es que este modelo está siendo remplazado por un sistema basado en la violencia. Porque estos líderes continúan gobernando y –seamos realistas– se están preparando para ganar las elecciones de nuevo, sin importarles los medios para lograrlo. El sistema desplegará todas sus capacidades y fuerzas para mantener el poder. Este no será más un régimen basado en la popularidad de los líderes sino en su capacidad para mantener las cosas en su estado actual. Los libaneses están emergiendo como ciudadanos. Y hay una nueva tensión entre este “ser ciudadano” y el viejo régimen.

O.A.G.: *Según el Banco Mundial, la crisis económica de Líbano es una de las peores a nivel mundial desde mediados del siglo XIX. En un momento de emergencia social así, ¿cree que los líderes pueden intentar recuperar el favor de los ciudadanos a través de potenciar su sistema clientelar?*

N.S.: No será como antes. Es como quien venera a unos dioses y de golpe descubre que sus dioses son demonios. Y es que la relación de la población con los líderes no se basaba solo en el interés, sino que había un componente emocional fuerte. Pero desde el colapso económico y la

7 Están naciendo partidos democráticos que pueden ganar poder e incluso elecciones, pero no a corto plazo

explosión en el puerto, la población ha visto la cara real de estos líderes, su repugnancia y lo horrible de sus planes y su sistema. Cuando las máscaras han caído, es muy difícil volver a venerar a estos dioses.

Así que ahora están intentado recuperar el apoyo de sus antiguos seguidores, pero incluso aquí se está dando una renegociación de las condiciones. Los líderes ya no pueden contar con una lealtad incondicional de su comunidad. Ahora dependen de su capacidad para proveerles o para dominarlos. Y esto es un cambio esencial, desde mi perspectiva. Hay que tener en cuenta que, históricamente, los beneficios que los líderes ofrecían a sus seguidores eran a costa del Estado, nunca de sus propios bolsillos. Lo sacaban de lo que consideraban su porción de pastel en los recursos públicos. Con la situación actual, será más costoso para estos líderes mantener el sistema clientelar. Y, sin duda, en paralelo, empezarán a recurrir a formas diversas de violencia con tal de mantener su dominio.

O.A.G.: *¿No ve pues posible un retorno al 'statu quo' previo a octubre de 2019?*

N.S.: Es imposible, ya que implicaría recuperar el mismo nivel económico anterior y, a estas alturas, resulta obvio que nos estaban engañando con una falsa prosperidad: con el dinero de las remesas exteriores, los bancos estuvieron prestando por encima de sus posibilidades hasta que llegó el colapso. Nos hemos convertido en una sociedad de víctimas, una sociedad donde todos sufren: hemos perdido ahorros, ingresos, empleo, familias...

O.A.G.: *Mencionaba un aumento de la violencia. ¿Cree que va a haber un retroceso en los derechos civiles?*

N.S.: Cuando hablo de violencia, me refiero al fin de un poder blando sin prácticamente tensión entre el gobierno y el pueblo. Ahora esta tensión existe y se transforma en violencia. En consecuencia, sin duda las libertades civiles van a sufrir un retroceso en los próximos años. Lo que está por ver es qué tipos de violencia vamos a presenciar y sufrir. En esto, creo que cada líder va a optar por vías distintas y no necesariamente pasa por la persecución de la disidencia. Por ejemplo, pueden recurrir a relaciones de dependencia, ya que uno de los mecanismos con que cuentan es el control de los recursos, como ya ha pasado con el gas o la gasolina. Esto en el fondo es una forma de violencia ya que impiden a la población cubrir sus necesidades básicas. Cualquier derecho que dábamos por garantizado –social o económico– está retrocediendo, no nos quedan ni los más elementales.

O.A.G.: *De los movimientos sociales que confluyeron en las protestas de 2019-2020, han surgido diversas formaciones políticas independientes. ¿Cree que pueden convertirse en una alternativa real al actual régimen?*

N.S.: Una nueva vida política está naciendo y ha traído nuevos partidos democráticos que, con el tiempo, pueden ganar poder y quizás incluso futuras elecciones, pero no a corto plazo. Hasta ahora, los nuevos partidos se han focalizado más en lo que les diferencia que en lo que les une. Creo que estas fuerzas democráticas

necesitan madurar y aprender a gestionar la discrepancia y a priorizar qué luchas merecen la pena. Hay otro elemento importante, la mayoría de sus miembros se han ido a vivir al extranjero. Se da la paradoja de que los habitantes de Líbano ya no pueden más, mientras que la diáspora cada vez tiene mayor interés por lo que ocurre dentro del país. Podemos decir, pues, que los recursos que no están en manos de la élite se encuentran en el extranjero. La clave está en movilizar estos recursos para un nuevo proyecto político.

De momento, uno de los debates sobre la mesa es si la diáspora podrá votar en las elecciones. Por ahora, [la clase dirigente] está haciendo todo lo posible para evitarlo ya que saben que les será muy difícil conseguir sus votos. Estoy seguro de que nos dirigimos hacia las elecciones más corruptas y menos democráticas de la historia de Líbano. Porque la élite en el poder hará cualquier cosa para no perder su posición.

O.A.G.: *Lo que sí ha supuesto ya un cambio tangible son las victorias de listas opositoras en colegios profesionales y en sindicatos de estudiantes de universidades privadas...*

N.S.: Hay quien piensa que los movimientos ciudadanos surgidos tras lo que se llamó la revolución de octubre de 2019 han naufragado. En mi opinión, el espíritu de la oposición al régimen pervive en cada institución.

El ejemplo más claro es el del colegio de ingenieros, donde más de un 80% de sus miembros votó en contra de los partidos de la élite. Y esto es impresionante porque antes, el total de

La clave está en movilizar los recursos [en el extranjero] para un nuevo proyecto político

los asientos estaban copados por estas formaciones [oficialistas]. Les han echado y esto es muy importante ya que este colegio tiene más de 50.000 personas registradas. Sin embargo, no podemos olvidar que tanto en las universidades privadas como en los colegios profesionales, hay principalmente personas de clase media. Una primera conclusión es que la clase media está contra el régimen. Pero a la vez, no se puede olvidar que esta clase media tiene capacidad para votar aquello que quiere, las elecciones son más libres. Estas victorias no tienen por qué repetirse en unas elecciones generales en unos tiempos tan difíciles como los actuales, en que la tasa de pobreza es muy alta y mucha gente ha perdido sus ingresos y sus ahorros. La clase media ha disminuido y las clases pobres dependen cada vez más del poder. En consecuencia, veo difícil que los próximos comicios sean libres.

O.A.G.: *Los familiares de las víctimas de la explosión del puerto están encabezando un movimiento por la justicia y la verdad que, por transversalidad y apoyo social, no tiene precedentes en Líbano. ¿Es en su opinión la lucha más importante que se está dando actualmente en el país?*

N.S.: Sin duda es la batalla más activa y vibrante. Y tiene muchas dimensiones, en realidad. Las víctimas de la explosión representan de alguna manera a todas las víctimas de Líbano, ya que se han esforzado mucho para superar la división sectaria clásica.

Pero lo que es realmente excepcional en Líbano es tener un juez [el instructor Tarek Bitar] que inspira con-



Nizar Saghieh, abogado y activista, durante la entrevista. Beirut, octubre de 2021./ELSIE HADDAD

fianza. A los jueces, la población normalmente los considera corruptos, los ven como parte del sistema. Pero el pasado 4 de agosto, por primera vez en la historia de Líbano, decenas de miles de personas aplaudieron al juez durante el aniversario de la explosión.

Por primera vez, tenemos lo que denominaríamos una batalla sobre las inmunidades que significa una batalla contra el sistema de impunidad. Una batalla por la independencia judicial y los derechos de las víctimas. Por ejemplo, en 2005, tras el asesinato de Rafik Hariri, ¿cuál era el debate? Era entre los bloques políticos del 14 de Marzo y el 8 de Marzo, es decir, entre líderes sectarios. Hariri, uno de los líderes suníes, fue asesinado. Y el potencial acusado era Hezbolá, formación líder de los chiíes. Ahora, el discurso es otro. Ya no es

un conflicto sectario entre líderes sino que son las víctimas enfrentándose a los líderes y a su sistema de inmunidad. Y en medio de ello, está el poder judicial.

Con un tribunal internacional, no tienes la oportunidad de reformar tus instituciones. Sea cual sea su resultado, no tendrá impacto en el sistema judicial libanés ni en las instituciones del país. Ahora en cambio, tenemos un gran conflicto público sobre la independencia del juez Bitar y los ataques que está recibiendo por parte de una clase política que está haciendo lo imposible para obstaculizar y parar la investigación. Este debate es muy importante, nunca habíamos presenciado algo así. Es otra evidencia del cambio total de paradigma que ha experimentado la política libanesa desde el 17 de octubre de 2019.

La comunidad internacional debe dejar de legitimar a la gente que ha destruido Líbano

O.A.G.: *¿Puede este caso judicial ser el punto de partida para empezar a construir una democracia en Líbano?*

N.S.: Este es el objetivo, sin duda. Quizás el juez Bitar consiga llegar a alguna conclusión, probar algo... o quizás quede atascado, le paren... o sea asesinado. Pero por ahora algo inusual está pasando, nunca antes habíamos tenido un héroe judicial. Bitar representa el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, la democracia, una figura que puede parar a los políticos. Simboliza todo esto para unos ciudadanos desesperados por encontrar a alguien que ponga fin a los abusos de poder.

O.A.G.: *Ha dicho que el juez Bitar podría ser asesinado. ¿Lo ve posible?*

N.S.: Podría pasar. Tarek Bitar gozaba del respeto de todos los partidos al inicio. Pero entonces decidió procesar a exministros que durante su cargo habían sabido de la presencia del material en el puerto y no hicieron nada pese a que era su competencia. El juez pidió que se les retirara la inmunidad. Inmediatamente [desde la élite política] empezaron a preparar una campaña en su contra para dañar su reputación: se le acusó de ser un mal juez, politizado, de tener una agenda contra Hezbolá y otros partidos. Ha habido intimidaciones contra el juez e incluso amenazas directas por parte de un dirigente de Hezbolá. Primero intentarán quitarlo a través de vías legales. Pero si no lo logran, veremos un aumento de la violencia. Necesitan bloquearlo a toda costa.

O.A.G.: *En este sentido, el pasado 14 de octubre, una manifestación de Hez-*

bolá y Amal –partidos confesionales chiíes– terminó con enfrentamientos armados en las calles de Beirut con miembros del partido/ex-milicia Fuerzas Libanesas, de base confesional cristiana. Murieron siete personas. ¿Cómo interpreta esos enfrentamientos? ¿Cree que pueden derivar en un espiral de violencia?

N.S.: La manifestación fue una vuelta de tuerca más en la protesta violenta contra el juez. El mismo Hasán Nasrallá hizo una comparecencia previa muy agresiva, declarándose impaciente acerca de la revocación de Bitar. Por su parte, Fuerzas Libanesas estaban muy bien preparados para esa protesta, con la idea de transmitir el mensaje de que ellos protegen a la comunidad cristiana. Todo eso, muy cerca de una zona sensible, Ain Al Remmaneh, donde empezó la guerra civil en 1975. Y con un discurso del odio muy peligroso.

Al final, el incidente sirvió a Fuerzas Libanesas para erigirse en su rol protector mientras que los otros [Hezbolá y Amal], lo usaron para intentar probar que este caso se está volviendo peligroso, porque puede causar más asesinatos e inestabilidad y que el juez Bitar está provocando conflictividad social. Por un lado, el incidente fue una advertencia de lo que podría suceder si Bitar no es apartado. Por otro, fue un intento de devolver el caso de la explosión a una lógica sectaria, en la que los líderes se sienten más cómodos.

O.A.G.: *La comunidad internacional condicionaba el desbloqueo de miles de millones en fondos de ayuda para Líbano a la formación de un nuevo gobierno. Tras 13 meses de vacío, en*

septiembre, Nayib Mikati logró conformar uno, con él como primer ministro. ¿Teme que estos fondos puedan convertirse también en una tabla de salvación para la élite política actual?

N.S.: ¿Alguien se cree que se pueden solucionar los grandes problemas de Líbano con las caras de siempre? Nayib Mikati es uno de los rostros del problema. El primer proceso por enriquecimiento ilegal [en el país] fue contra él. Mikati es el hombre más rico de Líbano y construyó su fortuna durante las últimas décadas, durante la ocupación siria y después. Así que, ¿realmente alguien cree que este gobierno puede abrir la puerta a la rendición de cuentas, o a una distribución justa de las pérdidas [por el corralito]? Es un banquero, con muchas participaciones en el Banco Audi. Así las cosas, ¿por qué Francia le apoya, y a través de Francia, los [gobiernos] europeos?

Se puede entender que la comunidad internacional tenga sus reservas sobre las fuerzas políticas emergentes, necesita asegurarse que son representativas. Pero esto nos sitúa ante un problema: tenemos unas fuerzas políticas nuevas que aun no han demostrado su legitimidad, pero en cambio las viejas fuerzas sí que han demostrado que son, sin duda, ilegítimas.

Yo creo que Líbano necesita gente competente y honesta, comprometida con el interés público y que no venga solo a reproducir y proteger el modelo de siempre. Entiendo que esto es muy difícil. Pero lo que pedimos a la comunidad internacional es que deje de dar legitimidad a la gente que ha destruido Líbano. Y esto sí creo que tiene que ser una obligación. ■

- 14 Túnez: el giro autoritario
- 18 Kais Said se impone como ‘salvador del pueblo’
- 22 Ennahda se enfrenta a su peor crisis
- 26 La década perdida de la economía tunecina
- 30 Europa y el julio tunecino



أعضاء حكومة بونودون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

El presidente Kais Saïd anuncia en la televisión pública la formación del nuevo gobierno. Palacio de Cartago, Túnez capital, 11 de octubre de 2021./AFP VIA GETTY IMAGES

Túnez: ¿democracia o autoritarismo?

El 25 de julio de 2021, el presidente Kais Saïd, invocando el artículo 80 de la Constitución que prevé la instauración de un “Estado de excepción” ante un “peligro inminente”, dio un golpe de fuerza –de Estado para muchos analistas– y concentró todos los poderes. El argumento: devolver a Túnez a la senda democrática en la que el pueblo, aquel que salió a la calle en la revolución de 2011, sea el centro de las políticas. En un primer momento, sus medidas fueron bien recibidas por un sector de la población desencantado con los gobiernos de la transición, acechado por la crisis económica –la tasa de paro supera hoy el 18%– y sanitaria. Sin embargo, los pasos dados en estos meses han supuesto para muchos un

retroceso en los derechos y libertades adquiridos y han sumido al país en un autoritarismo cuyo desenlace es incierto.

Mientras, el partido islamista Ennahda, actor ineludible de la vida política de los últimos años y que podría hacer de contrapeso a Saïd, se encuentra al borde de la escisión, acechado por las guerras internas.

Ante este panorama, la Unión Europea debería plantearse, a corto plazo, cómo recalibrar sus relaciones con Túnez si la democracia descarrila. A más largo plazo, debería ayudar a modernizar la economía, impulsar la democracia parlamentaria y el poder local, además de presionar a los actores externos que intentan influir en la política tunecina.

Túnez: el giro autoritario

Kais Said ha desestabilizado la vida política y a sus actores. Su éxito depende de su capacidad de responder a las expectativas de un país ahogado por la deuda y la crisis económica.

Khadija Mohsen-Finan

En Túnez, el año 2021 quedará marcado por la presidencialización del régimen decidida por Kais Said la tarde-noche del 25 de julio, un giro espectacular en la vida política del país que margina al Partido Desturiano Libre (PDL) de Abir Musi y acelera la descomposición de Ennahda. La escena política se redefine mientras que las expectativas sociales no se satisfacen y la crisis económica se agrava considerablemente.

Presidencialización del régimen político

Qué sucedió en la tarde-noche del 25 de julio de 2021? ¿Un golpe de Estado? ¿Un golpe de efecto? En una reunión de urgencia en su palacio de Cartago, el jefe del Estado, Kais Said, decidió suspender, durante 30 días, las actividades del Parlamento en el que el partido islamista Ennahda desempeñaba un papel clave, retirar la inmunidad a los diputados y destituir a su primer ministro, Hichem Mechichi. Mediante este acto sin precedentes en la historia política del país, marginaba al Parlamento y a su presidente, Rachid Ghanouchi, con el que mantenía unas pésimas relaciones, y deponía al jefe del gobierno, al que él mismo había elegido un año antes y con el que ya mantenía un conflicto abierto.

De hecho, para lograr la confianza del Parlamento, el primer ministro Mechichi se había acercado al partido Ennahda, mayoritario en el Parlamento, una proximidad que Kais Said consideró una traición. En enero de 2021, Mechichi tomó la decisión de remodelar su gobierno eligiendo a ministros que el jefe del Estado sospechaba que eran corruptos y que se negaba a que juraran el cargo. Estos conflictos y tensiones entre los tres pilares del poder –el jefe del Estado, el jefe del gobierno y el presidente del Parlamento– afectaron al funcionamiento de la vida política: en el seno del gobierno, nueve ministerios tuvieron un ministro en funciones, y el Parlamento, donde se vivía una violencia física y verbal, ofrecía un espectáculo aterrador, que hizo que muchos tunecinos pidiesen su disolución. Todos estos elemen-

tos reflejaban una crisis política sin precedentes que provocaba inmovilismo e impotencia pública, mientras la segunda ola de la Covid-19 diezma a una población muy poco vacunada.

El 20 de julio, cuando los hospitales estaban saturados y el país registraba cerca de 300 muertos al día, el jefe del gobierno destituyó a su ministro de Sanidad, Fauzi Mehdi.

La exasperación de los tunecinos, que ya sufrían los efectos de la crisis económica y social, sumada a la inacción política y a la crisis sanitaria, explican el fervor con el que numerosos tunecinos acogieron la decisión adoptada por Kais Said. En ese preciso momento, parecía capaz de sacar a los tunecinos de la pesadilla de la impotencia pública.

Sin embargo, el escepticismo se apoderaba de los intelectuales que se preguntaban en virtud de qué “peligro inminente” el jefe del Estado había aplicado el artículo 80 de la Constitución, porque según el texto, en esas circunstancias, debía consultarse al jefe del gobierno, al presidente del Parlamento y al del Tribunal Constitucional. Ahora bien, los dos primeros afirman que no se les informó, y el Tribunal Constitucional nunca se constituyó. ¿Habría actuado al margen de las normas constitucionales Kais Said, un antiguo profesor de derecho Constitucional conocido por su puntillosidad en la aplicación de la ley fundamental?

Además, el jefe del Estado decretó el Estado de emergencia apoyándose en la policía y el ejército. Ahora bien, la policía, al apoyar al ejecutivo, recuerda a la oscura época del antiguo régimen, y al ejército siempre se le ha mantenido al margen de la toma de decisiones políticas, puesto que su asociación con el juego político podría suscitar un deseo de poder entre algunos altos mandos del ejército. ¿No estará Túnez, cuna de la revolución, que había iniciado la transición democrática, cayendo de manera lenta pero segura en el autoritarismo?

La pregunta es más pertinente si cabe, ya que dos meses más tarde, a finales de septiembre, Kais Said adoptó unas nuevas disposiciones excepcionales que reforzaban sus poderes en detrimento del gobierno y del Par-

lamento. El decreto 117 precisa que los textos legislativos se adoptarán mediante decretos leyes y los promulgará el presidente de la República. El texto establece también que el presidente ejerce el poder ejecutivo con la ayuda de un consejo de ministros dirigido por un jefe del gobierno, y que el jefe del Estado preside ese consejo, pero puede delegar su presidencia en el jefe del gobierno. El presidente de la República nombra y destituye a los ministros, designa a los diplomáticos, realiza los nombramientos en la Alta función pública y el gobierno es responsable ante él.

Es una presidencialización reforzada de un sistema que era híbrido, es decir que el Parlamento, que se supone que representa al pueblo, tenía un amplio poder, pero el jefe del Estado era elegido por sufragio universal y elegía al primer ministro, que era, en cierta manera, el punto de equilibrio de este régimen regido por la Constitución de 2014.

Kais Said decidió romper con ese régimen, y ahora concentra todos los poderes precisando que “el objetivo de estos proyectos de revisión debe ser establecer un verdadero régimen democrático en el que el pueblo sea definitivamente el titular de la soberanía y la fuente de los poderes que ejerce a través de los representantes elegidos o por vía de un referéndum”.

Estado de excepción no limitado en el tiempo

El presidente Said no tiene un programa concreto, no muestra ninguna visión y su proyecto, que se intuye por la falta de una comunicación clara, parece una promesa. Esta promesa implícita que Kais Said les hace a los tunecinos equivale a una reparación de lo que se ha hecho desde 2011, sobre todo en cuanto al olvido del pueblo.

Con su estilo convenció a una mayoría de tunecinos para que le votaran en 2019, cuando las elecciones se celebraron en un contexto muy particular. De hecho, en las elecciones municipales de 2018 y las presidenciales y legislativas de 2019 se consagraron unas figuras ajenas al mundo político: unos cargos electos municipales “independientes” y sin afiliación política, y dos candidatos finalistas en las elecciones presidenciales que son figuras populistas, como Kais Said y Nabil Karui, que no tienen mucho en común salvo que sitúan al pueblo en el centro de sus preocupaciones y de sus proyectos. Kais Said, enmarcado en la tradición populista, fue elegido por una amplia mayoría para ocupar la presidencia del país, con el 72,73% de los votos emitidos.

Su discurso fue bien recibido por todos aquellos tunecinos que piensan que el cambio que debía mejorar



El jefe del Estado, Kais Said, preside la ceremonia de conmemoración del 58º aniversario del Día de la Evacuación. Bizerta, 15 de octubre de 2021. /YASSINE GAIDI/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

su vida tras la revolución no se ha producido. El desempleo ha empeorado, el país está sumido en el desorden y la corrupción se ha generalizado, y sufren la carestía de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la impunidad. En este contexto, consideraron a Said, que se aprovechó del mal gobierno del país, un hombre providencial, un salvador.

En efecto, ante esta situación caótica, este profesor de derecho Constitucional, totalmente ajeno al mundo político, mostró su integridad y su rechazo hacia las instituciones y los partidos políticos. En su rechazo a la democracia representativa, se asemeja a otros populistas de todo el mundo que consideran que las instituciones políticas son un obstáculo para la expresión de la voluntad popular. También comparte otras características con figuras populistas a las que les gusta simplificar hasta el extremo las situaciones y estigmatizar a las élites, así como un pensamiento que refleja paradójicamente una adhesión a un conservadurismo desacomplejado y con referencias revolucionarias. Evidentemente, todos tienen en común un relato en el que se da prioridad al pueblo. Kais Said dice claramente: “La vía que voy a trazar es la que ha querido el pueblo”.

Pero lo que resulta engañoso en el caso de estas figuras populistas es que la centralidad del pueblo en su discurso no los convierte en demócratas, y se pueden mostrar autoritarios cuando el momento lo exige. Kais Said es a día de hoy el único al mando, ya que el ejecutivo y el Estado se reducen a su persona, no rinde cuentas a ninguna institución, habla en nombre del pueblo con el que

se identifica y decide si existe un peligro inminente para el país; de ahí la necesidad de decretar un Estado de excepción que no está limitado en el tiempo. Y dado que no existe un Tribunal Constitucional, actualmente no hay ninguna instancia superior para determinar la constitucionalidad de las leyes y de las decisiones que adopta.

Por tanto, este momento concreto se enmarca dentro del Estado de excepción durante el cual las normas legales previstas para proteger las libertades y el funcionamiento del Estado quedan suspendidas. Pero, como no está limitado en el tiempo, podría convertirse en un modo de funcionamiento, lo que Pierre Hasner llama “el Estado de excepción permanente”.

Dificultades para gobernar

Aunque el presidente Said haya nombrado a una mujer primera ministra, Najla Buden, y ella haya formado un gobierno, queda mucho para que desaparezcan las dificultades para gobernar el país. El gobierno, compuesto por más de un tercio de mujeres, expertas y tituladas pero con poca experiencia política, afirma que quiere abordar de manera prioritaria la corrupción que gangrena al país y realizar las reformas necesarias. Su labor, y la del jefe del Estado, no es fácil, ya que debe reconstruir y arreglar todo aunando libertad y autoridad. Y también tiene que gobernar teniendo en cuenta a ese “pueblo soberano”, que es un postulado de 2011, pero que él ha decidido convertir en el centro de su discurso y de su proyecto.

Para responder a las expectativas de ese “pueblo soberano”, Said no tiene un programa elaborado, sino que su proyecto, formulado durante su campaña electoral de 2019, consistía ya en devolverle la palabra a la ciudadanía. Su “llamamiento al pueblo” se sitúa en una perspectiva alternativa a la democracia representativa, una especie de democracia popular, que consiste en cambiar drásticamente el sistema institucional afianzando la legitimidad a nivel local mediante unos consejos elegidos por un sistema de votación uninominal, de los que emanarían unos consejos regionales y, por último, una Asamblea Nacional. Cree que esta pirámide de poderes invertida podría ser el medio más eficaz para marginar a las élites corruptas y movidas por sus pequeños intereses políticos.

Y más concretamente, sin partido político, sin tropas y sin aliados políticos, ¿cómo pretende Kais Said reactivar un país que necesita numerosas reformas y respuestas a las expectativas de los tunecinos? El país que debe gobernar también se encuentra en un entorno regional en plena transformación.

Por el momento, el proyecto político de Kais Said parece desestabilizar la vida política tunecina y a sus principales actores, y en particular a los jefes de los partidos políticos como Rachid Ghanuchi (Ennahda), y también a Abir Mussi (PDL), sin que su popularidad se resienta. Pero su relación con el pueblo está condicionada por su

capacidad para responder a las expectativas sociales de un país ahogado por la deuda y la crisis económica.

Ennahda: la erosión de un partido antiguamente arraigado en la vida política

Aunque el partido se creó en 1981 con el nombre de Movimiento de la Tendencia Islámica (MTI), el movimiento islámico tunecino se remonta a finales de la década de los sesenta con el nombre de la Yamâa al Islamiyya. Se convirtió en Ennahda en 1988, cuando el movimiento, siempre dirigido por Rachid Ghanuchi, decidió participar en el Pacto Nacional establecido por Zine el Abidin ben Ali ese año. Sería expulsado del mismo un año más tarde, por lo que tuvo que operar en la clandestinidad, y sus jefes se vieron obligados a exiliarse.

En 2011, regresó a la escena política aprovechando la revolución. El partido ganó ampliamente las primeras elecciones libres de octubre de 2011, gobernó de manera hegemónica, reprodujo el nepotismo del régimen de Ben Ali y se dejó superar por la derecha por los salafistas, que cometieron actos muy violentos. Los asesinatos políticos de dos figuras de la izquierda, Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, que siguen impunes, hicieron que una parte de los tunecinos asociara Ennahda a los salafistas por su laxismo frente a la violencia y la inseguridad que se instauraban. En 2013, el gobierno, dirigido por Ali Laarayedh, se vio obligado a dimitir por la presión de una parte de la sociedad civil que se organizó y propuso un diálogo nacional. Desde entonces, la principal preocupación de Rachid Ghanuchi, su jefe histórico, ha sido mantener a su formación política en la escena política y “normalizar” la imagen de Ennahda.

En 2014, cuando el bando modernista ganó las elecciones, firmó un acuerdo con Beyi Caid Essebsi para formar un gobierno compuesto por ministros de ambos partidos, Nida Tunes, el partido modernista, y Ennahda. Dos años después, en 2016, en el congreso de Ennahda, Ghanuchi llegó más lejos porque su formación se definió como un partido civil, abandonando así sus actividades tradicionales de predicación religiosa. Y fue un verdadero seísmo para sus bases, ya que el partido se reformó profundamente y su identidad ya no era la misma.

Los islamistas de Ennahda, como las demás formaciones políticas con las que tuvieron que gobernar, fracasaron. Se trata de un fracaso debido básicamente al terrible abandono de la cuestión social y al hecho de no haberse planteado nunca la reforma del sistema económico. Y a eso se le suma una verdadera crisis de identidad. Todos esos factores provocaron un deterioro de su base electoral: entre 2011 y 2019, el partido perdió dos tercios de su electorado y cerca del 40% de sus escaños en la Asamblea.

Las maniobras políticas de un Rachid Ghanuchi dispuesto a todo para mantenerse en el juego político fueron criticadas, incluso internamente. Lotfi Zitun, uno de sus principales asesores, dimitió en 2019 para de-

nunciar la manipulación de las listas por parte de Ghanuchi para presidir el Parlamento. Otros, como Samir Dilu, exministro y portavoz de Ennahda, expresaron sus críticas sobre su presidencia de la Asamblea, afirmando que Ghanuchi contribuyó al desorden que reinó en la Asamblea durante dos años.

Por tanto, fue un partido dividido y debilitado el que tuvo que enfrentarse al golpe de Estado de Kais Said en julio de 2021, mediante el cual el jefe del Estado no atacó directamente al partido islamista, pero consiguió marginarlo paralizando las actividades del Parlamento. Rachid Ghanuchi, que había apoyado claramente al primer ministro Mechichi, está con el agua al cuello (El 27 de febrero, en plena crisis sanitaria, Ennahda había organizado una gran concentración para apoyar a Hichem Mechichi).

Los problemas se le acumulan al partido: Ennahda está totalmente desacreditado ante la opinión pública, lo consideran el responsable de las desgracias de los tuneños y es el blanco del descontento. Su jefe, Rachid Ghanuchi, es muy criticado por los dirigentes del partido por su autoritarismo y por no escuchar, incluso después del 25 de julio de 2021. En agosto disolvió el comité ejecutivo y lo reconstituyó sin debate. Las investigaciones judiciales abiertas –una investigación por recibir fondos extranjeros para financiar su campaña electoral de 2019 y una acusación de obstrucción a la justicia en los casos de los asesinatos políticos de Chokri Belaid y Mohamed Brahmí en 2013– afectan a dirigentes y simpatizantes de Ennahda. El partido, que siempre ha buscado la respetabilidad, ha perdido todo su crédito.

Así pues, el que debía responder a la acción del jefe del Estado en julio de 2021 era un hombre aislado y desacreditado. La estrategia de Rachid Ghanuchi osciló entre el llamamiento al diálogo y la presión mediática. Acudió a la sede del Parlamento con algunos diputados, pero el ejército les negó el acceso. Sin embargo, el golpe más duro lo recibió de su propio bando el fin de semana del 25 al 26 de septiembre, cuando 113 dirigentes abandonaron Ennahda de manera colectiva. Mediante un comunicado, informaron de que la línea que seguía Rachid Ghanuchi no era la suya, e incluso le responsabilizaban explícitamente de la situación del país. Samir Dilu llegó a decir que Ennahda “se asemejaba a una secta dirigida por un gurú”.

¿El movimiento islamista, que tiene cerca de medio siglo de antigüedad, está llamado a desaparecer o a reaparecer bajo una nueva forma? En este momento, su descomposición, que se enmarca dentro del declive global del islam político, deja vía libre a Kais Said.

Los límites al poder de Kais Said

El éxito de la intentona de Said depende de dos elementos claves relacionados entre sí. A corto plazo, y a la espera de una política económica, debe responder a las expectativas sociales y sacar al

país del estancamiento económico. Para ello, tiene que encontrar suficiente dinero para satisfacer las deudas del país, pagar a los funcionarios y crear empleo urgentemente.

Esta exigencia está vinculada con la relación de confianza que consiga crear con las instituciones financieras internacionales y con los países que podrían estar dispuestos a acudir en ayuda de Túnez.

El presidente Said, que se ha arrogado todos los poderes, hereda una deuda pública muy importante. Según el Banco Mundial, entre 2010 y 2020, la proporción de la deuda pública con respecto al PIB se ha más que duplicado, aumentando del 40,7% al 87,6%, y el peso de la deuda supera hoy el 100% del PIB. Todos los indicadores están en rojo, y el país se ha visto golpeado de lleno por la pandemia cuando ya sufría la crisis del turismo, un sector afectado por la inseguridad y los atentados en 2015.

En 2020, la Covid-19 afectó gravemente al país e hizo caer el PIB. La caída fue muy acusada un año más tarde en el sector de la industria (-10,7 %) y de los servicios (-10,5 %), y un poco menos en el sector agrícola. Este descenso afectó duramente a la mitad de los hogares, y la tasa de desempleo se incrementó del 15% al 17,8% de la población activa alcanzando unas cifras mucho más elevadas en el Sur del país. Sin duda, Túnez necesita una reactivación y dinero fresco en un plazo muy corto. El gobierno de Mechichi y el Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciaron unas negociaciones para un cuarto préstamo desde 2011, con el aval de Estados Unidos, pero Said puso fin a este plan de financiación del presupuesto de 2021 que se basaba en un acuerdo con el FMI. ¿Cómo piensa encontrar el gobierno los 2.400 millones de dólares que necesita para cerrar su presupuesto de 2021?

En los últimos meses, el préstamo nacional ha ayudado al país, pero antes del 31 de diciembre, Túnez debe encontrar 10.000 millones de dinares (3.000 millones de euros) para completar su presupuesto de 2021. La clase política tendrá que buscar parte de esta suma entre los acreedores habituales, como el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) o las agencias de desarrollo alemana y francesa (GIZ y AFD, respectivamente), en forma de préstamo. Las negociaciones con el FMI, que acaban de reanudarse después de un paréntesis de tres meses, serán probablemente largas, ya que el FMI exige un programa de reformas y, en cualquier caso, un cuarto préstamo del FMI será en condiciones que tendrán efectos sociales. A no ser que los actuales dirigentes cuenten con la generosidad de los países del Golfo, que entonces condicionarían su ayuda a una agenda política muy concreta, lo que sin duda afectará a la independencia del país y la libertad de acción de sus actores políticos. ■

Kais Said se impone como ‘salvador del pueblo’

El presidente, presentándose como arquetipo de la integridad y la justicia, ha concentrado todos los poderes y sumido al país en un autoritarismo cuyo desenlace es incierto.

Lilia Weslaty

Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”. Sin embargo, el 25 de julio de 2021, dos años después de un ascenso inesperado y de su elección con el 72,7% de los votos, el ex adjunto de derecho Constitucional y actual presidente de la República tunecina, Kais Said, al que se suponía muy consciente de la importancia del principio de la separación de poderes, invocó, para sorpresa general, el artículo 80 de la Constitución que sume al país en un “Estado de excepción”. Se impone como “salvador” de la nación frente a un “peligro inminente” y concentra todo el poder en sus manos.

Según su lectura de la situación, la Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP) representaría en sí misma este peligro “continuo y no inminente”, como ironizó en varios de sus vídeos transmitidos a través de la página oficial de Facebook de la presidencia de la República, casi su único canal de comunicación.

Said recurrió después al ejército y colocó un tanque militar y una docena de furgones de policía a la entrada de la ARP, un típico caso de cesarismo providencial. La sede de la televisión nacional y la del gobierno también fueron rodeadas. Suspendió las actividades de los parlamentarios, les retiró la inmunidad y se impuso como fiscal general, reivindicando de nuevo el artículo 80; destituyó al jefe del gobierno y ministro interino del Interior, Hichem Mechichi, a los ministros de Defensa, Finanzas, Tecnología y Comunicación (TIC), Sanidad, Justicia y Administración Pública y cambió también a los gobernadores y a decenas de altos cargos en todas las instituciones del Estado.

Además, el recurso al artículo en cuestión requiere tres imperativos: la consulta al jefe del gobierno y al presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo (Rachid Ghanuchi) y, a petición del presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo o de 30 miembros de dicha Asamblea, acudir al Tribunal Constitucional (el 3 de abril de 2021 Said se negó a ratificar el

proyecto de ley para su ejecución) para comprobar “si persiste la situación de excepcionalidad”.

No se cumplió ninguna de estas tres condiciones *si ne qua non*. Por consiguiente, Ghanuchi y algunos diputados, sobre todo de Ennahda (el principal partido del país), así como algunos activistas de derechos humanos, denunciaron “un golpe de Estado contra la revolución y la Constitución”.

Desde entonces, Kais Said no ha dejado de acusar e insultar, siempre a través de la página oficial de Facebook de la presidencia de la República, a estos “traidores de la nación”, entre los que se encuentran los diputados y los “ladrones corruptos” que llevaron al país a la derrota. También pide a los ciudadanos que “purguen Túnez” de estos “virus”.

Es necesario recordar que, antes de este punto de inflexión, la relación entre el presidente y el jefe del gobierno estuvo caracterizada por el enfrentamiento, desde la toma de posesión de este último en septiembre de 2020. De hecho, el gabinete presidencial impuso cambios de última hora en el equipo de gobierno sin informar a Mechichi. Durante el primer semestre de 2021, la tensión palpable entre los dos hombres se fue intensificando cada vez más, especialmente con ocasión del nombramiento de ministros a los que Kais Said consideraba corruptos.

Por si fuera poco, durante los meses anteriores, Abir Musi, diputada pro Ben Ali, y su partido PDL (Partido Desturiano Libre), siguieron obstaculizando el trabajo del Parlamento con gritos, escenas de histeria y acusaciones de todo tipo contra Rachid Ghanuchi y Ennahda, hasta el punto de provocar desafección de una gran parte de la población con respecto al Parlamento y a los partidos políticos en general.

Además, tras la mala gestión por parte del jefe de gobierno de la crisis sanitaria de la Covid-19, que se ha cobrado la vida de más de 25.000 tunecinos según cifras oficiales (80.000 según Zakaria Bouguerra, denunciante y médico especialista en anestesia-reanimación), buena parte de la población percibió este vuelco de la situación como una acción saludable y una operación para salvar al presidente, al que, según los sondeos, apoya abiertamente más del 70%.

Al cabo de unas semanas, Kais Said ascendió así al rango de “salvador del pueblo” apelando a países de todo el mundo para proveerse de vacunas y material sanitario, donados para salvar vidas. En menos de dos meses, se han vacunado más de cuatro millones y medio de tunecinos (de un total de 11 millones). Una contundente victoria que sirvió de argumento al presidente contra quienes lo acusaban de golpista.

Said, el presidente que se impone como ‘justiciero’ en detrimento de la ley y la Constitución

Tres días después de lo que algunos medios y analistas denominan “golpe de fuerza” (evitando cualquier mención a un “golpe de Estado”), Said blanda un informe de la Comisión Nacional sobre Corrupción y Malversación de 2011 (denominada Comisión Abdel-fettah Amor), y declaraba, durante una reunión con Samir Majul, presidente del primer sindicato patronal del país, UTICA, que “460 empresarios” habían robado 13.500 millones de dinares (4.000 millones de euros) de dinero público.

Sin embargo, este informe no menciona ningún nombre, sino que incluye 5.000 solicitudes tramitadas en la oficina de registro de la Comisión hasta finales de 2011 y 450 remisiones a la fiscalía.

De hecho, el presidente hizo una amalgama con otro informe de 2003 elaborado por el antiguo régimen, que menciona nombres y fechas y que, en cambio, no goza de ninguna credibilidad.

Promete un “compromiso judicial” a quienes devuelvan el dinero. También pide la redacción de un proyecto de ley de ordenamiento judicial que permita a los empresarios –que hayan robado dinero público– regularizar su situación a cambio de que se comprometan a financiar proyectos en todas las delegaciones.

Además de la confusión política y las disensiones de todo tipo, Túnez también estaba sufriendo de lleno su tasa de inflación más alta, alcanzando el 6,4% en un contexto económico muy precario. El país está amenazado de quiebra: las arcas están vacías, sobre todo tras la devolución de los dos préstamos, el primero el 23 de julio, por valor de 506 millones de dólares y el segundo el 4 de agosto, por valor de 503,5 millones de dólares, obtenidos gracias al apoyo de Estados Unidos.

En el enésimo vídeo de Facebook, ante una de las situaciones más complicadas, Kais Said contraatacaba con amenazas declarando “la guerra contra todos los intentos de monopolio o especulación” y anunciando que sería “intolerante con cualquiera que pretenda controlar el abastecimiento del mercado o el aumento de precios”. En su ímpetu justiciero, llevó a cabo varias redadas en fábricas y mercados, filmadas por su equipo

Artículo 80 de la Constitución tunecina

“En el caso de que un peligro inminente amenace a las instituciones de la nación y la seguridad e independencia del país e impida el normal funcionamiento de los poderes públicos, el presidente de la República podrá adoptar las medidas que exija esta situación de excepcionalidad, previa consulta con el presidente del gobierno y el presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo y, después de informar al presidente del Tribunal Constitucional, anunciará las medidas en un comunicado al pueblo.

El objetivo de estas medidas será el de garantizar, a la mayor brevedad posible, el regreso al funcionamiento normal de los poderes públicos. Durante todo este periodo, se considerará que la Asamblea de Representantes del Pueblo está reunida de forma permanente. En este caso, el presidente de la República no podrá disolver la Asamblea de Representantes del Pueblo ni presentar una moción de censura contra el Gobierno.

En cualquier momento, transcurridos 30 días desde la entrada en vigor de estas medidas, y a petición del presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo o de 30 miembros de dicha Asamblea, se consultará al Tribunal Constitucional a fin de verificar si la situación de excepcionalidad persiste. El Tribunal deberá hacer pública su decisión en un plazo máximo de quince días.

Estas medidas dejarán de tener efecto en cuanto cesen las circunstancias que las motivaron. El presidente de la República informará al pueblo mediante un comunicado”.

de comunicación, acusando a unos de monopolio, a otros de corrupción, sin prueba alguna ni orden judicial, y reclamando, como un soberano omnipotente al que no se le puede negar nada, una bajada de precios.

Ante su reclamación, el UTICA declaró el 4 de agosto, más a modo de anuncio que como ejecución real, que respondería inmediatamente a sus órdenes y las cumpliría. Sin embargo, el coste de la producción de bienes en realidad ha seguido aumentando, sobre todo por la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia y sus consecuencias en toda la cadena de producción. Se habló entonces de estancamiento y aumento de precios a escala internacional. La Confederación de Empresas Ciudadanas de Túnez, el segundo sindicato patronal del país, sin embargo, revisa su respuesta a la situación y hace un llamamiento a aumentar la productividad y a solucionar los problemas endémicos de transporte y logística en los puertos con el fin de reducir los costes de producción y, por consiguiente, los precios de los bienes.

Reinado de la arbitrariedad y restricción de las libertades

Un mes después de la destitución del gobierno y de la suspensión del Parlamento, se observaron centenares de abusos contra los derechos y las libertades. El Ministerio del Interior ejecutó varias órdenes de arresto domiciliario, incluida una contra Chawki Tabib, abogado y expresidente de la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción, desde el 20 de



Manifestación contra las medidas adoptadas por el presidente Kais Saïd desde el golpe de Estado del 25 de julio de 2021. En los últimos meses, manifestantes a favor y en contra de Saïd han generado mucha violencia en Túnez en ambos bandos, lo que presagia una gran polarización../YASSINE GAIDI/ANADOLU AGENCY VIA

GETTY IMAGES

agosto, sin un marco legal que le permitiera ejercer su derecho constitucional de recurrir.

El 26 de agosto, Amnistía Internacional ya enumeraba en su informe unas 50 personas a las que se les había prohibido viajar sin ninguna justificación ni orden judicial. “La organización ha recopilado información sobre los casos de al menos 50 personas, entre ellas jueces, altos representantes estatales y funcionarios, empresarios y parlamentarios, a quienes durante el último mes se les ha prohibido viajar al exterior sin que ninguna de estas prohibiciones haya sido autorizada por el poder judicial y sin resolución escrita, sin motivo y sin límite de tiempo. Es probable que el número total de personas sujetas a la prohibición de viajar desde el 25 de julio sea mucho mayor”.

La organización Human Rights Watch también había alertado a la opinión pública de que la confiscación

de poderes por parte del presidente amenazaría los derechos.

En efecto, el 3 de octubre, el tribunal militar de Túnez emitió una orden de detención contra Ameer Ayed de Zitouna TV y un diputado, Abdellatif Aloui, por sus críticas a las decisiones presidenciales.

Otros dos diputados del movimiento nacionalista islámico Al Karama, uno de ellos el abogado Seif Eddine Makhlouf, fueron arrestados, de nuevo sin una orden judicial, en el marco de una investigación realizada por la justicia militar por “insultar a agentes de la policía fronteriza”, al haber defendido a una mujer a la que se había impedido viajar.

El 14 de octubre, Makhlouf decidió comenzar una huelga de hambre para que se impugnaran las sentencias dictadas en su contra y denunciar “los abusos legales que está sufriendo”, tras la denegación de su soli-

cidad de liberación por la Sala de lo Penal del Tribunal militar de Túnez. En un comunicado, el diputado protestó por “la comparecencia de civiles ante tribunales militares” denunciando la violación de los principios de neutralidad e imparcialidad en este caso “inventado”, según él.

Un tercer diputado, independiente, Yassine Ayari, que denunció sucesivamente un “golpe de Estado militar”, fue detenido en cumplimiento de una sentencia pronunciada a finales de 2018, que le condenaba a dos meses de prisión por haber “criticado al ejército”. Después de haber conseguido, el 27 de octubre, el sobreseimiento de este caso, ahora está siendo perseguido de nuevo por la Fiscalía de la justicia militar por sus comentarios en las redes sociales “después del 25 de julio”. Tendría que haber comparecido ante el Tribunal el 22 de noviembre para otro juicio, que finalmente se aplazó. El diputado, conocido por ser un feroz militante contra la corrupción y activista bajo el régimen de Zine el Abidine Ben Ali, denuncia el ensañamiento de la justicia militar contra su persona y contra cualquier espíritu crítico.

En respuesta a estas detenciones, el partido Harak, del expresidente de la República, Moncef Marzuki, activista de derechos humanos, expresó en un comunicado de prensa su “profunda preocupación”, denunciando un “giro hacia la política de ajuste de cuentas y la represión de las libertades” en contradicción con las afirmaciones de respeto a la Constitución manifestadas reiteradamente por el jefe de Estado al pueblo y a los diplomáticos.

En un golpe de timón, el 14 de octubre, Kais Said ordenó que se le retirara el pasaporte diplomático a Marzuki, acusándolo de haber ido al extranjero para “atentar contra los intereses de Túnez”, y añadió que “a quien lo haga se le retirará el pasaporte diplomático, como enemigo de Túnez”. El expresidente respondió entonces que “no le sorprendieron en absoluto las medidas anunciadas por el régimen golpista”.

Acusado de “conspiración contra la seguridad del Estado” después de haber hecho un llamamiento a Francia, durante una manifestación en París el 9 de octubre, para que “rechace todo apoyo a este régimen y a este hombre que ha conspirado contra la revolución y ha abolido la Constitución”, es destinatario, desde el 4 de noviembre, de una orden de captura internacional.

Frente a este enésimo ataque a los derechos y libertades, activistas de la sociedad civil y políticos, entre ellos el eminente jurista Yadh ben Achour, profesor de Kais Said, que le había acusado explícitamente de haber organizado un golpe de Estado, firmaron al día siguiente una petición en la que condenaban enérgicamente la acusación contra Marzuki. Según ellos, esta orden de detención internacional es un “paso arbitrario que se da en el contexto de un discurso de odio y difamación de la oposición”.

Los firmantes señalaban también que el presidente de la República, Kais Said, “se había desviado de los objetivos de la revolución y que había atacado la Constitución para instaurar su dominio del Estado”.

La revolución tunecina, a la deriva...

Desde el 25 de julio, las medidas tomadas por el presidente de la República han sumido al país en un autoritarismo cuyo desenlace es incierto. El deterioro de la situación socioeconómica, que se ha acentuado durante los últimos 10 años, ha empeorado las cosas. Tras una crisis de autoridad entre los dos jefes del ejecutivo, el de la presidencia y el del gobierno, se produjo una crisis de representatividad en la que los partidos políticos y los parlamentarios se convirtieron en los principales responsables de la debacle revolucionaria con una legitimidad mancillada.

Al presentarse como arquetipo de integridad y justicia, el ex adjunto de derecho Kais Said, convertido repentinamente en presidente gracias a una inesperada movilización en Facebook, se ha impuesto como un “salvador” y ha concentrado en sus manos los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Repitiendo constantemente que respeta la Constitución del 27 de enero de 2014 y los logros de la revolución, se ha negado desde su elección a conceder cualquier entrevista a los medios de comunicación de Túnez. Desde octubre, los partidarios y detractores de Kais Said se han manifestado violentamente en Túnez, lo que presagia una gran polarización y un aumento de la violencia, animados por el discurso de odio con tintes conspirativos del presidente.

Para el activista y profesor de Derecho, Jaouher Ben Mbarek, excompañero de Kais Said y ahora uno de sus principales adversarios, la “resistencia al golpe de Estado continuará por todos los medios pacíficos”.

En cuanto a Túnez, atrapado en una recesión económica y en una coyuntura mundial nada favorable, la sombra de la escasez de alimentos y el cese del pago de los salarios, especialmente en el sector público, acecha a más de 600.000 personas. Para salir del abismo financiero lo antes posible, el Estado deberá negociar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que exige una reforma profunda y dolorosa que afecta, principalmente, a la reducción de la masa salarial. Presionado por Estados Unidos y los países del G-7 para que “retome el camino democrático”, Kais Said terminó cumpliendo al nombrar el 11 de octubre a una jefa de gobierno, Najla Buden, cuya misión será, sobre todo, encontrar fondos para refloatar las arcas públicas e instaurar una estabilidad política inesperada. ■

Ennahda se enfrenta a su peor crisis

Acechado por las guerras internas, el partido islamista, actor ineludible de la escena política tunecina de los últimos años, se encuentra al borde de la escisión.

Ricard González

En sus más de 40 años de historia, la atribulada trayectoria del movimiento islamista tunecino Ennahda ha incluido una brutal represión, pulsiones revolucionarias, la clandestinidad y la cárcel. Sin embargo, después de varios años de larvadas luchas intestinas ahora se enfrenta a una crisis de diversa naturaleza. La reciente marcha del partido de más de un centenar de cuadros medios y varios líderes nacionales lo ha dejado al borde de una dolorosa escisión en el momento más delicado de la era posrevolucionaria, cuando el golpe de fuerza del 25 de julio de 2021 del presidente Kais Saïd amenaza con echar al traste los logros de la transición democrática.

Su crisis coincide con la del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) en Marruecos que, junto a Ennahda, es representante de la corriente más moderada del islamismo. La debacle del PJD en las elecciones generales del 8 de septiembre –pasó de un 27% al 4% de los votos– es una confirmación última de que los vientos regionales, que en 2011 soplaban a favor del islamismo, han cambiado de dirección. Ahora bien, la crisis de Ennahda es de diversa naturaleza, ya que los contextos políticos en Túnez y en Marruecos son bastante diferentes.

Una década como actor ineludible

Entre la clase política tunecina, Ennahda fue el principal beneficiado por la caída del régimen de Zine el Abidin Ben Ali en 2011. En cuestión de meses, pasó de ser un movimiento proscrito a liderar el primer gobierno elegido en las urnas, así como el proceso de redacción de una nueva Constitución democrática. Aunque el partido islamista moderado –o “islamo-demócrata” como gustan sus líderes de auto-definirse– no ha ganado todas las contiendas electorales celebradas durante la última década, sus resultados han sido siempre sólidos, convirtiéndolo en el centro de gravedad de una escena política tunecina marcada por los vaivenes electorales del resto de formaciones. Y es que Ennahda ha sido el único partido capaz de construir una estructura robusta en toda la

geografía del país, sostenida por miles de abnegados militantes. Esta privilegiada posición es la que parece ahora en riesgo.

Para entender la actual crisis de Ennahda es necesario echar un vistazo a su trayectoria durante la última década en la que, en mayor o menor medida, ha estado presente en la decena de gabinetes que han gobernado el país desde finales de 2011. De ahí su condición de actor ineludible de la escena política tunecina. Su punto más álgido fue cuando se erigió en el gran vencedor de las elecciones constituyentes de octubre de 2011 con un 37% de los votos, lo que le permitió presidir un gobierno de coalición con dos partidos de centro-izquierda, la llamada “troika”. Este periodo estuvo marcado por una fuerte polarización con la oposición y por los temores de los sectores más laicistas al desballestamiento de la herencia laicizante de Habib Burguiba, el padre de la independencia de Túnez.

De hecho, la transición estuvo a punto de descarriar después del asesinato de dos opositores de izquierdas a manos de grupos yihadistas. Para reconducir la crisis y evitar un escenario parecido al de Egipto, que experimentó un golpe de Estado en 2013, fue necesaria la mediación de cuatro organizaciones de la sociedad civil, incluido el todopoderoso sindicato UGTT. La solución pactada, que incluyó la formación de un gobierno de perfil tecnócrata y la celebración de elecciones, permitió aprobar en 2014 con un alto grado de consenso la nueva Constitución democrática del país.

La interpretación que los líderes de Ennahda hicieron de aquel tenso periodo fue que amplios sectores de la sociedad, especialmente aquellos con poder como el empresariado, los medios de comunicación o el alto funcionariado, no lo consideraban un actor legítimo. En Ennahda, se llamaba a estos sectores el “Estado profundo” o los vestigios del “Antiguo Régimen”. Durante décadas, el islamismo había sido la bestia negra del régimen, y ese peso cultural habría generado una serie de resistencias que impidieron al partido gobernar con normalidad. Por tanto, la dirección fijó como gran objetivo del partido conseguir su plena integración en el siste-

ma político, social y económico del país. Y la herramienta para conseguirlo fue la búsqueda de acuerdos con los partidos políticos en representación de estos sectores. Esta estrategia se puso en marcha inmediatamente después de las elecciones presidenciales y legislativas de 2014. En ambas triunfó la coalición Nida Tunes, cimentada bajo el liderazgo de un viejo estadista, el futuro presidente Beyi Caid Essebsi. En aquel ciclo electoral, Ennahda se erigió como el segundo gran partido, facilitando la formación de un gobierno de coalición entre ambos adversarios para garantizar la estabilidad. Los vínculos entre Nida y figuras del régimen de Ben Ali despertaban un verdadero temor en el seno de Ennahda a un retorno al pasado, por lo que el pacto pretendía garantizar la preservación del partido.

Entre 2015 y 2020, en aras del consenso, Ennahda aceptó una cuota en el ejecutivo mucho menor a su peso electoral, lo que le granjeó una capacidad de influencia limitada en una escena dominada por las luchas de poder dentro las diversas facciones de Nida Tunes y que paralizó la acción de gobierno. De las elecciones de 2020 apareció un panorama político muy diferente, marcado por la ascensión de figuras con un discurso pro revolucionario y que enfatizaban la lucha contra la corrupción, especialmente, el nuevo presidente Kais Saïd. No obstante, el veterano líder de Ennahda, Rachid Ghanouchi, prefirió sellar una alianza en el Parlamento con el segundo partido más votado, Qalb Tunis, de corte populista y liderado por Nabil Karui, un magnate con casos abiertos por corrupción. Aunque el argumento oficial fue, una vez más, la necesidad del consenso con los representantes del *establishment*, muchos militantes percibieron que la verdadera razón era el anhelo de Ghanouchi por convertirse en el nuevo presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo. El hecho de priorizar los pactos con fuerzas conservadoras, vinculadas con importantes grupos empresariales, implicó abandonar algunas demandas de cambio proclamadas durante la revolución, lo que frustró a una parte de las bases del partido, sembrando la semilla de la futura crisis interna.

De islamistas a ‘islamodemócratas’

Además de las alianzas con el *establishment*, la estrategia de “normalización” de Ennahda pasaba por acelerar y promocionar la evolución ideológica del partido. Este fue el objetivo principal de su X Congreso, celebrado en verano de 2016. Los líderes del partido querían borrar su reputación de islamista



Rachid Ghanouchi se dirige a la prensa la noche del 25 de julio de 2021. /NACER TALEL/ANADOLU AGENCY VÍA GETTY IMAGES

radical entre una parte de la población, creada sobre todo a causa de sus posiciones durante el proceso constituyente, cuando, por ejemplo, propuso que la sharia o ley islámica fuera fuente del derecho o la definición de las relaciones de género que establecía que la mujer era “complementaria” al hombre. Asimismo, sus detractores laicos siempre le achacaron haber ignorado o incluso haber sido cómplice de la violencia de los grupos salafistas como Ansar al Sharia durante el gobierno de la “troika”.

Por esta razón, los organizadores del Congreso se esforzaron en proclamar que Ennahda había dejado de ser un partido “islamista” para pasar a ser “islamodemócrata”, adoptando como inspiración los partidos cristianodemócratas europeos. Para sustentar la nueva etiqueta, el principal cambio introducido en los estatutos fue la prohibición de cualquier tipo de actividad religiosa en el seno de la formación. Es decir, Ennahda pasaba a ser una organización estrictamente política y establecía como incompatibles para sus dirigentes los cargos en el partido y las tareas de proselitismo religioso. “Esta no es una decisión que caiga del cielo, sino la coronación de un proceso histórico ... Debemos separar la religión de las luchas políticas”, proclamó desde el estrado el propio Ghanouchi.

Más que una ruptura con el pasado, el Congreso representó otro paso en el largo camino hacia la moderación iniciado desde hace más de dos décadas, cuando el partido abrazó la democracia y los derechos huma-

nos, e incluso se atrevió a apoyar algunas medidas consideradas entonces anatema por los movimientos islamistas del mundo entero, como la prohibición de la poligamia decretada por Burguiba. De hecho, en 2016, las actividades proselitistas en el seno de Ennahda ya eran más bien marginales. Para distanciarse de movimientos como los Hermanos Musulmanes, los ideólogos de Ennahda aseguran que sus referentes ideológicos son diferentes de los de los movimientos islamistas del Mashreq, señalando como fuente de inspiración a reformistas islámicos como el tunecino Taher Ben Achour o el argelino Malek Bennabi. Otro factor explica también la evolución respecto a postulados islamistas clásicos sostenidos por el embrión de Ennahda en los años setenta: el mayor proceso de secularización de la sociedad tunecina, donde solo un 23% de sus ciudadanos apoya la preeminencia de la sharia frente a un 60% en Egipto o un 77% en Libia.

Un hecho que cabe resaltar es que los cambios adoptados en el X Congreso gozaron de un amplio consenso dentro del partido, siendo aceptados incluso por parte de los líderes de los sectores más conservadores, que se apartaron sin rechistar de la escena política para dedicarse a la predicación. Este fue el caso, por ejemplo, de los “halcones” Saduk Churu y Habib Elluze. “El vocablo islamista pertenece a un periodo pasado de represión. Ahora somos un partido demócrata nacional con una referencia islámica”, declaró a EL PAÍS el propio Churu en los pasillos del Congreso.

Sin embargo, sí fueron más críticos algunos antiguos miembros de la militancia *nahdawi*. “La ponencia del partido dedicó más esfuerzos a explicar lo que no era Ennahda, o lo que había dejado de ser, en lugar de definir los anclajes de la nueva ideología del partido. ¿En qué cree ahora Ennahda? ¿Cuál es su proyecto?”, comentaba un antiguo militante desengañado con el partido. La plena aceptación, al menos aparente, entre la militancia, no abarcó a todos los sectores sociales que simpatizaban con el partido. Ello explica el inesperado éxito en las elecciones legislativas de 2019 de la Coalición Karama –21 diputados–, una formación que ocupó los dos flancos que Ennahda había dejado al descubierto en su tránsito hacia la moderación. A saber, aquellas posiciones alineadas con el discurso islamista clásico y desacomplejado –a menudo se define a Karama como ultraconservador– y con una retórica revolucionaria y anti-imperialista.

El disputado liderazgo de Ghanuchi

Durante décadas, Ennahda y Rachid Ghanuchi han sido prácticamente sinónimos. Cofundador en los años setenta del movimiento Yamaa Islamiya, embrión del actual partido, Ghanuchi ha sido durante años un líder venerado por la militancia. Su condición de intelectual islámico de prestigio más allá de las fronteras tunecinas en su defensa de la com-

patibilidad entre el islam y la democracia, le convirtió en el gran referente ideológico y moral de Ennahda. Sin embargo, algunas de sus decisiones estratégicas durante la última década y, sobre todo, su gestión interna del partido, muy centralizada, han ido consolidando una corriente crítica cada vez más fuerte.

En el X Congreso de 2016, varios líderes de peso propusieron que la mitad de la ejecutiva del partido fuera nombrada por el presidente y la otra mitad elegida por las bases, en lugar de ser toda escogida a dedo por el presidente. La propuesta fue rechazada por un escaso margen –un 52%–, y Ghanuchi designó una ejecutiva dominada por sus acólitos, sin apenas representación de las otras sensibilidades de la formación. La tensiones en el movimiento escalaron cuando Ghanuchi decidió sustituir a 30 de los 33 cabezas de lista de distrito elegidos por las bases para las elecciones legislativas de 2019, incluidos algunos pesos pesados, como Abdelhamid Yelassi, Abdelatif Mekki o Samir Dilou. La acción representaba una violación flagrante de las reglas internas de la formación, que solo permitían el remplazo de un 10% de los candidatos y siempre con la aprobación del *majlis al shura*, una especie de Consejo Nacional. Las disensiones internas quizás ayudaran a explicar el pobre resultado del partido, que recabó solo 500.000 votos (un 19%), frente a los más de 1,5 millones (un 37%) en 2011. Ahora bien, el total hundimiento de su antiguo adversario –Nida Tunes se quedó con solo tres diputados–, le permitió salvar los muebles y recuperar la condición de partido más votado.

El establecimiento de una alianza con Qalb Tunis, un partido populista y percibido como un nido de corrupción, no ayudó a calmar las tensiones internas. Tampoco lo hizo el hecho de que el estallido de la pandemia de la Covid-19 forzara el aplazamiento del XI Congreso, previsto para la primavera de 2020, y para el que no existe todavía fecha. El sector crítico considera que Ghanuchi ha utilizado la pandemia como una excusa para mantenerse en el poder. De acuerdo con el artículo 31 de los estatutos actuales de la formación, existe un límite de dos mandatos para el cargo de la presidencia. Ghanuchi ya presidió el partido en los años ochenta, pero luego, durante el periodo de represión de Ben Ali, su cargo oficial fue el de “representante en el exterior”. Por tanto, oficialmente, su primer mandato se inició en 2012 y fue renovado en 2016.

En septiembre de 2020, el mar de fondo interno salió a la superficie, dejando atrás la reputación de Ennahda de ser un movimiento con una disciplina y cohesión graníticas. En una carta dirigida a Ghanuchi, más de 100 responsables del partido le instaban a hacer público su compromiso de respetar los estatutos internos, renunciando a modificar el artículo 31 para convertirse en un presidente vitalicio. Los firmantes invitaban también al presidente a garantizar la renovación y democracia interna de la formación, y advertían del peli-

gro de una agria división en el XI Congreso. La dirección de Ennahda respondió con una declaración en la que defendían una excepción a los límites de mandato para los *zumaa*, líderes carismáticos, y acusaban a la corriente crítica de querer excluir a Ghanuchi del partido.

¿Hacia una escisión y la subalternidad política?

El golpe de fuerza del presidente Kais Said del 25 de julio –que posteriormente se iría convirtiendo en un golpe de Estado– sirvió de catalizador de las tensiones internas de Ennahda. El nuevo contexto político hizo evidente la pérdida de popularidad de la formación. En sus cánticos y declaraciones a la prensa, los ciudadanos que se movilizaron a favor de las “medidas excepcionales” de Said parecían movidos con la misma intensidad por un rechazo a Ennahda como por un apoyo al presidente. Tanto entre la opinión publicada como en las redes sociales se atribuye a Ennahda la principal responsabilidad de todos los males que afectan al país: el estancamiento económico, el altísimo paro juvenil, la corrupción rampante, las desigualdades, etc. Aunque la formación islamista solo controló el gobierno entre finales de 2011 y 2013, el hecho de haber participado en mayor o menor grado en todos los gabinetes desde entonces la convierte en la quintaesencia del denostado *establishment*.

La percepción de que la estrategia de la dirección estaba haciendo un daño irreparable a la “marca Ennahda” empujó al sector crítico a firmar una nueva carta pública en la que exigía la dimisión en bloque de la ejecutiva y una renovación total del partido para estar en una mejor disposición de afrontar la grave crisis política del país. Pocos días después, el 4 de agosto, en una tensa reunión del *majlis al shura*, la dirección se limitó a reconocer la necesidad de “autocrítica” y formó un gabinete para gestionar la crisis. Sin embargo, su composición, afín a Ghanuchi, convenció al sector crítico de que no habría cambios profundos. De hecho, a pesar de la mejora de la situación pandémica en el país, ni tan siquiera se ha fijado una fecha para el XI Congreso. Así las cosas, a finales de septiembre de 2021, un total de 113 dirigentes anunciaron su decisión de abandonar el partido, incluido el exministro de Sanidad, Abdelatif Mekki, el político más popular de Ennahda según algunas encuestas.

Con este acto, el partido islamodemócrata se acercaba al escenario de la primera escisión importante de la historia. “El sector crítico considera que Ennahda está acabada y completamente aislada, incapaz de formar alianzas con el resto de las formaciones políticas para desafiar el proyecto del presidente. De momento, no formarán un partido político porque su prioridad, al liberarse de Ennahda, es sumarse a las iniciativas ciudadanas o frentes políticos en formación, en defensa de la Constitución de 2014 y la democracia representativa que están en peligro. Ahora bien, están estudiando cómo

evoluciona la escena de partidos políticos para encontrar su hueco, y es difícil pensar que figuras de peso como Mekki se retiren de la política”, sostiene la investigadora Rosa Álvarez, especializada en la formación islamista.

En el actual contexto, el futuro de Ennahda, igual que el de la propia transición democrática, es todo un interrogante. Inmediatamente después de su golpe de fuerza, Said gozaba de un apoyo abrumador entre la ciudadanía que algunas encuestas situaban cerca del 90%, si bien en las semanas siguientes se vio erosionado. En todo caso, su popularidad es lo suficientemente elevada como para que se plantee llevar a cabo su proyecto de implantar un nuevo sistema político basado en la democracia directa de base local. No está claro cuál sería el papel de los partidos políticos en el nuevo sistema, pues Said los aborrece. Pero tampoco lo está su capacidad real de impulsar un cambio constitucional de tal dimensión sin un sólido apoyo entre la clase política, la sociedad civil o las cancillerías occidentales.

En el caso concreto de Ennahda, su futuro dependerá sobre todo del resultado del XI Congreso y, especialmente, de cómo aborde una necesaria renovación en los órganos de dirección. Se rumorea que, a sus 80 años, Ghanuchi no solo quiere aferrarse a la presidencia del partido, sino que planea su candidatura para las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2024. Su desaforada ambición de poder representa un verdadero obstáculo para las opciones de Ennahda de superar su crisis actual y volver a asumir un papel central en la política tunecina. No en vano, Ghanuchi figura en algunas encuestas como el líder político que inspira menos confianza entre los tunecinos. Nunca antes, ni tan siquiera durante la represiva era Ben Ali, el futuro de Ennahda había sido tan incierto.

Las crisis de Ennahda y el PJD tienen algunos puntos en común, ya que su pérdida de popularidad tiene que ver con el desgaste de una larga acción de gobierno que no ha estado a la altura de las expectativas de la población. Aunque es evidente que ello denota carencias en su capacidad de gestión, no está claro que sea expresión de un defecto intrínseco a su ideología o proyecto político. Pero es evidente que el contexto que aupó a estos partidos al poder, no muy diferentes del que ayudó a los Hermanos Musulmanes en 2011, ha cambiado mucho. Los islamistas ya no encarnan las esperanzas de cambio, sino que en algunos países son vistos como el *establishment*, también en Turquía. Dicho esto, no está claro que esta tendencia a la baja sea extrapolable a todos los países de la región –Hamás, por ejemplo, podría ganar las elecciones en Palestina si se celebraran mañana– o que sea interpretada de la misma forma en todas partes y lleve a unos mismos cambios ideológicos. El contexto local de cada país pesa mucho y extraer conclusiones válidas para una región hoy tan diversa es muy osado. ■

La década perdida de la economía tunecina

A lo largo de estos años de democracia, los tunecinos no han logrado alcanzar un horizonte de progreso social, de mejor distribución de los ingresos. Todo lo contrario.

Thierry Brésillon

La injusticia social fue la causa principal del levantamiento popular del invierno 2010-2011 que concluyó, el 14 de enero, con una revolución política: la caída de la “casa Ben Ali” –la camarilla familiar de la esposa del presidente (Leila Trabelsi)–, que había monopolizado en beneficio propio y de sus aliados todas las oportunidades de enriquecimiento, con el consiguiente resultado de un régimen autocrático instalado desde la independencia en 1956.

Diez años más tarde, el fracaso económico y social de una década de transición democrática ha socavado el apoyo popular a las nuevas instituciones. Esta decepción transformada en resentimiento hacia la clase política desplegó, el 25 de julio, una alfombra roja a la iniciativa de Kais Saïd, que se propone que el Estado vuelva a estar al servicio de la mayoría y restaurar la soberanía nacional.

En ningún momento la democracia, tal como se puso en práctica, abrió a los tunecinos un horizonte de progreso social, ni de mejor distribución de los recursos y de las oportunidades, ni de moralización de la economía, ni de reconquista de su independencia económica. De hecho, incluso han vivido todo lo contrario.

La tasa del paro no ha bajado del 15% y supera hoy incluso el 18%. Desde 2010, el índice de precios al consumo ha aumentado cerca del 70% y la clase media ha perdido el 40% de su poder adquisitivo. La calificación de riesgo del Estado lleva cayendo en picado hasta alcanzar a principios de julio de 2021 el umbral de la insolvencia según la agencia Fitch (B- con perspectivas negativas), preludio de una nueva rebaja a mediados de octubre de la agencia Moody's (de B3 a Caa1), que sanciona a la vez un riesgo elevado para los prestamistas y la incapacidad de las autoridades de aplicar las reformas necesarias para asegurar las perspectivas de reembolso. La desesperación sigue empujando a miles de jóvenes tunecinos a aventurarse en el mar con la esperanza de llegar a Italia (entre enero y septiembre de 2021, más de 10.000 lo lograron y más de 16.000 fueron interceptados, lo que significa un aumento, respecti-

vamente, del 27% y del 47% con respecto al mismo período de 2020).

Choques coyunturales y crisis sistémicas

Ni que decir tiene que Túnez ha encajado, durante estos años, tres crisis coyunturales: la incertidumbre asociada a la desestabilización institucional de 2011 con su reguero de protestas sociales, los tres atentados de 2015 (dos de ellos en lugares turísticos) y, para acabar, la crisis sanitaria de 2020.

Aunque el modelo balneario *low cost* del turismo tunecino está agotado y le cuesta renovarse, este representaba del 7% al 8% del PIB, empleaba aproximadamente al 13% de la población activa antes de la revolución y constituía una fuente importante de divisas. Desde 2011 ha visto cómo su dinámica de reactivación se hacía completamente añicos en 2015 y 2020, y se recuperaba solo tímidamente en el verano de 2021. La producción de fosfato, principal recurso de exportación, se redujo a la mitad a partir de 2010 (a pesar de un ligero aumento en 2021). La Compagnie des phosphates de Gafsa ya no cuenta con los medios para garantizar por sí sola al mismo tiempo su misión de explotación y la amortiguación de los efectos colaterales (sociales y ecológicos) de la actividad que el Estado le había delegado. Los problemas en Libia desde 2011 perjudicaron tanto a las empresas tunecinas que tenían mercado en el país como a las familias modestas de los barrios populares de la capital, que subsistían gracias al “comercio de maleta”.

Los choques coyunturales impactaron en un modelo en crisis antes de 2011, a pesar de los vistos buenos de las instituciones financieras internacionales. Si la revuelta de Sidi Buzid del 17 de diciembre de 2010 encendió el país, el régimen ya no contaba con los medios para garantizar su reproducción basada en un control de la sociedad capaz de prever las tensiones, un clientelismo generalizado que permitía apaciguarlos y un relativo bienestar social gracias a la distribución de créditos fáciles. La depredación en la cima del Estado había

Thierry Brésillon es periodista, corresponsal en Túnez, colaborador de *Monde diplomatique* y de *Orient XXI*.

Túnez: tasa de crecimiento del PIB e IED

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Tasa de crecimiento del PIB (%)	3,1	-1,7	3,9	2,1	2,7	1,0	1,1	2,2	2,5	1,4	-9,2	3
IED/PIB (%)	3,4	2,5	3,6	2,4	2,2	2,3	2,1	2,2	2,6	2,2	1,7	-

(* Previsión FMI). Fuentes: Instituto nacional de estadística para el PIB; Banco Central de Túnez para las IED.

roto el pacto moral, la huida hacia adelante liberticida del poder había instalado el recelo; la tolerancia de una economía informal a corto plazo no ofrecía ninguna perspectiva y situaba el aparato de seguridad en la primera línea de la corrupción cotidiana, con su porción de vejaciones y arbitrariedad.

La ilusión de los artífices, tunecinos y extranjeros, de la “transición” fue creer que la combinación del pluralismo democrático y de una liberalización económica en la prolongación de las reformas preconizadas en el marco del partenariado euromediterráneo de Barcelona de 1995 bastaría para subsanar las deficiencias del modelo.

Endeudamiento y bloqueo de las reformas

Pero nada fue según lo previsto. Dos dinámicas agotaron progresivamente los recursos políticos y financieros que la revolución había liberado.

Primera dinámica: el aumento del gasto público que pasó entre 2011 y 2018 del 24% al 30% del PIB, provocó una espiral de la deuda. Presionado por la multiplicación de las demandas sociales, el Estado hizo promesas por encima de sus capacidades. Los mecanismos de absorción del desempleo (los “proyectos de desarrollo” en particular), las contrataciones de la administración pública (más de 200.000 creaciones netas de empleos en 10 años) y las subidas salariales llevaron a la masa salarial del Estado del 11% al 17,4% del HB entre 2011 y 2020. El aumento del precio de los hidrocarburos y la depreciación del dinar elevaron el coste de las subvenciones al carburante. En paralelo, los ingresos fiscales aumentaron solo entre el 23% y el 25% del PIB. El déficit presupuestario alcanzó el 11,5% del PIB en 2020, la abundancia de préstamos para financiar la transición democrática y las reformas económicas, la obligación de tomar prestado siempre más para devolver (en 2019, el 93% de los nuevos préstamos fueron para reembolsar una deuda anterior) hicieron estallar la deuda pública del 40% al 92% del PIB en 2021. La depreciación del dinar, de más del 30%, acelerada por la independencia del Banco Central y la liberalización del tipo de cambio, votada en abril de 2016, fue una de las causas principales de la inflación y del aumento de la deuda pública.

El Estado ha perdido su margen de maniobra presupuestario y, presionado por los financiadores, después de haber acudido tres veces en 10 años al Fondo Monetario Internacional (FMI), la solvencia ha pasado a ser

su prioridad absoluta. La negociación de un acuerdo está bloqueada desde principios de 2021 por la incapacidad de las autoridades tunecinas de aportar un plan de ajuste creíble de sus finanzas.

Y es que, segunda dinámica, la falta de una reforma decisiva arruinó la eficacia económica y social de la “renta democrática” de que disfrutó Túnez. Los indicadores sociales se deterioraron. “El clima empresarial” sigue marcado por las trabas burocráticas, pese a una reforma del código de inversiones votada en septiembre de 2016, que en teoría debía simplificar los trámites. La restructuración de las empresas públicas, con exceso de efectivos y poco rentables, se enfrenta a la resistencia de la central sindical.

Los acuerdos de cooperación internacionales (cuya aprobación representa buena parte de la actividad legislativa) se han multiplicado sin que ningún marco estratégico garantizara su coherencia y 17.000 millones de dinares (6.000 millones de dólares) de proyectos de inversión públicos seguían sin ejecutarse (y, por consiguiente, no se habían desembolsado) en junio de 2021, según el jefe de gobierno, Hichem Mechichi.

Túnez no logra recobrar su atractivo para los inversores extranjeros, disuadidos por los retrasos y sobrecostes generados por la falta de infraestructuras, la corrupción y la lentitud administrativa.

Fractura territorial y capitalismo de compadreo

Más que los obstáculos al crecimiento, las nuevas instituciones debían abordar dos estructuras generadoras de injusticia social y lesivas para la economía nacional: la fractura socioterritorial y el “capitalismo de compadreo”, analizado hoy como una “economía de rentas”.

La fractura entre el litoral (la capital y el Sahel) y el resto del país ha sido sistemáticamente origen del malestar social. Ninguna política adoptada tras la independencia ha logrado ponerle remedio, ni los proyectos industriales implantados desde la nada por el Estado ni los incentivos de inversión. Desde mediados de los años noventa, se asumió claramente la disparidad regional y la “complementariedad” regional se consideró una baza en la búsqueda de competitividad internacional. “En la actualidad, ya no es cuestión de regiones favorecidas y desfavorecidas, sino de un país reducido únicamente a su capital, que concentra todos los esfuerzos en equipamiento e infraestructuras. El resto del

territorio no tiene más vocación que respaldar a la ciudad de Túnez en el objetivo de aspirar a un puesto en el tablero de la globalización”, resumía Alia Ganna (“Aux origines rurales de la révolution tunisienne”, *Maghreb-Machrek* 2013/1 n.º 215). Una estrategia tanto más rentable cuanto que Túnez se encuentra normalmente en la parte inferior de la escala de valor en la división internacional del trabajo.

Este reparto regional de la riqueza está, por tanto, vinculado de manera consustancial al carácter extrovertido de la economía tunecina. Los recursos del interior (el agua del noroeste, el fosfato del suroeste, los hidrocarburos del Sur, la mano de obra barata de las zonas rurales...) son objeto de apropiación en pro del dinamismo del litoral, mientras que el turismo exterior se canaliza exclusivamente hacia las costas orientales (cuando el conjunto del territorio tiene incontables tesoros naturales y culturales). Este modelo, impulsado por el centro, debe en principio generar suficientes excedentes para elevar el nivel de vida de toda la población nacional. Una promesa jamás cumplida: el índice de pobreza absoluta en el centro-oeste, por ejemplo, pasó del 7,1% en 2000 al 12,8% en 2005.

Década a década, la fractura entre “un Túnez de la economía y un Túnez de lo social, un espacio rentable y un espacio interior necesitado que sostener” ha ido a más, según Amor Belhedi (*Le mouvement moderniste tunisien et la dimension spatiale*, 2010). Esta división va acompañada de una dimensión cultural: los puestos de poder político y económico han sido ocupados por una élite que deriva su legitimidad de la misión que se ha impuesto de modernizar la sociedad y “civilizar” (o someter) a los “bárbaros” que viven más allá de los muros de las ciudades.

A pesar del principio de discriminación positiva consagrado en la Constitución de 2014, rompiendo con el dogma prevalente en el pasado, el Estado no ha logrado remediar esta fractura. Es cierto que el Estado lleva desde 2011 mejorando las principales carreteras, para poner fin al aislamiento de las regiones; hay nuevos hospitales proyectados, pero nada que pueda propiciar dinámicas de desarrollo regional, ni que modifique la lógica de absorción de los recursos con destino al litoral.

De tal forma que compensar las consecuencias sociales de la asimetría interna consume recursos presupuestarios, reduce la capacidad de inversión del Estado consolidando así la frontera entre la inclusión y la exclusión y ampliando el déficit de las cuentas públicas lo que aumenta la dependencia financiera de los donantes internacionales. Se trata de un círculo vicioso que los responsables políticos no pueden romper sin arremeter contra una coalición de intereses establecidos.

El otro elemento estructural característico del modelo tunecino es el “capitalismo de compadreo” que el clan Ben Ali había llevado al límite, hasta el punto de comprometer la viabilidad de su poder. En realidad, el “compadreo” descansaba sobre un pedestal compacto

y bien establecido de reglamentaciones que en un principio debían supuestamente regular el sector privado, en el sentido de los objetivos definidos por el poder político. No obstante, ese embrollo de procedimientos enseguida se vio privado de su vocación, y pasó a servir los intereses de las personas cercanas al poder, en especial la nueva élite saheliana, que entró en política bajo la estela de Habib Burguiba en el seno del movimiento nacional, y luego del Estado, después de la independencia. “La abundancia y la opacidad de las normativas económicas y, sobre todo, el uso que de ellas hace el personal administrativo gracias a su facultad discrecional, consolidan las redes de protección clientelistas que contribuyen a que la frontera que protege a la élite económica siga siendo hermética”, explicaba un informe del International Crisis Group (*La transition bloquée : corruption et régionalisme en Tunisie*, mayo de 2017).

Este mecanismo se recuperó a partir de mediados de los años 2000, en pro de los allegados a la familia del presidente Ben Ali y de su esposa, Leila Trabelsi. Recurriendo a actos de intimidación dignos de la mafia, habían captado a los sectores más lucrativos. Las 114 empresas confiscadas en 2011 equivalían al 3,2% de la producción y al 21,3% de los beneficios netos del sector privado (*La Révolution inachevée. Créer des opportunités, des emplois de qualité et de la richesse pour tous les Tunisiens*. Banco Mundial, 2014). Y esos datos solo son la punta del iceberg; la empresa de los Trabelsi también abarcaba el sector informal.

La economía política de la transición democrática

Sin embargo, la caída del régimen no podía bastar para resolver el problema; peor aún, incluso lo agravó. En el antiguo régimen el presidente decidía quién tenía acceso o no al mercado y, en la rutina cotidiana, una vez obtenida la protección del clan Trabelsi, las transacciones eran fluidas, sin pedir a ningún otro implicado de que superara las condiciones impuestas por los “padrinos”. Una vez estos se veían expulsados del juego, todos los intermediarios subían de categoría de alguna forma; cada detentor del menor poder intentó negociar su capacidad de simplificar los trámites, de desbloquear una autorización, con lo que obligaba a los operadores a reconstituir los circuitos y las conexiones de la administración y las fuerzas políticas del poder.

Sin embargo, las necesidades de financiación de los políticos para sus campañas electorales y la preservación de su red clientelar han invertido la relación entre mundo de los negocios y mundo político después de la revolución. Mientras, que antes de 2011, al poder le interesaba asegurarse la lealtad de los empresarios privados, las obligaciones recíprocas se reequilibraron en favor del mundo de los negocios. El sistema pasó de estar descentralizado a ser competitivo a la vez entre clanes de negocios y entre fuerzas políticas. El Estado se convirtió en uno de los princi-

pales terrenos de enfrentamiento de esas rivalidades político-mercantilistas que desde 2014 fueron el trasfondo material de las alianzas políticas sucesivas. El partido Nida Tunes, fundado en 2012 por Beyi Caid Essebsi, surgido del entorno de Burguiba para atajar la hegemonía de Ennahda no tardó en dividirse entre clanes rivales una vez llegado al poder tras las elecciones de 2014. La aparición de Youssef Chahed, elegido por el presidente Caid Essebsi en julio de 2016, como jefe del gobierno y árbitro de esa rivalidad, le permitió en realidad formar a su vez un “clan” representado en política por un nuevo partido, Tahya Tunes, tras haber mandado encarcelar a los apoyos financieros de su rival, Hafedh Caid Essebsi, el hijo del jefe de Estado, en nombre de la lucha contra la corrupción.

En 2020, después de la disolución de Nida Tunes y el fracaso electoral de Tahya Tunes, Ennahda se alió con el partido Qalb Tunes, constituido por un magnate de la comunicación, Nabil Karui. Fundador de la cadena Nessma y especulador notorio, logró prosperar tanto durante el régimen de Ben Ali, como bajo la protección de Nida Tunes, cuya propaganda electoral había asegurado antes de ocurrirse de la suya, difundiendo acciones benéficas de cara a su candidatura para las elecciones presidenciales de 2019. Y así la democracia se vio crecientemente vinculada al mercantilismo.

A las tres fases sucesivas del régimen político tunecino desde la independencia le corresponden, pues, tres variantes de una economía fundamentada en las colusiones entre mundo del dinero y mundo de la política: centralizada, intervencionista y regionalista con Burguiba; centralizada, familiar y mafiosa bajo Ben Ali; competitiva y partidista, al amparo de instituciones democráticas desde 2015.

La estructura del capitalismo tunecino se ha construido, pues, a lo largo de las décadas (incluso antes del Protectorado francés instituido en 1881) bajo la protección del poder político, y constituye un sistema que ya es común calificar de economía rentista, donde la renta no es un recurso natural, sino las conexiones con el poder político que permiten proteger las posiciones económicas. Un “yacimiento” en manos de una oligarquía, unida por un entrelazado de relaciones matrimoniales. Este recurso creativo de oportunidades de negocios en Túnez ha sido captado por un cartel de familias que poseen la mayoría de las grandes empresas del país. Asimismo, cuentan con participaciones cruzadas en los principales bancos privados (creados en los años noventa), que no tienen, por consiguiente, interés alguno en competir y financian prioritariamente las actividades de sus accionistas. Con 26 bancos públicos y privados (Francia tiene 27), Túnez debería disponer de una oferta bancaria estimulada por la competencia. Sin embargo, dista mucho de ser el caso. Los servicios son mediocres, pese a los gastos astronómicos, y las condiciones para acceder al crédito son disuasorias para la mayoría de los empresarios.

Si combinamos estos distintos elementos –extracción de los recursos de las regiones interiores en beneficio del

litoral, extraversion de la economía, colusión rentista con el poder político, dimensión cultural–, llegamos a la conclusión de que el modelo económico es una cuestión eminentemente política. En una obra memorable, publicada a cuenta del autor en 2017, Sghaier Salhi había calificado este modelo de “colonialismo interior” (“Colonialismo interior y desarrollo desigual. El sistema de la marginación en Túnez como ejemplo”, en árabe). En otras palabras, “el verdadero problema de las regiones periféricas del interior de Túnez no es la ‘pobreza’, es decir, la ausencia de recursos naturales, humanos o financieros, como pretenden hacer creer”, afirmaba ya en 1985 Ezzeddine Mudud. “Es, sin duda, un problema de orden político, esto es, la ausencia de poder regional” (“L’impossible régionalisation ‘Jacobine’ et le dilemme des disparités régionales en Tunisie”. *The Canadian Journal of Regional Science*/VIII:3 [otoño 1985]). A partir de 2011, este marco se desmorona.

El momento Kais Said

Perderemos totalmente el sentido del “momento Kais Said” si ignoramos esta dimensión percibida por los tunecinos como un verdadero obstáculo a la justicia social prometida por los diferentes poderes desde la independencia.

El golpe de fuerza del 25 de julio viene a completar un doble ciclo. Por un lado, el agotamiento de un desarrollo asimétrico que empobrece a su base material y se depaupera compensando sus efectos de exclusión social. Por otro, el fracaso de los actores de la democratización a la hora de representar los intereses de un componente esencial, si no mayoritario, de la sociedad: los perdedores del “colonialismo interior”, esa parte de Túnez que regularmente se ha levantado contra el poder de la capital y que debería haber constituido la base política de la democracia.

En tales condiciones, cuesta menos entender la popularidad de Kais Said. ¿Con qué medios cuenta para transformar el modelo? ¿Dispone solo de las herramientas conceptuales de esta transformación, más allá de una retórica moralizante sobre la corrupción de las élites? ¿Qué apoyos políticos le permitirán pasar por encima de las resistencias? ¿Cuenta con el margen de maniobra económico para prescindir del apoyo de los donantes habituales de Túnez poco sensibles a su iniciativa? ¿Podrá arrancar su proyecto “de inversión de la pirámide del poder” para lograr que actúen los representantes, no de los partidos, sino de los territorios? ¿Y esta “nueva construcción” será capaz de modificar los factores determinantes del modelo económico para que preste más atención a las necesidades internas? Pero la cuestión esencial es saber si se está a tiempo de recuperar una década perdida y de iniciar cambios que tardarán en producir efectos cuando la emergencia financiera impone dolorosas medidas de austeridad y limita la capacidad soberana de Túnez para emprender su propio camino. ■

Europa y el julio tunecino

La UE debe ayudar a modernizar la economía, impulsar la democracia parlamentaria y el poder local, además de presionar a los actores externos que intentan influir en la política tunecina.

Youssef Cherif

Para Túnez, la década de 2010 estuvo caracterizada por la transición democrática y por un ciclo de crisis socioeconómicas. El recrudecimiento del terrorismo también ha sido un fenómeno sorprendente para la psique colectiva de los tunecinos. Por esta razón, pocos recuerdan esta década como un periodo propicio o de progreso, olvidando a menudo la libertad que consiguieron y centrándose en los problemas que limitan su futuro. El verano de 2021 parece ser un epílogo a esta época, con sus dos acontecimientos principales: la gran ola de la Covid-19 entre junio y julio y el golpe de fuerza del presidente Kais Saïd el 25 de julio.

La propagación de la Covid-19 se atribuye, en parte, a la mala gestión política. De hecho, a principios de 2020, cuando los sistemas de sanidad de países como Italia y Francia o incluso otros más semejantes a Túnez como Argelia y Egipto sucumbían a las presiones del virus, Túnez se salvó en gran medida. Pero fue a finales de ese mismo año cuando le golpeó una ola especialmente severa. Una vez superada la primera ola de la Covid-19, los políticos comenzaron a discutir por consideraciones a corto plazo, preocupándose poco por los riesgos económicos y sanitarios que se avecinaban. Por otra parte, la segunda mitad de 2020 vio cómo se consumaba la ruptura entre el presidente, por un lado, y el primer ministro y el jefe del Parlamento, por otro.

A finales de la primavera de 2021 llegó otra gran ola. En junio, los hospitales estaban desbordados, los casos diarios se contaban por millares y se producían centenares de muertes cada semana. El retraso en la campaña de vacunación –Túnez comenzó a vacunar en marzo de 2021– y la falta de vacunas disponibles prolongaban esta situación. La ayuda internacional que necesitaba el país –oxígeno, equipos médicos, vacunas, etc.–, tardaba en llegar. En julio, el país parecía hundirse, sin un capitán al timón.

Este es el telón de fondo del 25 de julio. La población, descontenta y deprimida, buscaba una renovación y el presidente se la ofreció. En ese preciso momento, algunos de los actores extranjeros cuyo papel ha sido omnipresente en Túnez desde 2011, a saber, el eje Arabia Saudí-Emiratos Árabes Unidos (EAU)-Egipto y, en me-

nor medida, Marruecos y Argelia, pusieron en marcha un puente aéreo de vacunas y otras ayudas médicas con destino a Túnez, así como una campaña en los medios de comunicación para destacar la ayuda mutua árabe y el fracaso de los dirigentes tunecinos, erigiendo al presidente Saïd en un héroe salvador. En el mes de julio, este eje árabe demostró ser más ágil y comunicativo que la Unión Europea (UE) que, a pesar de todo, sigue siendo, con diferencia, el primer socio de Túnez.

Respuesta de la Unión Europea

A la UE le cogieron por sorpresa los acontecimientos del 25 de julio. En vista de las posiciones divergentes de los Estados miembros y de la opinión pública tunecina, favorable, en general, a las acciones del presidente, Bruselas optó por una crítica moderada. Así, y contrariamente a las condenas que suelen seguir a los golpes de Estado o a la suspensión de constituciones, la nota de prensa de Bruselas fue suave, evocando un seguimiento “con la mayor atención” y no una condena, o siquiera una preocupación.

Los contactos entre dirigentes europeos y tunecinos no fueron inmediatos ni frecuentes. No hubo reuniones entre el embajador de la UE y el ministro de Asuntos Exteriores de Túnez. El presidente Saïd recibió llamadas telefónicas de Josep Borrell, Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Charles Michel, presidente del Parlamento Europeo, pero no de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión. En cuanto a la primera visita de un alto cargo europeo, la de Borrell, se remonta a mediados de septiembre, más de un mes después de los hechos. En este aspecto, los enviados de los países árabes estuvieron en Túnez mucho antes, y los contactos entre los dirigentes tunecinos y sus homólogos árabes fueron anteriores y más frecuentes.

En cifras, durante los últimos 10 años, las ayudas europeas han sido mayores y más diversificadas que las procedentes de los países árabes. Y entre 2020 y 2021, la mayor parte de la ayuda entregada a Túnez en su lucha contra la Covid-19 provino de los Estados miembros de

la UE (y de Estados Unidos). Salvo que, en lo que se refiere a relaciones públicas, los europeos han mostrado sus límites. Muchos tunecinos perciben que los Estados árabes los han ayudado, mientras que sus vecinos europeos los han abandonado. La UE, a través de la iniciativa Covax y otras, ha fomentado el rápido despliegue de envíos de cargamentos de ayuda médica a Túnez. Pero los países árabes reaccionaron mejor, especialmente durante las duras semanas de julio.

En cuanto al Parlamento Europeo, su posición sobre los cambios del 25 de julio también se hizo esperar. Algunos eurodiputados hablaron, emitieron comunicados de prensa, tuitearon o publicaron algunos comentarios aquí y allá, pero no hubo una sesión extraordinaria para discutir la situación de Túnez durante los dos meses posteriores al 25 de julio. Desde esa fecha, no ha habido contactos oficiales entre la presidencia del Parlamento Europeo y la del Parlamento tunecino. Tampoco ha habido comisiones parlamentarias de apoyo a los diputados tunecinos, aunque muchos de ellos se han encontrado con que se les prohibía viajar o incluso han acabado entre rejas.

Esto recuerda dos realidades. En primer lugar, los parlamentarios tunecinos, por muchas razones, no han forjado vínculos fuertes con sus homólogos europeos. Y a pesar de que el Parlamento Europeo invitó a menudo a parlamentarios tunecinos en sus primeras etapas, las relaciones siguieron siendo superficiales. Rachid Ghanuchi, actual presidente del Parlamento tunecino, nunca ha visitado el Parlamento Europeo como presidente. De hecho, ha visitado Estambul y Doha, pero nunca Bruselas. Esta limitada red de contactos es también un indicador de la forma en que los europeos miraban a sus homólogos tunecinos: no son iguales.

Pero cuanto más tiempo pasa, más aumentan las presiones y empiezan a llover tímidas críticas sumadas a amenazas. En su segunda entrevista con el presidente Said el 18 de octubre, Borrell le recordó la necesidad de volver a la democracia. El Parlamento Europeo también decidió organizar una sesión plenaria sobre Túnez el 19 de octubre. Y la posibilidad de recortar las ayudas a Túnez ya se está discutiendo en Bruselas y con sus embajadas.

Respuesta de los Estados miembros más interesados

■ Francia

Francia es el primer socio económico de Túnez y el lugar de residencia de casi el 10% de la población tunecina. Durante la dictadura, los políticos franceses de todas las



Encuentro entre Kais Said, presidente de Túnez, y Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en el Palacio de Catago. Túnez, 10 de septiembre de 2021./PRESIDENCIA DE TÚNEZ/ANADOLU

AGENCY VIA GETTY IMAGES

tendencias mantuvieron estrechos vínculos con la élite gobernante. París, por tanto, vio sus intereses amenazados en 2011, y las orientaciones de los nuevos dirigentes de Túnez no siempre fueron apreciadas en Francia, sobre todo porque la democracia parlamentaria tunecina no estabilizó la situación en Túnez ni las relaciones con Francia.

Así que un cambio, fuera cual fuera, y más contra este sistema parlamentario, que volviera a poner a Túnez en la senda del presidencialismo al que Francia se ha acostumbrado en sus encuentros africanos, no sería mal recibido en París. Además, en vista de la colaboración estratégica existente en la región entre Francia, por un lado, y Emiratos Árabes Unidos y Egipto, por otro, ha habido una convergencia de intereses para que la situación cambie en Túnez: porque la caída de Ennahda y su Parlamento es también la derrota del eje Turquía-Catar, y una amenaza para sus intereses en Libia. Por tanto, Francia adoptó enseguida la posición de: “Hay que seguir con la mayor atención” lo que estaba sucediendo en Túnez, pero sin condenar. El presidente Emmanuel Macron ha hablado con su homólogo tunecino y los comunicados de prensa del Elíseo han sido indulgentes. Es más, Francia ha sido el Estado europeo que más funcionarios ha enviado a Túnez desde el 25 de julio y ha intensificado su ayuda contra la pandemia.

■ Italia

Italia viene justo después de Francia por la proximidad de las relaciones con Túnez, y es geográficamente la puerta de entrada a Europa para los tunecinos. Ante esta proximidad, lo que importa para Roma es, ante todo,

la estabilidad y el control de la inmigración. También hay numerosas empresas italianas establecidas en Túnez con considerables intereses económicos. Así, durante una entrevista con *Il Corriere della Sera* días después del 25 de julio, Ghannouchi advirtió que Italia podría verse abrumada por inmigrantes tunecinos si el país se desestabilizaba. Además, varias fuentes aseguran que 800 tunecinos hicieron el viaje que une las costas tunecinas con las de Italia la noche del 25 de julio aprovechando la situación, y luego otra decena tomó la misma ruta.

De modo que las autoridades intensificaron el control de las costas, también para evitar que los partidarios del régimen caído huyeran, y para garantizar a los italianos y europeos que la situación estaba bajo control. Se cruzaron varias llamadas telefónicas entre dirigentes tunecinos e italianos. Roma ha continuado enviando ayuda contra la Covid-19, y las relaciones han vuelto a la normalidad, a pesar de que las visitas oficiales se han estancado.

■ Alemania

El tercer socio importante de Túnez es el Estado europeo que ha expresado mayor preocupación por el futuro de la democracia en el país. Hay que decir que las fundaciones alemanas se han consolidado sólidamente en Túnez durante los últimos 10 años, y Túnez es el lugar donde consiguen trabajar con mayor libertad de toda la región árabe. Para muchos políticos alemanes, el modelo que representa Túnez podría mejorar la región árabe y merece ser impulsado. Túnez es también una fuente de miles de migrantes, incluido el que cometió el atentado de Berlín en 2016, y es un importante socio económico en potencia, debido a su proximidad a Europa y a la abundancia de energías renovables; su estabilidad, por tanto, es importante para Alemania.

Por todo ello, al día siguiente del golpe del 25 de julio, se produjeron varios comentarios escépticos de los responsables alemanes. Los comunicados de prensa de Berlín fueron también los más críticos de Europa. Aunque el gobierno de Merkel tenía sus reservas hacia el régimen anterior al 25 de julio, Túnez se consideraba una democracia. Una llamada telefónica entre Angela Merkel y Said el 29 de septiembre recordó estas posiciones. Además, la primera autoridad europea en visitar Túnez después de la llegada del gobierno de Najla Buden fue el ministro de Estado alemán el 19 de octubre.

La posición de Alemania se aproxima así tanto a la de la UE como a la de Estados Unidos, y las elecciones alemanas de septiembre de 2021 confirman que Alemania seguirá manteniendo su postura.

Lo que debería hacerse

La gran pregunta que se plantea la UE es cómo recalibrar sus relaciones con Túnez si la democracia descarrila y cómo desembolsar los fondos asignados al país sin apoyar una dictadura en potencia.

Este punto sigue siendo objeto de diferentes interpretaciones entre los Estados miembros. Europa tiene como ejemplo al Egipto de Abdelfatah al Sisi, donde las presiones de 2013 dieron paso a una normalización sin complejos, a pesar de que Egipto mantuvo sus posiciones sobre el trato a los adversarios políticos y la democratización. Cualquier comentario crítico de Europa es tr atado por El Cairo como una injerencia extranjera, algo que Bruselas parece aceptar en nombre de los intereses superiores de los Estados miembros. ¿Se reproducirá el mismo escenario en Túnez?

Como importante financiador y primer hogar de los tunecinos en el extranjero, Europa tiene sus métodos en Túnez. Pero la prioridad no es presionar a Túnez, sino a los aliados de Europa que intentan influir en la política tunecina, es decir, el eje Riad-Abu Dabi-El Cairo, por un lado, y el eje Ankara-Doha, por el otro. Su lucha en suelo tunecino y las garantías monetarias que el primer grupo ofrecería a Túnez, incluso si se suspende la democracia, pondrán en peligro todo el trabajo europeo de las últimas décadas para promover la democracia.

Por tanto, en lugar de cortar las ayudas a Túnez, la UE podría ayudar a modernizar la economía de este país incrementando los proyectos implementados localmente, en las periferias más afectadas por la crisis económica, pero también empujando a Túnez hacia una mayor inversión en energías renovables y fomentando la modernización de la agricultura, que tiene el potencial de reducir los precios al consumidor y también de aumentar las exportaciones.

A más largo plazo, la UE debería poner en marcha un programa de gran envergadura para contrarrestar las teorías de la conspiración y la desinformación. De hecho, la democracia tunecina ha sufrido enormemente a causa de esta lacra y todos los programas de fomento de la democracia se ven socavados por ella. Además, la imagen de Europa y sus programas en Túnez se ha desestabilizado en parte debido a las campañas de las que ha sido blanco en Facebook. Por eso la UE debería trabajar con Facebook para hacer frente a este problema, como han hecho algunos gobiernos para detener las influencias de Rusia, China, la extrema derecha o el extremismo religioso.

Y, por último, una vez que vuelva la democracia parlamentaria y los municipios retomen sus funciones, la UE tendrá que trabajar en estos dos ejes: el Parlamento y el poder local. Túnez debe tener un Parlamento moderno y democrático, con diputados bien informados y bien formados, un Parlamento con su propio centro de investigación y un sistema electoral más representativo que el anterior. Los hermanamientos entre los municipios europeos y tunecinos deben ser más serios y menos folclóricos, especialmente entre municipios europeos en los que residen grandes comunidades tunecinas. Esto modernizará el trabajo municipal tunecino, abrirá nuevas perspectivas económicas y mostrará que la proximidad a Europa es más que palabras huecas. ■

34 El fin de la guerra

38 El retorno talibán: el papel de Pakistán y la región

42 La victoria talibán y la nueva escena yihadista

46 La interseccionalidad de los agravios en Afganistán



Un combatiente talibán (C) sentado frente al santuario de Sakhi en la zona de Karte Sakhi, en Kabul, noviembre de 2021./HECTOR RETAMAL/AFP VIA GETTY IMAGES

Afganistán y el contexto regional

Tras más de 20 años, la retirada de Estados Unidos y de los aliados de la OTAN de Afganistán ha abierto una fase de competición entre las grandes potencias. Rusia, China, India, Pakistán e Irán (los cuatro primeros con armas nucleares), contrarios al orden occidental y deseosos de transformarlo, celebran la salida de EEUU, pero al mismo tiempo temen por las consecuencias sobre la seguridad. Sus políticas hacia Afganistán, marcadas por la desconfianza entre ellos, están condicionadas por sus respectivos intereses securitarios, económicos y políticos. Sin duda, Afganistán está llamado a ser terreno de tensiones e influencias re-

gionales, mientras que la situación interna del país abre muchos interrogantes. La presencia de organizaciones como Al Qaeda o Estado Islámico del Jorasán y las relaciones de los talibanes con varios de estos grupos hacen temer que el país se convierta de nuevo en refugio seguro para los terroristas. La supervivencia del gobierno talibán y su reconocimiento internacional dependen en gran medida de su actitud con respecto a estas organizaciones terroristas. El dominio talibán, además, supone un riesgo para la población afgana, especialmente mujeres, pero también minorías étnicas como los hazaras o los pashiris.

El fin de la guerra

Afganistán está llamado a ser terreno de tensiones e influencias regionales, mientras que la situación interna del país abre muchos interrogantes.

Mariano Aguirre

La polémica salida de Afganistán de las últimas tropas de Estados Unidos y aliados de la OTAN tendrá importantes consecuencias geopolíticas. Ese país, que estuvo en el centro de la contienda durante la última fase de la guerra fría, será ahora terreno de tensiones e influencias entre potencias regionales.

Afganistán ha sido un corredor estratégico y comercial debido a su situación geográfica entre India, Pakistán, China, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, y una zona de disputas para potencias coloniales y regionales. La perspectiva de retirada de las tropas de Estados Unidos y aliados de la OTAN, que se materializó a finales de agosto de 2021, fue produciendo movimientos geopolíticos de sus vecinos. Mientras que la situación interna del país abre muchos interrogantes, diversos intereses regionales se ponen en juego.

Entre los Estados con intereses en Afganistán, cuatro tienen armas nucleares (China, Rusia, Pakistán e India). Entre ellos, India y Pakistán consideran que este país es clave para la defensa de sus respectivas seguridades, y China e India han tenido enfrentamientos frontizos en el último año.

Después de dos décadas de guerra y cuatro de implicación en el conflicto interno afgano (desde que Washington apoyó la insurgencia pastún contra la invasión de la ex URSS entre 1979 y 1989), Estados Unidos se repliega ante la incapacidad de controlar dinámicas complejas y en el marco de su pérdida parcial de poder internacional.

China, en cambio, es una potencia en ascenso a escala global y tiene en Asia Central intereses económicos y geopolíticos. Por su parte, Rusia busca reconquistar la influencia perdida luego de su fallida intervención militar en Afganistán. A la vez, quiere prevenir que grupos islamistas radicales usen ese país y los Estados de Asia Central para lanzar ataques terroristas en territorio ruso.

De hecho, todos los vecinos (al igual que Turquía y Europa) tienen dos grandes preocupaciones a partir de la derrota de Estados Unidos. Primero, que la victoria de los talibanes lleve a que diferentes grupos insurgentes (como Al Qaeda) encuentren hospitalidad en territorio afgano o actúen desde ahí contra el nuevo gobierno de Kabul y hacia fuera (los talibanes nunca han mostrado interés en realizar ataques fuera de Afganistán). Segundo, que aumente el número de solicitantes de asilo provenientes de ese país.

Pakistán, ¿aliado o enemigo?

El principal conflicto regional que afecta a Afganistán es la competencia por la hegemonía regional entre Pakistán e India, dos Estados enfrentados, además, por el territorio de Cachemira.

La relación de Pakistán con Afganistán ha sido compleja desde la época colonial, especialmente entre el imperio Británico que controlaba Pakistán e India y los poderes tribales afganos. Para Islamabad es importante contar con Afganistán como aliado en su pugna con India.

Pero, además, existe la cuestión de la etnia pastún. Diversos gobiernos paquistaníes han preferido fomentar la inestabilidad permanente en el país vecino antes que verlo unificado bajo la hegemonía de un gobierno central controlado por los pastún (que tiene una amplia minoría en ese país). La mayor parte de los miembros de esta etnia vive en la denominada Área Tribal Administrada Federalmente (FATA, por sus siglas en inglés). El Estado paquistaní tiene acceso limitado a esa zona semiautónoma en la que opera el grupo aliado Tehrik-i-Taliban.

Entre los dos países hay, además, disputas territoriales sobre la frontera. Muchos afganos pastunes consideran que Pakistán tiene que devolver partes de las provincias de Baluchistán, Khyber Pakhtunkhwa y FATA a Afganistán, ya que les fueron arrebatadas por el colonialismo británico.

Mariano Aguirre es miembro asociado de Chatham House (Londres) y asesor *senior* de la Red de Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert. Una versión previa y más breve de este artículo fue publicada en abril de 2021 por esglobal.org.

El investigador británico, Anatol Lieven, indica que “la simpatía que sienten los paquistaníes por los talibanes tiene sus raíces en la misma dinámica que motivó su apoyo a los muyahidines afganos contra la ocupación soviética en los años ochenta. También se puede ver en el contexto de la memoria histórica de la resistencia afgana al Imperio Británico en el siglo XIX”.

En efecto, durante décadas, Pakistán ha apoyado a los talibanes, que han utilizado su territorio como retaguardia en la lucha contra Estados Unidos. El poderoso servicio de inteligencia pakistaní (el Inter-Services Intelligence o ISI, una especie de Estado dentro del Estado), como lo explica detalladamente el periodista Steve Coll en *Directorate S*, ha sido clave en el apoyo a los talibanes y a otros grupos insurgentes afganos, en especial a la Red o clan Haqqani (que ahora forma parte del gobierno en Kabul), y al grupo ultraconservador Lashkar-e-Taiba, que llevó a cabo el dramático ataque terrorista en Bombay en 2008.

La relación económica y comercial, legal e informal, es muy grande entre los dos países. El cierre de parte de la frontera por parte de Pakistán después de la salida de Estados Unidos ha creado reacciones adversas en sectores de Afganistán. Por otra parte, alrededor de un millón de afganos están refugiados en Pakistán.

Estados Unidos comenzó a favorecer la relación con India sobre la que tenía con Pakistán a partir de 2000. Pakistán dejó de ser el socio principal en la región. Desde entonces, sucesivos gobiernos en Islamabad practicaron la difícil (y aparentemente imposible) política de recibir ayuda militar de Estados Unidos, promover la inestabilidad contra este país en Afganistán y combatir a los pastún y otros grupos más radicales, pero permitiéndoles operar cuando actúan en territorio afgano. Entre 2002 y 2017, EEUU le entregó 33.000 millones de dólares en ayuda civil y militar a Islamabad para combatir el terrorismo. En 2018, la administración de Donald Trump la redujo sustancialmente.

En círculos militares y de inteligencia de Washington se considera que, en gran medida, Estados Unidos perdió la guerra en Afganistán por culpa de Pakistán. Richard Hoolbroke, enviado especial para Afganistán durante la presidencia de Barack Obama, escribió: “hay una constante en la contra insurgencia: no es posible ganar contra un enemigo que cuenta con una retaguardia segura”.

El gobierno pakistaní de Imran Khan está tratando de reestablecer los vínculos con Estados Unidos para



Miembros de la delegación talibán durante la cumbre celebrada en Moscú, a la que también acudieron representantes de Pakistán, India, Irán y China. Moscú, 20 de octubre de 2021./SERGEI BOBYLEV\TASS VIA GETTY IMAGES

volver a la buena relación que había en el pasado. Por una parte, colaboró en llevar a los talibanes a la mesa de negociación en Doha en 2020. Por otra, indica que ha abandonado la política de servir de retaguardia a los grupos insurgentes, algo difícil de llevar a cabo por el poder civil sobre la inteligencia militar.

En febrero de 2021, Pakistán anunció que está construyendo una barrera de separación de 2.640 kilómetros en la frontera con Afganistán a lo largo de la denominada Línea Durand. El objetivo es contener la acción de organizaciones armadas que operan en los dos países, como la Red Haqqani, Al Qaeda y Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). La Línea Durand fue establecida por el colonialismo británico en 1893, dividiendo a la comunidad pastún. El nuevo gobierno talibán ha dejado saber que no reconoce esta cuasi frontera, algo que ha generado preocupación en Islamabad.

En el marco de esta relación complicada, China se presenta como un posible mediador entre los dos países.

La ayuda internacional de Nueva Delhi

En la pugna con Pakistán, India ha desarrollado en la última década una fuerte presencia diplomática, comercial, de ayuda humanitaria y cooperación en infraestructuras en Afganistán. Esto generó lazos estrechos entre los gobiernos de Nueva Delhi y Kabul. Desde 2001, India proveyó 2.500 millones de dóla-

¿El fin del intervencionismo de Estados Unidos?

Veinte años separan las declaraciones del presidente Joe Biden indicando que el objetivo de la misión de su país en Afganistán no era “construir la nación” (*nation building*) sino combatir el terrorismo, y las del entonces presidente George W. Bush cuando dijo que “el fin de la tiranía en el mundo” estaba cerca. Estados Unidos iba a promover la democracia entre los denominados Estados frágiles. Ahora, Biden ha dicho que cada país debe decidir el tipo de régimen político que lo gobierne.

En estas dos décadas, Estados Unidos practicó en Afganistán e Irak el antiterrorismo, la contrainsurgencia, y promovió la construcción del Estado bajo una idea unificada de nación. Tantas misiones diferentes, acompañadas de miles de millones de dólares, acabaron en no tener estrategia, “no saber por qué estábamos ahí”, como declaró un general estadounidense, y el fracaso.

Afganistán cayó en agosto pasado en manos de los talibanes mientras que Irak es un país desintegrado entre identidades y milicias, con un gobierno más vinculado a Teherán que a Washington.

El intervencionismo ha sido una seña de identidad de Estados Unidos desde su nacimiento como nación en el siglo XVIII. Las colonias que se independizaron de Gran Bretaña lanzaron un movimiento expansionista hacia el Oeste y el Sur que se prolongó en México, el Caribe, América Central y el Pacífico. Ente la Primera y Segunda Guerra mundial, Estados Unidos se erigió en la nueva potencia imperial (aunque usando un lenguaje anticolonial) que pasó a sustituir a los imperios europeos.

Washington lideró la creación del orden liberal internacional después de la Segunda Guerra mundial, ocupando puestos claves en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y usando la diplomacia, las inversiones y la fuerza para imponer sus intereses y combatir al comunismo de la URSS.

Setenta años después, el sistema internacional ha tenido muchos cambios. Estados Unidos ya no puede imponer políticas ni controlar mercados y recursos como en el pasado. La razón es que se sobeextendió en sus capacidades militares y económicas (como ocurrió con otros imperios), que tiene graves problemas internos, y que su poder es desafiado por otras potencias grandes e intermedias.

Pero un factor decisivo que operó en Afganistán e Irak ha sido la incapacidad para entender y controlar dinámicas complejas, tanto nacionales como regionales. La región que incluye a Oriente Medio, Norte de África y Sur de Asia es el caso más claro. Pese a su poderío militar y enorme aparato de inteligencia, Washington no ha logrado en las últimas dos décadas que ni sus aliados ni sus enemigos hagan lo que desea.

Israel y Arabia Saudí toman decisiones sin consultar con la Casa Blanca, pese a las especiales relaciones militares y económicas que mantienen con Estados Unidos. Pakistán apoyaba a los talibanes mientras Estados Unidos le proveía millones de dólares en ayuda militar. La *Primavera Árabe* que una década atrás revolucionó a varios países de la región, tomó por sorpresa a los estrategas estadounidenses y sus diferentes desarrollos no han dependido de Washington. Menos aún tiene influencia decisiva en los conflictos de Yemen, Libia, Siria y el Sahel.

En el caso de Afganistán e Irak, serán China, Rusia y las potencias regionales las que interactúen con esos países. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han perdido por un tiempo prolongado las posibilidades de desempeñar un papel en la difícil reconstrucción de los dos países.

Estados Unidos seguirá siendo una gran potencia, pero en declive y en retirada de sus zonas tradicionales de influencia. Probablemente diversos gobiernos después de Biden tomarán decisiones contradictorias sobre mantener o continuar practicando el intervencionismo. Como medida intermedia, el uso de alta tecnología aplicada a la guerra (drones, inteligencia artificial, destrucción de sistemas informáticos) y los “golpes quirúrgicos”, con el menor uso posible de efectivos, será la forma del intervencionismo de la decadencia imperial.

M.A.

res en ayuda a este país. En los meses previos a la caída del país en manos de los talibanes, el gobierno indio trató de establecer lazos con este grupo.

Durante el anterior gobierno de los talibanes, India apoyó a grupos insurgentes contra ellos. Ante la nueva situación, el presidente Narendra Modi tendrá que decidir si esta vez reconoce diplomáticamente a sus antiguos enemigos. Una buena relación con Kabul le permitiría tener más control sobre los movimientos de los grupos armados Lashkar-e-Taiba y Jaish-e-Mohammad. Ambos tienen bases en las provincias que lindan con Pakistán.

Para el régimen en Kabul la fórmula óptima es contar con India y Pakistán. La masiva ayuda de India no es algo a despreciar para un gobierno aislado, sin acceso a crédito internacional, con una aguda crisis humanitaria estructural que afecta a 20 millones de personas, débil infraestructura institucional, parte de la economía apoyada en los cultivos de opio, y la insurgencia de la rama local de Estado Islámico, entre otros grupos.

Paralelamente, el gobierno indio ve con alarma la creciente influencia diplomática y económica de China en este país. Los enfrentamientos fronterizos que India ha tenido con China en el último año y medio agudizan esa preocupación.

La agenda de Pekín

Uno de los principales beneficiados de la salida de Estados Unidos será, en efecto, China. En agosto, Zhou Bo, coronel retirado del Ejército Popular chino, escribió en el *New York Times* que su país se apresta a ser el principal actor externo en Afganistán ofreciendo a Kabul “imparcialidad política e inversiones”.

Pekín, además, ha facilitado a Afganistán durante los últimos años ayuda humanitaria y para el desarrollo y las comunicaciones terrestres, ferroviarias, aéreas y digitales, manteniendo un bajo perfil político. Una de las primeras declaraciones del nuevo gobierno en Kabul fue indicar que se respetarían los intereses de China.

En 2016, Pekín y Kabul firmaron un acuerdo de participación de Afganistán en la *Belt and Road Initiative* (BRI) o nueva “Ruta de la Seda Verde”. Pekín ha promovido proyectos en minería, infraestructura de transporte y agricultura, y tiene interés en la explotación de minerales como cobre, oro, cobalto y lapislázuli.

Así mismo, China podría contribuir con efectivos para una eventual operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, si el gobierno talibán lo sollicitase.

Pero China tiene también serias preocupaciones de seguridad. Pekín considera que la alta inestabilidad en Afganistán le podría afectar a través de la frontera común que tiene en la provincia de Xinjiang, donde habita gran parte de la minoría de los uigures. En el últi-

mo año, ha habido denuncias de violaciones masivas de los derechos humanos por parte de Pekín hacia esta minoría.

Se estima que varios miles de chinos uigures forman parte de la red global de Al Qaeda, y los líderes de esta y de Estado Islámico (que lucha contra los talibanes) se han comprometido a apoyar a su yihad contra China en respuesta a sus políticas en Xinjiang.

También es una preocupación de las autoridades chinas que se incremente la oferta de narcóticos provenientes de Afganistán, y quieren preservar la estabilidad de las repúblicas de Asia Central.

China está reforzando la seguridad en la frontera Tayik, y busca fortalecer la capacidad antiterrorista del gobierno a través de la participación de Afganistán en la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y el Mecanismo Cuadrilateral de Cooperación y Coordinación China-Afganistán-Pakistán-Tayikistán.

Rusia, una nueva relación con Kabul

La ex URSS intervino en Afganistán en 1979 con el fin de estabilizar el país y prevenir que fuese usado por Estados Unidos y otras potencias extranjeras como una plataforma y como retaguardia. La intervención fue un gran fracaso y una fuente de experiencia para el yihadismo, entonces apoyado por Washington, Londres y Arabia Saudí contra la presencia soviética, que desde ahí pasó a luchar en la guerra civil de Argelia de la década de los noventa, ejecutar el 11 de septiembre de 2001 y otros atentados, y participar en las guerras de Siria y Yemen.

Afganistán es también para Rusia una fuente de posible inestabilidad (crimen organizado, islamismo radical, interferencias occidentales) en su flanco sur y en Asia Central. Moscú ha usado la fuerza contra insurgencias islamistas en Chechenia en 1999 y 2009, y en la intervención rusa en Siria desde 2016. La preocupación principal de los estrategas rusos ha sido evitar atentados y que organizaciones islamistas radicales externas no establezcan vínculos con la comunidad musulmana dentro de Rusia que agrupa entre 10 y 26 millones de personas según diferentes fuentes.

La intervención de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán desde 2003 hizo temer a Moscú que Washington y sus aliados ampliaran su influencia en Asia Central. En la medida en que la intervención occidental en Afganistán no lograba ninguno de sus objetivos, Rusia incrementó sus vínculos con los talibanes, de quienes inicialmente desconfiaba.

La salida de las tropas estadounidenses es una oportunidad para Moscú de ampliar su influencia. Como explica David G. Lewis, de la Universidad de Exeter, Rusia comenzó a dialogar con los talibanes con el fin de coordinarse para combatir a la organización armada Estado Islámico del Jorasán (ISKP), una rama

de Estado Islámico que busca establecer un califato en Afganistán, Pakistán y los países de Asia Central (Jorasán).

La política rusa en Afganistán, según este experto, “tiene como objetivo limitar la influencia estratégica occidental en un amplio arco desde Siria e Irán hasta la región de Afganistán-Pakistán y los Estados de Asia Central”, en lo que Moscú se refiere cada vez más como “la Gran Eurasia”. Otros análisis, sin embargo, consideran que Rusia carece de los fondos y la capacidad para un plan de esta envergadura, aceptando que el liderazgo alrededor de Afganistán lo tenga China.

Las preocupaciones de Irán

El 27 de octubre de 2021, el gobierno iraní convocó una conferencia internacional sobre Afganistán, con la presencia de Rusia, China, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. El objetivo de la reunión fue discutir la gobernabilidad del país. Hubo unanimidad entre los participantes respecto a que los talibanes deben consultar a la población y formar un gobierno inclusivo de todos los grupos étnicos presentes en el país. Igualmente, los vecinos esperan que Afganistán ayude a combatir el terrorismo, y consideran que se debería potenciar su integración económica y comercial en la región.

Esta iniciativa indica la voluntad de Teherán de ser un actor de peso en la cuestión afgana y su preocupación por la estabilidad del país vecino. Por otra parte, el gobierno iraní ha criticado la represión que desde agosto han llevado a cabo los talibanes contra la resistencia en el valle de Panshir, al tiempo que ha condenado los atentados realizados por Estado Islámico del Jorasán.

Las relaciones entre Irán y Afganistán han tenido momentos de alta tensión, especialmente durante el período anterior que los talibanes estuvieron en el poder. Irán alberga alrededor de 800.000 refugiados afganos. En los últimos años, Teherán ha desarrollado una política pragmática, tratando de tener buenos vínculos tanto con el gobierno afgano como con los talibanes. A la vez, le preocupan que facciones radicales de los talibanes y grupos como ISKP puedan ganar influencia, especialmente si se agrava la situación política, con la salida de Estados Unidos.

El futuro de Afganistán dependerá de la capacidad de los talibanes de gobernar y crear un Estado que satisfaga las necesidades y derechos de sus ciudadanos. Al mismo tiempo, el mayor o menor grado de estabilidad interna repercutirá en las relaciones de sus vecinos hacia este país y entre ellos. ■

El retorno talibán: el papel de Pakistán y la región

La retirada de EEUU de Afganistán ha abierto una competición entre las grandes potencias –Rusia, China, Irán, India y Pakistán– que temen por las consecuencias de inseguridad.

Ana Ballesteros Peiró

Estados Unidos ha cerrado un ciclo de 20 años de guerra contra el terror en Afganistán, pero este conflicto no ha terminado. Se abre ahora otra fase incierta de competición entre las grandes potencias. El vecindario afgano es complejo como pocos. China, Irán, Pakistán y Rusia, contrarios al orden occidental y deseosos de transformarlo, celebran la retirada de EEUU. Pero también temen las consecuencias de la inseguridad que generará la ausencia de quienes, hasta ahora, contenían las fuerzas centrífugas del yihadismo que re-nueva anclaje en territorio afgano.

En este área geográfica poco cooperativa, cada país intentará, a su manera, llenar el vacío norteamericano. Su vecino inmediato, Pakistán, apenas ha variado su postura a lo largo del tiempo. En la década de los setenta, el dictador militar Zia ul-Haq declaró algo así como que la temperatura en Afganistán debía hervir lo suficiente como para no desbordar la olla. Desde entonces, el *establishment* pakistaní se ha asegurado de que el mechero que mantiene viva la llama afgana esté en sus manos.

Para Islamabad, lo que ocurra del lado occidental de la frontera, conocida como la Línea Durand, debe estar supervisado por el tándem Islamabad-Rawalpindi. Esta posición en Afganistán viene regida por su cultura estratégica, que considera que ha de mantener a India, su principal rival, alejada de su flanco occidental. Este híbrido de política exterior y de defensa está controlado por los militares y los servicios de inteligencia (la más poderosa es el Inter-Services Intelligence, ISI).

Pakistán y el revisionismo del Sur de Asia

En 1947, Afganistán no reconoció la entrada de Pakistán en la ONU basándose en reclamaciones territoriales, que comprenden las áreas de mayoría pastún y Baluchistán, territorio dividido entre ambos e Irán. Pakistán anexionó en 1948 los principados que forman su provincia baluchí, arrebatándole a Kabul la posibilidad de tener una franja de costa en el mar Índico. Durante décadas, Kabul respaldó diversos grupos insurgentes baluchíes.

En la otra región en disputa, el gobierno afgano promovió la creación de un gran Pastunistán, que incluía los territorios de las zonas tribales y la provincia fronteriza del noroeste (lo que hoy es Khyber Pakhtunkhwa). Para contrarrestar estos dos nacionalismos étnicos, Pakistán recurrió al fomento del islamismo como fuerza unificadora. En 1971, el ascenso del nacionalismo bengalí separó al único Estado del mundo que nació por y para el islam. Desde entonces, el objetivo prioritario del gobierno pakistaní ha sido evitar mayores divisiones.

Bajo esta premisa, el papel de Pakistán en el respaldo a los talibanes es conocido. No solo albergó al liderazgo, sino que, más recientemente, el *establishment* ha ayudado a reconfigurarlo, a definir su nuevo papel y proveer ayuda militar y diplomática. Esta ayuda fue clave para la supervivencia talibán tras octubre de 2001 y, en la actualidad, para su regreso a Kabul. Pakistán ha sido fundamental en el proceso de las negociaciones de EEUU con los talibanes, tanto por su influencia en el movimiento, como por su necesidad de controlarlo. En 2010, el gobierno pakistaní encarceló al mulá Baradar, entre otras razones por contactar a sus espaldas con el presidente afgano Hamid Karzai, para llegar a una posible reconciliación. Baradar, primer ministro en funciones, estuvo en prisión hasta 2018, cuando fue liberado para poner en marcha el proceso de paz como líder de la oficina política en Doha. La petición de liberación provino del enviado especial norteamericano para Afganistán, Zalmay Jalilzad.

Los regímenes de Zia ul-Haq (1977-1988) y Pervez Musharraf (1999-2008) estuvieron condicionados por su relación con Washington. Zia, marcado por la guerra fría, gestionó durante la época de los muyahidines un flujo ingente de dólares y armamento para vencer a los soviéticos en Afganistán. Musharraf, en el inicio de la guerra contra el terror, puso a Pakistán en el frente contra los talibanes y Al Qaeda. Ahora, con un régimen híbrido, formado por Imran Khan, primer ministro figurante, y los militares gobernando, Pakistán vuelve a estar en primera línea de otro enfrentamiento global: el que

pretende frenar el ascenso de China, su mejor aliado.

A Pakistán le conviene que EEUU siga dependiendo de su espacio aéreo y rutas terrestres para operaciones de contraterrorismo en Afganistán. Esta logística, junto a la amenaza nuclear y terrorista, han sido la base para convencer a Washington de que debe seguir atendiendo las demandas de Islamabad. Después de tantos años de alianza, la hostilidad entre ambos es enorme. Queda bien reflejado en un tuit de Donald Trump en el que les llamaba mentirosos e impostores, o en las declaraciones de Hamid Gul, ex director del ISI, en la televisión nacional en las que se jactaba de que Pakistán había conseguido vencer a “América con la ayuda de América”. El mismo Imran Khan celebró la victoria talibán en agosto de 2021 afirmando que habían “roto las cadenas de la esclavitud”.

Mientras los militares estén al frente, la cultura estratégica será la misma. El yihadismo seguirá siendo el elemento con el que se tejerán alianzas con agentes no estatales instrumentales para su política exterior. Pocos países como Pakistán claman por el reconocimiento de los talibanes. La Red Haqqani es uno de sus grupos afines. Islamabad se congratula de que Sirajuddin Haqqani haya sido nombrado ministro del Interior del régimen actual. Su Red, experta en ataques suicidas, les homenajeó recientemente en un evento organizado por su ministerio.

Dimensión regional: el realismo coordinado

A partir del anuncio de la retirada progresiva de tropas de la OTAN en 2011, EEUU abogó por una mayor implicación de los países de la región. Tras el cambio de misión internacional en 2014, desde que las administraciones de Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden anunciaran sendas fechas de retirada definitiva de Afganistán, Irán, China, Rusia y Pakistán, más las cinco repúblicas centroasiáticas en mayor o menor medida, empezaron a organizarse ante la perspectiva de inestabilidad.

El Sur y el centro de Asia son dos de las regiones con menos mecanismos de cooperación y peor conectadas del mundo. Las políticas hacia Afganistán están condicionadas por la desconfianza y la competición. Pakistán lo interpreta desde el prisma de su hostilidad hacia India. Irán, a través de su enfrentamiento con EEUU. India, en función de su rivalidad con China. Esta última y Rusia adoptan diferentes papeles en su an-



Gráfico: Adriana Exeni

tagonismo con EEUU. Pero hay más factores en esta ecuación.

Todos ellos comparten su alarma ante la inestabilidad en ciernes. No en vano, la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Dushambé (Tayikistán, septiembre 2021), se centró en la situación en Afganistán. China, India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, con la reciente adhesión de Irán como miembro pleno, reflejan la ascendencia de la organización, marcada, eso sí, por una agenda sinocéntrica.

Los países de la región se están organizando bajo lo que parece un realismo coordinado. India, Rusia e Irán, que apoyaron diversas milicias de la Alianza del Norte durante la guerra civil afgana en los años noventa, han decidido no polarizar más el panorama étnico y no apoyar a la llamada “resistencia” del Panshir. Sus dirigentes, especialmente rusos e iraníes, han adoptado una postura, según ellos, más “pragmática” hacia los talibanes. Un reconocimiento tácito de que son una realidad ineludible. Igualmente, muestra la voluntad de no cometer los mismos errores del pasado y, así, no cerrarse ninguna puerta.

Los países de la OCS rechazan los tres males del terrorismo, extremismo y separatismo. Al igual que China y Rusia, Irán está satisfecho con la marcha de EEUU y se jacta de lo que define como una derrota. Teherán ha proyectado su influencia sobre actores afganos cercanos a su órbita con el objetivo de equilibrar el poder que ejercía no solo EEUU, sino también actores regionales como Pakistán, y enemigos, como Arabia Saudí.



Afganos esperan para cruzar a Pakistán en Spin Boldak, el 3 de noviembre de 2021, después de que las autoridades reabrieran la frontera tras un cierre de casi un mes./JAVED TANVEER/AFP/GETTY IMAGES

Estado Islámico del Jorasán (ISKP) y otros grupos de confesión suní en la provincia del Sistán-Baluchistán suponen un reto de seguridad. El gobierno de Teherán considera que, tras ellos, está la mano saudí, que intenta atacarle en su flanco oriental como represalia por su apoyo a actores no estatales en Siria o Yemen. Igualmente, Irán estima que EEUU, Arabia Saudí y Pakistán actúan de *spoilers* para frenar su proyección en Asia Meridional y sus pretensiones de expansión hacia Asia Central.

La relación de Irán con los talibanes sigue sin ser positiva. El peor momento fue en 1998, cuando asediaron el consulado en Mazar-e Sharif y asesinaron a ocho diplomáticos iraníes. Teherán concentró a unos 80.000 soldados en la frontera bajo amenaza de intervención. Hasta 2010, el gobierno iraní se mostraba reacio a que hubiera negociaciones entre el gobierno afgano y los talibanes, especialmente tras el asesinato de uno de sus aliados tradicionales, Burhanuddin Rabbani, que había sido nombrado director del Consejo Superior para la Paz por Hamid Karzai. En septiembre de 2011, Rabbani fue asesinado en un atentado suicida atribuido a un comandante talibán.

Teherán proyecta su poder e influencia en Afganistán a través del legado persa y chií, confesión a la que pertenece la comunidad hazara. A partir de 2007, Irán empezó a acercarse a algunos talibanes, aun cuando eran conscientes de que el ala dura no le tenía ninguna simpatía. Por eso, buscó entre ellos quienes estuvieran dispuestos a aceptar sus condiciones. Uno de los fundadores del ala política talibán, Muhammad Tayyab Agha, fue la persona de contacto de los talibanes con Teherán.

Tras los atentados de ISIS en julio de 2017, Irán se planteó adoptar una postura más proactiva en Afganistán. El nuevo general de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y comandante de las Fuerzas Quds, Esmail Qaani, conoce el terreno. En el pasado, tuvo un papel importante en el reclutamiento de afganos en la guerra de Irán-Irak y en el frente anti-talibán. Qaani conoce la frontera con Afganistán, donde ha trabajado en la lucha antinarcóticos y contraterrorista. Sin embargo, delegar en grupos no estatales de la misma manera que en Siria, podría exacerbar más la securitización de las identidades sectarias en el vecindario oriental, incrementando la inseguridad.

La minoría hazara está doblemente castigada por los talibanes y por Estado Islámico del Jorasán (ISKP). Hay pruebas de que están siendo expulsados de sus tierras como castigo por su papel en la anterior administración y por ser chiíes. Human Rights Watch considera que los atentados contra ellos pueden ser calificados como crímenes contra la humanidad. Este factor es un elemento de constante

enfrentamiento entre Teherán y Kabul. El líder supremo, Alí Jamenei, declaró: “tendremos con los talibanes la relación que ellos tengan con nosotros”. A juzgar por el gobierno talibán no inclusivo y el trato a las minorías afines, se puede entrever una relación hostil con Teherán.

India ha actuado como donante y ha desarrollado diversas infraestructuras. La construcción del Parlamento afgano fue una de sus más firmes muestras de apoyo al régimen surgido en 2001. Delhi ha proyectado no solo poder blando sino una diplomacia orientada a ganarse el apoyo de los afganos. Asimismo, India ha seguido siendo destino del entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas. Para Delhi, al igual que el anterior gobierno afgano, la victoria talibán es una invasión pakistaní con cara afgana.

Dada la hostilidad mutua, India precisa evitar a Pakistán. Irán es su alternativa para acceder a Afganistán, Asia Central y Rusia. Del mismo modo, necesita mantener buenas relaciones con Oriente Medio, que define como Asia Occidental. Por una parte, el objetivo de Delhi es reducir la influencia de Pakistán y su propaganda, que le presenta como un Estado antimusulmán. Al igual que China, India depende de la energía de esta región para mantener su crecimiento económico. Sus principales proveedores son miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) e Irán, de los que procede más del 75% de su energía. En el CCG tiene, además, millones de trabajadores que son fundamentales para la entrada de capital extranjero en forma de remesas.

En la década de los noventa, India se embarcó en la construcción del puerto de Chabahar (Irán). Al igual que

el puerto pakistaní de Gwadar, Chabahar está en la costa baluchí de Makrán, a orillas del océano Índico. La presión de Washington sobre Delhi acrecienta la competitividad con China y añade más tensión a unas relaciones complicadas entre los dos grandes de Asia. India intenta mantener una ventaja estratégica en el Índico, donde tiene que equilibrar su vínculo con EEUU, Irán y Rusia, y no provocar reacciones adversas de China. Para EEUU, India ha sido tradicionalmente el frente para contrarrestar el ascenso de China.

Que EEUU desdeñe el peligro que representan la rama de Al Qaeda en el subcontinente indio (AQIS) y la plétora de grupos insurgentes bajo la órbita de Pakistán, para India es casi insultante. La relación del ISKP con grupos pakistaníes como el Lashkar-e Taiba o el Jaish-e Mohammed, deseosos de atacar al gobierno de Delhi, es una constante preocupación. Para Pakistán, estos grupos son instrumentales para internacionalizar el conflicto de Cachemira y forzar un referéndum sobre el estatus de esta región. En este frente, tanto Pakistán como China pueden presionar a India a lo largo de su larga frontera.

La política de China en Afganistán está directamente relacionada con la seguridad en la provincia de Sinkiang, región clave para su *Belt and Road Initiative*. Pekín cree que el desarrollo y la riqueza alejarán a los uigures del islamismo y del terrorismo. Esta es la base de su acercamiento a los talibanes. A pesar de la foto del ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, con el liderazgo talibán en Tianjin de julio 2021, que China esté dispuesta a aceptar el gobierno talibán no quiere decir que acepte su naturaleza. La postura de Pekín está clara: desarrollo e infraestructuras a cambio del control de la insurgencia uigur.

El *win-win* o todos ganan es un concepto de difícil encaje en una región en la que los conflictos se perciben como un juego de suma cero. Pekín solo invertirá en Afganistán si mejora la seguridad y el resto de los países reman a favor. Este es, aunque en menor grado, el mismo dilema al que se enfrenta en Pakistán, de quien espera ayuda para contrarrestar el auge de India y acceder al Índico. Con todo, los trabajadores chinos implicados en el desarrollo del Corredor Económico Pakistán-China han sido atacados en repetidas ocasiones por grupos insurgentes baluchíes y el Movimiento Talibán de Pakistán (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP).

En abril de 2021, el TTP atacó con un coche bomba el hotel en el que se hospedaba el embajador chino en la ciudad de Quetta, la capital de Baluchistán. Pekín, sin duda, toma buena nota de lo que le puede esperar en Afganistán, un país mucho menos estable. Confiar en que los talibanes afganos puedan cumplir su promesa de mantener a raya a los miembros del Movimiento Islámico del Turkestan Este en su territorio parece una expectativa irreal.

En la última cumbre del G-20, Wang Yi, una vez más, demandaba a los talibanes que no permitieran que su

territorio fuera utilizado para la comisión de atentados y que nombraran un gobierno inclusivo. A cambio, ofrecía reclamar apoyo humanitario y el levantamiento de sanciones. A juzgar por la reacción talibán, Pekín parece ser otro vecino contrariado.

Rusia ha esperado el fracaso de EEUU y la OTAN en Afganistán. Moscú, al igual que Teherán, apoyó en los últimos años a grupos talibanes con el objetivo de mantener a los norteamericanos inmersos en el conflicto. Pero, a pesar de lo irritante de que estuvieran en el vecindario, también se benefició de la labor de las tropas internacionales frenando la inseguridad. Ahora, tanto Moscú como las repúblicas centroasiáticas, se encuentran con un foco de inestabilidad a las puertas.

Los dos principales factores con los que el Kremlin justifica su interés en Afganistán tienen que ver con el ascenso del ISKP (frenar atentados y la expansión de ideología yihadista) y la criminalidad asociada a los narcóticos (que ayudan a financiar el yihadismo y suponen un problema de salud y orden públicos). Estas son amenazas que comparte con los países con los que Afganistán tiene frontera: Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Rusia tiene bases militares en Tayikistán y Kirguistán, miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC) que lidera Moscú. Es poco probable que Moscú intente llenar la ausencia de EEUU de la misma forma que hizo en Siria, especialmente dada su experiencia anterior. Previsiblemente, se implicará de forma indirecta. Para ello, hará uso de su proximidad con las repúblicas de Asia Central, de las que necesitará que hagan de barrera protectora.

Al igual que China, el Kremlin presionará a la comunidad internacional para que reconozca a los talibanes. La postura rusa, como en Siria, es que hay que trabajar con lo que se tiene en cada país no con lo que se quiere tener. Así, para ellos, el arte de gobernar consiste en admitir la realidad talibán en Afganistán e impedir males mayores. Moscú debe equilibrar la influencia económica de China en las repúblicas centroasiáticas y también la creciente implicación militar. Especialmente, en Tayikistán, donde Pekín está reforzando su base. Otro país con el que mantener equilibrios es India, donde un mayor acercamiento a EEUU puede ser una mala noticia.

En general, la región entiende que el problema de la seguridad en Afganistán no está aislado del resto de cuestiones políticas, económicas y sociales. Intentar imponer la paz de los cementerios de la mano talibán no funcionará. Mientras la región solo vea en Afganistán sus propios intereses, no habrá solución posible. La crisis humanitaria, de excepcional proporción, insta a un esfuerzo colectivo de coordinación que frene que los afganos, y especialmente las afganas, continúen pagando la factura más alta de todas. ■

La victoria talibán y la nueva escena yihadista

La presencia en Afganistán de Al Qaeda o ISIS y las relaciones de los talibanes con varios de estos grupos hacen temer que el país se convierta de nuevo en refugio terrorista.

Weeda Mehran

La victoria talibán ha dado lugar a diferentes reacciones, desde la celebración hasta la condena, que indican la existencia de fracturas en el movimiento yihadista. En general, el triunfo de los talibanes ha supuesto un fuerte impulso tanto para ellos como para otros combatientes yihadista. Esta lectura de los hechos, unida al caos y la humillación de la retirada de Estados Unidos, ha marcado un punto de inflexión. Las milicias islamistas llevan tiempo sacando partido al relato de la derrota de la Unión Soviética en Afganistán. Por ejemplo, Al Qaeda lo ha utilizado con frecuencia para elevar la moral y obtener apoyo. Según Jason Burke (2021), a pesar de que en la guerra contra la invasión soviética de Afganistán (1979-1989) solo lucharon unos pocos centenares de extremistas internacionales, la historia del sometimiento de los soviéticos —una superpotencia— se convirtió en un “mito fundacional” de estos movimientos. Los militantes suníes de Oriente Medio, entre otros lugares, han dejado claro que la victoria talibán confirma su propia estrategia yihadista y sus ideologías (Burke, 2021).

Teniendo en cuenta las estrechas relaciones de los talibanes con varios grupos terroristas, que actúan en los planos regional o internacional, inevitablemente su triunfo ha suscitado preocupación por la posibilidad de que Afganistán vuelva a convertirse en un refugio seguro para las organizaciones terroristas. Por ejemplo, los talibanes tienen fuertes vínculos con Jamaat Ansarullah, grupo terrorista fundado hace una década por un antiguo jefe de la oposición tayika (Ahmadi, Yusufi y Fazliddin, 2021). Hace poco, los talibanes pusieron al militante tayiko Mahdi Arsalon y a su grupo, miembro de Jammāt Ansarullah, al frente de cinco distritos de la provincia de Badajshán, fronteriza con Tayikistán (Ahmadi, Yusufi y Fazliddin, 2021). Arsalon y sus combatientes son conocidos como “los talibanes tayikos”. Los combatientes de Jamaat Ansarullah, que lucharon al lado de los extremistas afganos, llamaron por primera vez la atención de las autoridades afganas en 2020, cuando se publicó en las redes sociales una grabación

en la que aparecía un grupo de insurrectos asesinando brutalmente a varios hombres vestidos con uniformes del ejército de Afganistán (Radio Free Europe 2021). Así, con los combatientes de Jamaat Ansarullah y otros grupos terroristas como el Movimiento Islámico de Uzbekistán (Giustozzi, 2021) activos en Afganistán, la preocupación por la seguridad en los países de Asia Central está bien fundamentada.

El ascenso de los talibanes al poder ha provocado, sin duda, la preocupación de India, archienemigo de Pakistán. Tras la caída de Kabul en manos de los talibanes, su portavoz, Suhail Shaheen, declaró a la BBC: “Como musulmanes, también tenemos derecho a alzar nuestra voz por los musulmanes de Cachemira, India o cualquier otro país” (Khare, 2021). En ocasiones, las autoridades pakistaníes han hecho declaraciones similares. Por ejemplo, Neelam Irshaad Sheikh, líder del Movimiento por la Justicia de Pakistán, actualmente en el gobierno, afirmaba que “los talibanes nos han dicho que están con nosotros y que nos ayudarán a [liberar] Cachemira” (Khare, 2021).

Si los dirigentes talibanes hablan de la posibilidad de yihad en otros lugares, los soldados de a pie parecen añorar la acción yihadista. De hecho, algunos combatientes talibanes están ansiosos por continuar su yihad y aspiran al martirio, ya que la victoria en Afganistán no significa necesariamente el fin de su carrera yihadista. En una entrevista con *The Washington Post*, un comandante talibán advertía: “A muchos de mis hombres les preocupa haber perdido la oportunidad de alcanzar el martirio en la guerra... Yo les digo que tienen que relajarse. Todavía tienen la posibilidad de convertirse en mártires, pero este ajuste tardará tiempo” (George, 2021).

Otros actores importantes en la escena yihadista son Al Qaeda y Estado Islámico del Jorasán (ISKP). Mientras que los talibanes gozan de una relación estrecha y recíproca con Al Qaeda, su relación con el ISKP ha sido amarga y hostil. La supervivencia del gobierno talibán y su reconocimiento internacional dependen en gran medida de cuál sea su actitud con respec-

to a grupos como Al Qaeda, ISKP y otras organizaciones terroristas.

Al Qaeda y sus filiales

Al Qaeda y los talibanes tienen una larga historia de cooperación y codependencia desde hace décadas. Es poco probable que este vínculo se rompa a corto plazo, sobre todo ahora que los talibanes controlan el país y ambos tienen un enemigo común: Estado Islámico del Jorasán (ISKP). Un breve vistazo a las relaciones entre los talibanes y Al Qaeda demuestra la profundidad y el alcance de sus lazos. Al Qaeda prometió lealtad al mulá Omar en 2001 (Joscelyn, 2016), y renovó su juramento al mulá Akhtar Mohamed Mansur en 2013, cuando se descubrió que el mulá Omar estaba muerto desde 2013 (Bunzel, 2020).

En las últimas décadas, muchos miembros destacados de la cúpula de Al Qaeda han residido en Afganistán y en la región fronteriza de Pakistán, y un buen número de combatientes de Al Qaeda, así como otros extremistas extranjeros que colaboraban con los talibanes, se han instalado en zonas de Afganistán. Según un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2020), durante las negociaciones con Estados Unidos, los talibanes consultaban frecuentemente a Al Qaeda sobre el acuerdo de paz con los estadounidenses. Mientras que otros grupos, como ISIS, desaprobaban la política talibán de negociación con EEUU, Al Qaeda calificó a los talibanes de firmes y fieles a su fe, a pesar de que el acuerdo exigía específicamente a los talibanes que rompieran sus lazos con ella. Posteriormente, Al Qaeda juró fidelidad al siguiente líder talibán, el mulá Hibatullah Akhundzada, después de que el mulá Akhtar Mansur muriera en un ataque aéreo en 2016 (Bunzel, 2020). Más tarde, en 2017, el líder de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), filial de Al Qaeda, pronunció tres juramentos: uno al líder de AQMI, otro a Al Zawahiri, y un tercero al mulá Hibatullah Akhundzada, líder talibán. Al Zawahiri, jefe de Al Qaeda, animó a Hayat Tahrir al Sham (HTS) a que jurase lealtad a Akhundzada. Sin embargo, en un comunicado, el representante de HTS rechazó la idea y afirmó que el grupo sirio no debía lealtad a los talibanes, aunque consideraba el acuerdo de los talibanes con EEUU como una victoria y los felicitaba.

Por ello, no resulta sorprendente que Al Qaeda respaldase a los talibanes durante las negociaciones con EEUU y cuando el grupo se hizo con el control de Afganistán. Varios medios de comunicación relacionados con la cúpula de Al Qaeda y con miembros de la organización consideraron la llegada de los talibanes al poder como un gran logro, y publicaron docenas de declaraciones felicitándolos (Burke, 2021). Por ejemplo, combatientes de la filial de Al Qaeda en Yemen celebraron el regreso de los talibanes al gobierno con disparos y fuegos artificiales en el estado de Al Bayda y en la provincia de Shabwa, en el Sur del país. Otros, como

Hayat Tahrir al Sham, una facción escindida de Al Qaeda, calificaron el éxito talibán de “victoria para los musulmanes, para los suníes y para todos los oprimidos” (Burke, 2021).

Un Afganistán gobernado por los talibanes podría ser la situación perfecta para que prosperen Al Qaeda y otros grupos, como ISIS. Como afirmaba el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, organizaciones como Al Qaeda e ISKP siempre “intentarán encontrar espacio para crecer y regenerarse” (Seldin, 2021). Antes de que los talibanes tomaran el control de Kabul, un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2021) calculaba que había entre 8.000 y 10.000 combatientes extranjeros en Afganistán. Según algunas estimaciones, en el pasado 20.000 combatientes extranjeros participaron en la lucha contra la invasión soviética de Afganistán (Neumann, 2015).

Por lo tanto, la preocupación por la voluntad o la capacidad de los talibanes de romper sus vínculos con Al Qaeda está justificada.

Estado Islámico y los talibanes

Estado Islámico ha sido rival de los talibanes en Afganistán. ISKP ha combatido contra ellos en numerosas ocasiones. La filial afgana de ISIS surgió en 2015, después de que este proclamara su califato en Siria. En un principio, la postura política de ISKP era contraria a los gobiernos pakistaní e iraní. A partir de 2017, su atención pasó a centrarse en un control más general antitalibán y antiafgano (Mir, 2021). ISKP está establecido sobre todo en las provincias orientales de Afganistán, en particular en Nangarzhar, situada cerca de las rutas del narcotráfico y el contrabando con Pakistán (Gardner, 2021). El grupo dispone, por tanto, de recursos y tiene un interés particular en la zona.

Las fricciones entre ISKP y los talibanes también tienen su origen en las diferencias en sus fundamentos ideológicos y sus puntos de vista sectarios. ISIS cree que los talibanes no han aplicado la ley islámica con suficiente rigor. Además, mientras ellos siguen la escuela yihadista salafista, los talibanes se adhieren a una escuela islámica sectaria suní alternativa, el movimiento deobandi de la India colonial británica del siglo XIX (Mallet, 2015). ISIS ha acusado con frecuencia a los talibanes de abandonar el islam. Los talibanes intentan presentarse a sí mismos como un movimiento nacionalista, mientras que ISIS juzga esta postura como un error teológico y considera a los talibanes un movimiento nacionalista y politeísta (Bunzel, 2020). En su boletín oficial, *Al Naba*, ISIS se refería a ellos como apóstatas debido a su voluntad de negociar con EEUU, y juró seguir con sus ataques contra las fuerzas estadounidenses a pesar del acuerdo de paz firmado entre estos y los talibanes. Para ISIS, alcanzar la victoria a través de su yihad es crucial, y hacerlo combatiendo constituye la esencia del yihad. En *Al Naba*, ISIS afirmaba que los “nuevos taliba-

nes” son un grupo musulmán fraudulento, y que Afganistán no se ganó por el combate, sino que el país les fue entregado en bandeja de plata. El portavoz oficial de ISIS, Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, opinaba que el acuerdo destruía a Estado Islámico en Afganistán. (Bunzel, 2020)

Según un informe de Naciones Unidas, desde 2020, el líder de ISKP, Shahab al Muhayir, se ha centrado en reconstruir el grupo, que ha adquirido capacidad y fuerza renovadas con el reclutamiento de talibanes desafectos (Mir, 2021). Muestra de ello es el atentado suicida contra el aeropuerto internacional de Kabul del 26 de agosto de 2021, en el que murieron más de 170 civiles y 13 soldados estadounidenses (Liebermann y Bertrand, 2021). Para añadir más complejidad al asunto, los talibanes han utilizado a ISKP como tapadera para la violencia (Mir, 2021), así como moneda de cambio para el reconocimiento internacional. El anterior gobierno de Afganistán acusó a la Red Haqqani, fracción talibán, de colaborar con ISKP en atentados en las ciudades. El informe del Consejo de Seguridad de la ONU (2021) también ha señalado cierta colaboración localizada entre ISKP y los comandantes talibanes, en particular la Red Haqqani. Los talibanes iniciaron una campaña de represión contra sus rivales poco después de hacerse con el control del país (Liebermann y Bertrand, 2021). El grupo mató a varios miembros de ISKP, entre ellos a Abu Omar Khorasani, antiguo líder de Estado Islámico en Afganistán (Cullison, 2021). ISIS puede ser una amenaza para la comunidad internacional. Aunque los talibanes han estado compitiendo por el reconocimiento internacional, también han advertido que necesitan ayuda y apoyo para luchar contra otros grupos terroristas, incluido ISKP en la región.

Diferencias estratégicas

En el conjunto de la escena yihadista, los grupos extremistas violentos están divididos en lo que respecta a los talibanes y su victoria en Afganistán. Esta división pone de manifiesto esencialmente las diferencias estratégicas entre los grupos que muestran mayor nivel de pragmatismo, y los que creen en la violencia sin paliativos y en el compromiso extremo con la pureza doctrinal. Osama bin Laden, por ejemplo, instaba a sus seguidores a impedir las muertes innecesarias de civiles. Su principal preocupación era la imagen pública de Al Qaeda. Incluso se planteó cambiar el nombre del grupo como parte de una renovación general de la marca. En particular, le preocupaba la pérdida de reputación de Al Qaeda entre los musulmanes (Burke, 2021).

Sin embargo, desde la muerte de Bin Laden, su sucesor, Ayman al Zawahiri, ha dejado de lado los atentados a gran escala en Occidente a favor de una guerra sin fin. Mientras que algunos expertos creen que Al Zawahiri está empeñado en una guerra perpetua contra los infieles y los apóstatas dirigida por una vanguardia ra-

dical hasta el establecimiento de un califato (Burke, 2021), otros afirman que Al Qaeda ha dado un giro hacia el pragmatismo y ha cambiado los objetivos de alcance mundial por el poder regional y local. Mohamed al Jawlani, líder de HTS, ha intentado una transición del extremismo violento a una forma híbrida de gobierno civil e insurgencia. Además, si bien es posible que los talibanes y Al Qaeda no vuelvan a su relación anterior a 2001, Colin Clarke (2021) opina que el peligro en estos momentos es que “ambos se unan para reforzarse mutuamente en su lucha por el poder, combatir a los enemigos yihadistas comunes y contribuir a los intentos de Pakistán de desestabilizar el Sur de Asia”. Así, al adoptar una postura pragmática basada en sus metas estratégicas a largo plazo, Al Qaeda compite por el poder regional y persigue objetivos locales (Clarke, 2021). Al mismo tiempo, los talibanes son conscientes de que permitir que los grupos terroristas organicen ataques contra Occidente no los beneficiará lo más mínimo.

Conclusión

Algunos expertos temen que la victoria de los talibanes provoque un aumento de los atentados terroristas en otros países, tanto en la región como en Occidente. Por ejemplo, el coronel Richard Kemp, antiguo jefe de las fuerzas británicas en Afganistán, declaró tras la caída de Kabul que había una perspectiva inminente de ataques por parte de grupos yihadistas en Reino Unido inspirados por la caída de la capital afgana (Rayment, 2021).

La presencia talibán en Afganistán puede suponer una oportunidad para que ISKP reclute combatientes antitalibanes o decepcionados con el movimiento. En el pasado, los talibanes colaboraron con Estados Unidos para combatir a ISKP. Tanto este último como Al Qaeda ambicionan llevar a cabo acciones terroristas transnacionales. ISKP cuenta con fuerzas formadas por combatientes extranjeros procedentes del Sur de Asia, Oriente Medio y diferentes zonas de Europa (Mir 2021). Es más, los talibanes mantienen fuertes vínculos con otras organizaciones terroristas, como el Movimiento de los Talibanes Pakistaníes, Jamaat Ansarullah y el Movimiento Islámico del Turkeistán Oriental, por citar solo algunos.

Si la presencia de estos grupos en Afganistán se prolonga y sus bases se refuerzan, pueden socavar el dominio talibán en el país. Estos temores relacionados con la seguridad y la no tan lejana historia de colaboración de los talibanes con varias organizaciones terroristas constituyen la principal preocupación de muchos actores locales e internacionales, que han rehusado reconocer a los talibanes como el gobierno legítimo de Afganistán. Queda por ver si los talibanes logran formar un gobierno aceptable para la comunidad internacional, y si son capaces y quieren evitar que Afganistán se convierta en un refugio para el terrorismo. ■



Informe Semanal de POLÍTICA EXTERIOR

EDITADO POR ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR, S.A.

INFORME SEMANAL DE POLÍTICA EXTERIOR



Espacio exterior: Salvaje oeste

Actualmente, unos 5.000 satélites activos orbitan el planeta. Las principales potencias espaciales Estados Unidos, China y Rusia compiten por una zona sin fronteras y en medio de un vacío legal, lo que a su vez convierte las órbitas bajas en un vertedero.

Economía europea: Deuda pública y recuperación verde

Los altos niveles de deuda y déficit públicos heredados por la pandemia requieren atención, pero lograr una economía libre de emisiones exigirá en los próximos años un mayúsculo ejercicio de inversión pública.

China-EEUU: Didi y las tecnológicas chinas

China sigue haciendo presión a sus empresas tecnológicas que operan fuera del país para que vuelvan a 'casa'. Así trata de evitar la salida de datos e información de sus ciudadanos al extranjero recopilada a través de las 'apps'.

Estrecho de Malaca: Paso geoestratégico en disputa

China está tratando por numerosas vías -desde abrir rutas alternativas a transformar su modelo energético- de reducir la dependencia del estrecho de Malaca como tránsito clave para mantener su condición de fábrica del mundo. A corto plazo, sin embargo, Malaca seguirá manteniendo su condición de paso estratégico.



13 de diciembre de 2021

[DESCARGAR PDF](#)

Cada lunes, análisis breves y exclusivos
Suscríbete por un año...
...o compra ejemplares individuales

politicaexterior.com

Facebook - Twitter

La interseccionalidad de los agravios en Afganistán **“La mitad del futuro del país, el de las mujeres, sus vidas, sus libertades y sus derechos están en juego. Eso significa que el futuro de todo el país está en juego”.**

CONVERSACIÓN con *Fatima Rahmati y Nilab Nusrat* por *Clara Vila y Maisara Sassi*

La gravedad de la situación en Afganistán ha sacudido todos los aspectos de la vida, por lo que resulta oportuno reflexionar sobre las cuestiones relativas al sufrimiento desproporcionado de los grupos más vulnerables, el papel de la sociedad civil afgana para abordar estos agravios, los canales de desobediencia civil y la solidaridad internacional. Con el propósito de obtener una perspectiva endógena sobre estos asuntos, **AFKAR/IDEAS** ha tenido la oportunidad de hablar con dos activistas afganas de la organización Women for Afghan Women (WAW), que están involucradas en la defensa de estas causas: Fatima Rahmati y Nilab Nusrat.

Al reflexionar sobre el actual calvario al que se enfrenta el país, Fatima Rahmati afirma que “este es el inicio de un periodo muy oscuro para Afganistán. La historia nos lo dice”, mientras busca activamente la manera de defender los derechos de los afganos desde Nueva York. Nilab Nusrat, que ahora vive a través de los ojos de su familia que está en Afganistán, revela que su casa “se ha convertido en una prisión”, y añade: “mi familia está racionando los alimentos, intentan comer solo una vez al día para poder ahorrar dada la incertidumbre de la situación”.

Habiendo nacido y al haber sido desplazadas de Afganistán a una edad temprana, tanto Rahmati como Nusrat aportan una visión perspicaz de los problemas cotidianos a los que se enfrentan los afganos tanto dentro como fuera del país. Rahmati,

que se crió entre Afganistán, Australia y Estados Unidos, no es ajena a la defensa de los derechos, ya que ha trabajado en el ámbito de la educación, la justicia social y la filantropía, y ha formado parte del International Refugee Assistance Project, en Afghan Hands, y actualmente de WAW. Nusrat, que también fue desplazada cuando era pequeña, vivió en Afganistán, Pakistán y Estados Unidos, defendiendo y apoyando a mujeres, niños y otras poblaciones marginadas desde WAW, y como asistente en materia de desarrollo y comunicaciones en United Neighbourhood Houses de Nueva York.

Ambas activistas coinciden en insistir en que la ideología talibán no ha cambiado, especialmente a la luz de las recientes declaraciones de los talibanes comprometiéndose a evolucionar en asuntos relacionados con la vida social y los derechos civiles. Nusrat se posiciona claramente: “Realmente no creo que los talibanes hayan cambiado en absoluto, siguen hablando como lo hacían cuando tomaron el control de Afganistán en 1996... en cualquier caso ahora están más organizados y son más ágiles con los medios de comunicación”. Nusrat añade que han convertido las redes sociales en un arma para ampliar su base y para monitorizar el contenido que comparte el público en general. Continúa relatando un incidente que vivió una amiga suya que trabajaba en las noticias locales en Afganistán, quien afirma que fue objeto de amenazas por parte de los talibanes, que le plantearon un ulti-

mátum: “retratarlos de una manera concreta o enfrentarse al cierre del canal y, a la postre, a la muerte”.

De forma similar, Rahmati reitera esta narrativa: “hay mucha propaganda en juego. Quieren presentarse como distintos, evolucionados. Sin embargo, vemos que esto sencillamente no es verdad”. Continúa exponiendo brevemente las injusticias y perjuicios a los que se ha enfrentado y a los que se sigue enfrentando la sociedad afgana: “las niñas de sexto curso en adelante no pueden ir a la escuela. Las mujeres no pueden trabajar en la mayoría de sectores... El Ministerio de la Mujer ha sido sustituido por el Ministerio del Vicio y la Virtud. Las comunidades hazaras y chiíes están siendo atacadas y desplazadas”. Lo que puede ser diferente, lamentablemente, añade Rahmati, es que los talibanes “seguirán oprimiendo y llevando a cabo ejecuciones y amputaciones de manos, pero esta vez no lo harán en público”.

Aunque los afganos en conjunto no son ajenos a los crímenes de los talibanes, se puede afirmar que algunos segmentos de la sociedad han sufrido más que otros y de manera desproporcionada, generando así una cultura de interseccionalidad del sufrimiento. Las cuestiones de identidad son clave en la experiencia de los individuos. Nusrat sostiene que “hay tres cuestiones de identidad que determinan el poder que tienes y lo que puedes o no puedes hacer: tu género, tu estatus familiar y tu etnia”.

Los talibanes no han cambiado, pero ahora son más ágiles con los medios de comunicación

NILAB NUSRAT

La opresión y el terror impuesto sobre las mujeres es quizás el tema por el que más se conoce a los talibanes. Rahmati expresa su temor ante esta realidad continuada, exclamando que “la mitad del futuro del país, sus vidas, sus libertades y sus derechos humanos están en juego. Lo que realmente significa que el futuro de todo el país está en juego”. Pese a las declaraciones de los líderes talibanes prometiendo supuestamente un cambio de ideología en torno a los derechos de las mujeres, la realidad no lo refleja. Las mujeres no pueden trabajar en la mayoría de los sectores, y a las que sí que se les permite trabajar, se les imponen normas estrictas. Rahmati deja muy claro que, si hay algún cambio a mejor, no es “un cambio proveniente de los talibanes, sino que las mujeres afganas han conseguido construir vidas a las que no están dispuestas a renunciar”. Nusrat explica el caso de su hermana, que vio truncados sus anhelos de estudiar Periodismo en la Universidad de Kabul cuando le prohibieron volver en agosto. En esta realidad, las mujeres que, como la hermana de Nusrat, quieren dedicarse al periodismo, no solo son objeto de ataques por su género, sino también por su trabajo. Como dice Rahmati, “los periodistas y la libertad de prensa están en el punto de mira y más de 250 medios de comunicación han cerrado en los últimos tres meses.” En cuanto a las vulneraciones étnicas, “los hazaras y los panshiris están muy marginalizados y fuertemente discriminados”, comenta Nusrat. Históricamente, la minoría étnica musulmana chií, los hazaras, ha sido brutalmente oprimida, asesinada, desahuciada y desplazada por los talibanes. La focalización vio-



Vigiladas por un combatiente talibán, mujeres afganas esperan la cola para acceder a la distribución de dinero organizada por el Programa Mundial de Alimentos. Kabul, 29 de noviembre de 2021. /HECTOR RETAMAL/AFP/VIA GETTY IMAGES

lenta en grupos étnicos y religiosos es otra realidad interseccional de sufrimiento que debe tenerse en cuenta al abordar el dominio talibán. En cuanto a las consecuencias humanitarias, Nusrat explica su preocupación por las condiciones de los refugiados, e insiste en diferenciar entre “la gente que tenía medios, dinero y contactos y pudo salir de Afganistán, y la gente más pobre que no pudo conseguir un pasaporte y fue desplazada de una provincia a otra”. A pesar de la distinción entre desplazamiento interno y externo, y de las interseccionalidades que cada forma encierra, en última instancia subraya que todos los refugiados

se encuentran en la misma situación de incertidumbre, agravada por la falta de ayuda humanitaria en Afganistán, que empeora en gran medida la situación de los que siguen en el país. Esto, como señala Rahmati, es especialmente crítico para las mujeres, ya que hay “muy pocas mujeres trabajando en asistencia humanitaria, lo que significa que muchas familias morirán de hambre, puesto que en Afganistán hay muchas familias encabezadas por viudas”. Además, reflexiona sobre el papel de los actores internacionales a la hora de afrontar la crisis humanitaria: “Los que provocan la existencia de refugiados, tienen que ser los que los

Las mujeres afganas han conseguido construir vidas a las que no están dispuestas a renunciar

FATIMA RAHMATI

acogen”, haciendo referencia a la anterior implicación de los países occidentales en Afganistán y reiterando su responsabilidad ahora para aliviar la situación.

En este sentido, la pandemia provocada por la Covid-19 pone de manifiesto la falta de acción del gobierno en materia sanitaria, en un país donde no se distribuyen vacunas y donde gran parte de la población no tiene suficiente información ni ahorros para confinarse. Nusrat habla de los campos de refugiados en este contexto, ya que “están saturados y allí es imposible mantener medidas sanitarias de seguridad”.

Ante las dificultades internas para hacer frente a la crisis, Nusrat es clara y afirma que “la comunidad internacional tiene que dar el paso crucial de dejar de ignorar a los talibanes y olvidarse de Afganistán. Esa no es una opción”. Se trata, subraya, de una cuestión controvertida, ya que “la comunidad internacional no quiere financiar el terrorismo” y entre los afganos existe un dilema entre tratar a los talibanes como una organización terrorista o como el gobierno legítimo. En este sentido, Nusrat aboga por actuar dentro de las posibilidades que la situación ofrece y sacarle el máximo rendimiento posible: “ojalá tuviéramos mejores alternativas, pero ahora mismo no hay otra opción”.

Otro paso esencial que debe darse desde la perspectiva internacional —coinciden ambas activistas— es el retorno de las organizaciones humanitarias internacionales a Afganistán. “Estados Unidos y la comunidad internacional entraron en el país y se marcharon 20 años más tarde de forma catastrófica; lo mínimo que pueden hacer ahora es abrir sus

puertas a las mismas personas que sufren las consecuencias de sus acciones”. La asistencia humanitaria supone un paso necesario para conseguir crear una sociedad activa progresivamente, “creo que una vez que se garantice la supervivencia, la gente se sentirá empoderada para protestar o pensar en los siguientes pasos. Cuando se tiene hambre, no se piensa en la defensa de derechos; lo primero que se necesita es comida”, afirma Nusrat, insistiendo una vez más en la falta de servicios esenciales como una de las prioridades a abordar.

En un contexto en que la protesta supone un riesgo vital, “la gente se siente más segura para protestar y manifestarse en la red en lugar de hacerlo en las calles, donde saben que podrían matarles”. Así, Nusrat destaca la importancia que tienen los canales de Facebook y YouTube en las manifestaciones virtuales, aunque también reconoce las posibles limitaciones que pueden tener estos canales en regímenes represivos e inestables. Rahmati, por su parte, defiende la diversidad de formas de protesta al alcance: “podemos boicotear, podemos desinvertir, podemos manifestarnos, podemos firmar peticiones, llamar la atención de los representantes; hay gente que hace huelgas de hambre, campañas en las redes sociales, irrumpir en las asambleas políticas. A veces, el simple hecho de arrodillarse a un movimiento más de lo que podrían hacerlo muchas manifestaciones”.

La solidaridad con la sociedad afgana y en el seno de la misma, añaden las activistas, será esencial para estructurar movimientos civiles y construir mecanismos de cambio. En es-

te sentido, Rahmati subraya que la solución a la opresión de las mujeres va más allá de la lucha de las mujeres, y debe interpelar e implicar a otros segmentos de la sociedad, aliados y movimientos solidarios que “pueden elevar las voces y las historias de las mujeres afganas. Pueden dar sus micrófonos, sus asientos y espacios a las mujeres afganas”. Rahmati se refiere al papel de los hombres mientras que Nusrat destaca el deber de acogida para no dejar que “los afganos languidezcan en campos de refugiados durante años. Eso es inhumano”.

Aunque Rahmati y Nusrat hablan con profesionalidad de la situación en Afganistán, sus vidas y carreras personales se han visto gravemente afectadas y moldeadas por esta crisis. Ambas comparten un trasfondo de desplazamiento forzado que condiciona su capacidad para actuar desde su lugar de residencia. “Para muchos de nosotros en la diáspora existe una inmensa culpa por tener los privilegios de los que disponemos y, a muchos de nosotros, eso nos impulsa aún más a trabajar. No estoy en el país. No vivo la realidad diaria de las mujeres que siguen ahí. Debemos escucharlas, ellas son las que mejor saben lo que necesitan,” dice Rahmati. Nusrat, por su parte, destaca la fuerza que surge de la sociedad afgana a pesar de la opresión continua: “desgraciadamente no creo que los talibanes vayan a irse a ninguna parte, pero en lo que soy optimista es en que el pueblo afgano se levantará, incluso bajo los talibanes, e intentará presionar para lograr un régimen talibán mejor. Sacarán el máximo partido de la terrible situación en la que se encuentran”. ■

50 El coste económico de la no integración del Magreb

54 Argelia y Marruecos: ¿rivalos o enemigos?

58 Consecuencias para Europa de la ruptura entre Argelia y Marruecos



Un argelino sostiene el periódico en el que se anuncia la ruptura de las relaciones diplomáticas con Marruecos. Argel, 25 de agosto de 2021./RYAD KRAMDI/AFP VIA GETTY IMAGES

Argelia-Marruecos: el coste del no Magreb

A finales de agosto, Argelia anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos. Entre la larga lista de motivaciones, destaca el Sáhara occidental, un conflicto que demuestra la incapacidad de ambos países de dejar atrás una relación de recelo. Esta rivalidad se expresa sobre todo en el Sahel donde, tras la caída del régimen de Gadaffi en Libia, tanto Argel como Rabat, ansían desempeñar un rol protagonista. En el terreno económico, estas tensas relaciones suponen un freno a la integración comercial, productiva y financiera de la región y obstaculizan la creación de un bloque económico magrebí. Más allá de las lentas negociaciones políti-

cas, los países magrebíes deben poner en marcha estrategias para mejorar las infraestructuras y logísticas vinculadas al comercio y a la lucha contra la corrupción. Además, deben impulsar el comercio con África subsahariana, más allá de los acuerdos de asociación con la UE que han conducido a una consolidación de los flujos comerciales Norte-Sur. Por su parte, en sus relaciones euromagrebíes, la UE lleva mucho tiempo dando prioridad a la economía sobre la diplomacia y otros asuntos que frenan la construcción de un espacio económico magrebí. Sin embargo, tiene que tener en cuenta que, si la crisis entre Argel y Rabat se agrava, las consecuencias para la Unión serán graves.

El coste económico de la no integración del Magreb

Zied Saadaoui

La débil –o falta de– integración comercial, productiva y financiera obstaculiza la creación de un bloque económico regional magrebí

Los acuerdos de asociación con la UE han conducido a una consolidación de los flujos comerciales Norte-Sur en detrimento del comercio intramagrebí

La mejora de las infraestructuras relacionadas con el comercio y la lucha contra la corrupción contribuirán a reforzar la integración regional

La creación de un bloque económico regional magrebí alimenta desde hace tiempo las esperanzas de la población y la sociedad civil del Magreb. En el plano político, las diversas iniciativas puestas en marcha desde hace más de 30 años no han logrado impulsar la integración económica de los países del Magreb ni crear un bloque regional fuerte y coherente. Sin embargo, la lengua, la religión y las costumbres y tradiciones compartidas por los pueblos magrebíes ofrecen condiciones extraordinariamente favorables para la integración. Una ventaja de la que otros bloques regionales, como la Unión Europea, Mercosur (América Latina) y la ASEAN (sudeste asiático), solo se han beneficiado relativamente. Este artículo soslaya las cuestiones políticas que continúan impidiendo la aparición de un bloque magrebí, y se centra en las complejidades institucionales y económicas que perpetúan la decepcionante “no integración” del Magreb.

El alcance de los retos económicos del Magreb: una breve visión de conjunto

Según estadísticas de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), el Magreb es

en 2020 una región de 104 millones de habitantes cuya riqueza se traduce en un producto interior bruto de 333.100 millones de dólares (dólar constante de 2015) y un volumen total de comercio (exportaciones e importaciones) de más de 186.000 millones de dólares. El Magreb –o, más bien, lo que comúnmente se conoce como Gran Magreb– es un grupo de cinco países que se extienden por el Norte del continente africano: Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Esta región geopolítica se conformó de manera espontánea y se distingue del resto del continente, entre otras, por razones históricas relacionadas con la religión, el comercio, las tradiciones y costumbres compartidas y la colonización por parte de Occidente.

No obstante, el peso demográfico actual del Magreb en el mundo (1,34% en 2020) es mayor que su peso económico y comercial (0,41% y 0,52%, respectivamente, en 2020). Además, el aumento del peso demográfico de la Unión del Magreb Árabe (UMA) en el mundo (del 1,27% al 1,34% entre 2000 y 2015) ha ido acompañado de una pérdida de importancia en lo referido al PIB (del 0,46% al 0,41%) y de un retroceso notable de su peso en el comercio internacional global (del 0,73% al 0,52%).

El crecimiento alcanzado ha contribuido, sin duda, a absorber a una parte de los demandantes de empleo,

pero parece obvio que esta capacidad de absorción ha tocado techo, lo que tiene como resultado un estancamiento de la tasa de desempleo, muy superior a promedios internacionales –en particular, en Túnez y Libia. Solo Marruecos ha conseguido, recientemente, reducir su tasa de desempleo por debajo del 10%. Sin embargo, los países del Magreb no han protagonizado, en general, un crecimiento fuerte y sostenible similar al logrado por países asiáticos como China o India a lo largo de las últimas tres décadas, o Turquía en la década de 2000.

A escala regional, la renta per cápita ha aumentado de los 2.467,3 dólares a los 3.200 dólares entre 2000 y 2020. Pese a este aumento, el PIB per cápita disminuyó entre 2010 y 2015, agudizándose además su volatilidad. A excepción de Marruecos, cuyo PIB per cápita aumenta de manera más o menos estable, la tasa de crecimiento de los otros países de la región es muy volátil.

Otro aspecto importante que es necesario analizar en los países del Magreb es la capacidad para atraer inversión extranjera directa (IED). En este sentido, la cuota global magrebí sigue siendo marginal (solo de un 0,30% en 2019) y se caracteriza por una gran volatilidad. Destaca Marruecos en comparación con el resto de la región; es, en efecto, el país que más IED atrae, más de 3.500 millones de dólares en 2018. La

participación del resto de países en las IED sigue siendo bastante marginal, especialmente Mauritania, con una gran volatilidad, sobre todo en el caso de Túnez.

Una mayor integración económica del Magreb abriría, sin duda, nuevas perspectivas económicas. Situaría a la región en una senda de crecimiento más fuerte y sostenible, ampliaría el mercado inter no, multiplicaría las oportunidades de inversión y fomentaría la competencia entre las empresas magrebíes y, por ende, su competitividad.

La integración regional no se limita a la esfera comercial; se trata de un largo proceso que exige transformaciones estructurales a varios niveles. El siguiente apartado aborda los principales aspectos de la integración regional y los diferentes obstáculos que la entorpecen en el Magreb. Hablaremos sobre la integración comercial, productiva y financiera.

La débil integración comercial: un gran coste económico para el Magreb

Desde 1995, la parte del comercio intramagrebí en el comercio total de los países del Magreb es muy reducida y apenas ha aumentado. El intercambio bilateral entre Túnez y Marruecos (las dos economías de la región con el comercio internacional más diversificado y dinámico) es insignificante si lo comparamos con el comercio de cada uno de estos países con el resto del mundo. Los intercambios comerciales de Argelia con Libia y Mauritania son irrisorios, con un promedio de 15 millones de dólares entre Argelia y Libia; y cinco millones de dólares entre Argelia y Mauritania desde 1995.

El comercio intrarregional en el Magreb sigue siendo muy reducido en comparación con otros bloques regionales, pese a numerosos acuerdos que deberían impulsarlo. Según

Principales características económicas y demográficas de los países del Magreb

	Población (millones)		PIB (millones US\$)		Comercio (millones US\$)	
	2000	2020	2000	2020	2015	2020
Argelia	31,180	43,851	54.670	163.375	100.650	56.739
Libia	5,340	6,871	38.470	10.199	60.800	21.137
Mauritania	2,710	4,650	1.290	6.788	5.760	5.575
Marruecos	28,950	36,911	38.900	110.499	73.420	70.990
Túnez	9,700	11,819	21.470	42.240	39.080	32.164
UMA	77,88	104,101	154.810	333.101	257.500	186.605

Fuente: Estadísticas de la UNCTAD.

recientes estadísticas de la UNCTAD, desde 2015 el comercio intramagrebí no ha conseguido rebasar el 4% del comercio total, porcentaje que contrasta con el 60% en la UE, el 42% en el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), el 24,6% de la ASEAN o el 16% de Mercosur. El nivel de integración comercial se mantiene en niveles muy bajos, incluso en comparación con otras uniones regionales africanas como el Mercado Común del África Oriental y Meridional (Comesa), la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC, por sus siglas en inglés) y la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (Cedeao), cuyas tasas de comercio intrarregional han aumentado en ocasiones de manera notable, a pesar de la precariedad de las estructuras industriales y de las infraestructuras relacionadas con el comercio, de la irregularidad del territorio y del hecho de que algunos de estos países no tengan salida al mar.

En 2017 realicé un estudio en el marco del proyecto “Integración regional, ¿qué alternativas populares para una integración efectiva y sostenible del Magreb?”, puesto en marcha por FMAS (Marruecos) y FTDES (Túnez), acerca del coste de la no integración del Magreb, aplicando un modelo de gravedad. Según este estudio, en 2015, el comercio intramagrebí observado, valorado en 6.724,06 millones de dólares, alcanzó el 27,4% de su potencial estimado, de 24.514,67 millones, es decir, poco más de la

cuarta parte. Las tres cuartas partes del comercio intramagrebí por explotar –la diferencia entre el valor potencial y el observado– equivalían en 2015 al 4,6% del PIB y al 8,6% del comercio exterior total del Magreb. Si el comercio intramagrebí alcanzase su potencial estimado, elevaría su peso en el comercio total y en el PIB hasta el 11,8% y el 6,4%, respectivamente, frente al 3,6% y el 2,05% correspondientes a 2015.

Este bajo nivel de comercio intramagrebí –en comparación con su potencial total– se explicaría, en parte, por la falta de cohesión y la ausencia de una política común que refuerce la integración comercial. Marruecos y Túnez son los únicos países de la región que avanzan hacia la eliminación de aranceles. Sin embargo, aunque alcanzaron en 1999 un acuerdo para crear una zona de libre comercio y son firmantes del Acuerdo de Agadir, los elevados aranceles que aún siguen aplicando hoy ambos países a sus intercambios comerciales recíprocos demuestran que sus políticas, dentro del mercado magrebí, se guían por estrategias de competencia y no de asociación. Por su parte, Argelia ha reducido los aranceles que imponía a sus socios del Magreb, pero de forma mucho menos contundente que Marruecos y Túnez. Además, el comercio de Argelia con Libia y Mauritania se encuentra en una fase embrionaria, teniendo en cuenta la estructura exportadora de los dos primeros países –dominada todavía por los combustibles fósiles– y la participa-

Inversiones extranjeras directas (IED)

Entradas de IED (millones de US\$)

	2000	2015	2019
Argelia	280,1	-587	1.382
Libia	141,0	726	nd
Mauritania	40,1	495	885
Marruecos	422,0	3.162	1.599
Túnez	779,2	1.002	845
UMA	1.662,3	4.797	4.711

Fuente: estadísticas de la UNCTAD. nd: no disponible.

ción marginal de Mauritania en el comercio intramagrebí.

La falta de integración productiva: por una mejor integración en las cadenas de valor mundiales

Un segundo aspecto de la integración regional es la integración productiva en lo que se refiere a la complementariedad entre la oferta (exportación) y la demanda (importación) entre dos países. La complementariedad de las estructuras exportadoras e importadoras de dos o más países debería, entre otras cosas, impulsar el intercambio de productos semiacabados entre países de una misma región –los productos importados desde un país se utilizarían para ultimar la producción de otros productos en otro país, el cual, a su vez, volvería a exportarlos–, estimular la producción y aumentar la productividad. La integración productiva se convertiría así en una palanca de desarrollo de las cadenas de valor regionales y facilitaría la integración en las cadenas de valor mundiales (CVM). Las estadísticas de la UNCTAD demuestran que, a nivel intrarregional, la estructura de las exportaciones e importaciones de los países magrebíes presentan un bajo nivel de complementariedad, aunque se ha observado una leve mejora en los últimos años. Esto significa que los países del Magreb deberían diversificar más su estructura de exportación y desarrollar nuevos sectores industriales para crear una oferta (de produc-

tos) más adaptada a las estructuras importadoras de los demás países de la región.

Además del bajo nivel de complementariedad citado, el grado de sofisticación y tecnología de los productos comercializados entre los países de la UMA se ha ido erosionando con el tiempo. En la segunda mitad de la década de 2010, las exportaciones totales de productos de baja, media y alta tecnología –es decir, las exportaciones de productos que no exigen una mano de obra intensiva–, solo representó, de media, una cuarta parte tanto de las exportaciones intramagrebíes como de las exportaciones de la UMA al resto del mundo (principalmente la UE). Esto significa que más de las tres cuartas partes de las exportaciones intramagrebíes consisten en artículos que requieren una mano de obra intensiva. En la ASEAN, por ejemplo, los productos intensivos en tecnología (baja-media-alta) suponen una media del 60% de las exportaciones intrarregionales, mientras que los productos que necesitan para su manufactura de alta tecnología manejada por personal altamente cualificado, suponen un 35%. En Mercosur, las exportaciones intensivas en tecnología suponen un poco menos del 60% de las exportaciones intrarregionales, mientras que las exportaciones de productos de alta tecnología se sitúan cerca del 16%. Tales porcentajes demuestran que estos dos bloques económicos, a diferencia del Magreb, se han beneficiado ampliamente de la integración en las CVM. Los países del Magreb saldrían beneficiados si reforzasen la citada complementariedad comercial, pues se acelerarían los flujos comerciales. En

efecto, una mayor integración productiva permitiría a los países socios multiplicar notablemente sus intercambios comerciales.

La cuasi-ausencia de integración financiera: una carga para los inversores magrebíes

En cuanto a la integración financiera, los flujos de capital hacia y desde los países del Magreb son exigüos, lo que refleja el retraso en su integración financiera internacional, en comparación con los niveles alcanzados por otras economías emergentes.

En este ámbito, existen pocos datos sobre los flujos intramagrebíes. Según datos de la Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation y de la UNCTAD, entre 1985 y 2014, la suma de todos los flujos de IED intramagrebí alcanzó apenas 476,7 millones de dólares. Esta cifra resulta irrisoria en comparación con el stock de IED internacional acumulado por estos países, que ascendió a 111.800 millones de dólares en ese mismo periodo. En otras palabras, el stock de IED intramagrebí acumulado durante este periodo representó apenas el 0,4% del stock total de IED.

Las inversiones de cartera son más representativas del grado de liberalización financiera, pues son a corto plazo y presentan más movimientos que la IED. En este tipo de inversiones los países de la UMA registran niveles muy bajos en comparación con otras economías, como muestran los flujos de cartera acumulados en el conjunto de la región entre 2005 y 2015, los cuales son menores, por ejemplo, que los de países como Egipto y se mantienen muy por debajo de los niveles alcanzados por Turquía o Sudáfrica.

Esta realidad se confirma al observar el grado de divergencia entre los países del Magreb en lo referido a sus regímenes cambiarios. En efecto, según la clasificación de los regímenes de cambios establecida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argelia

tiene un régimen de tipo de cambio fijo, diferenciando del anclaje flexible del tipo de cambio o la flotación regulada; Marruecos adopta un régimen de paridad fija con un anclaje flexible a una cesta de divisas (principalmente el euro); y Túnez, por su lado, aplica un régimen de paridad flexible con bandas de fluctuación. Estas divergencias, sumadas a las diferentes políticas monetarias (estrategia basada en objetivos cuantitativos de la moneda en Argelia; estrategia basada en objetivos de inflación en Marruecos), no permiten ofrecer un marco institucional y regulatorio favorable a la libre circulación de capitales en el Magreb.

Acuerdos de libre comercio bilaterales con la UE: ¿factor de bloqueo de la integración?

Por otra parte, los acuerdos de asociación bilaterales entre la UE y los países del Magreb central (Marruecos, Argelia y Túnez) parecen haber conducido a una consolidación de los flujos comerciales Norte-Sur en detrimento del comercio intramagrebí, y han impulsado la especialización de Marruecos y Túnez en productos manufacturados de bajo y medio valor añadido, destinados principalmente al mercado europeo. Esto ha mejorado la integración de estos dos países en las CVM, pero, a cambio, ha provocado lo que la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (“Intégration régionale et développement du commerce intra-régional en Afrique du Nord : Quel potentiel de commerce?”, 2013) describe como una “brecha en las CVM” entre estos dos países y el resto de países del Magreb, poco integrados (Argelia, Libia y Mauritania).

Los países de la UMA menos integrados en la CVM corren el riesgo de quedar rezagados con respecto a Marruecos y Túnez, lo que ensancharía aún más la brecha de la CVM, pues estos negocian ya una Zona de Libre Comercio de Alcance Amplio y Profundo (ZLCAAP) con la UE, que se encuentra

en diferentes etapas de negociación. Esta ZLCAAP prevé una integración Norte-Sur aún más profunda, lo que dificultaría aún más la integración Sur-Sur, la creación de redes de coproducción y una cadena de valor regional.

Algunas recomendaciones para reactivar y acelerar la integración económica del Magreb

En la actualidad, el proceso de integración magrebí avanza muy lentamente en todas sus facetas, debido al bloqueo institucional. Si el comercio intramagrebí sigue creciendo al mismo ritmo que en los últimos 10 años, no alcanzará su potencial de 2020 hasta dentro de medio siglo.

Habida cuenta de este estancamiento, y con el fin de reforzar y acelerar la integración regional del Magreb, sería necesario ir más allá de las lentísimas negociaciones políticas, que por el momento no han dado resultados tangibles, y que cada país se volcara en la puesta en marcha de estrategias para mejorar las infraestructuras y logísticas vinculadas al comercio y a la lucha contra la corrupción. Estos avances, independientemente de las negociaciones políticas, deberían dar un nuevo impulso al comercio intramagrebí y contribuirían significativamente a reforzar la integración regional. La corrupción es más habitual cuando los procedimientos aduaneros de importación son complejos y opacos, lo que, además, puede obstaculizar considerablemente el intercambio comercial. Eliminar trabas al comercio contribuiría sin duda a reforzar el Estado de Derecho, consagrando la transparencia y la lucha contra la corrupción en las instancias administrativas relacionadas con la actividad comercial (ministerios, aduanas, etcétera). Asimismo, una mayor conectividad entre puertos marítimos, redes de autopistas y ferrocarriles, y otras redes de comunicación, supondría un importante impulso para la integración regional. A medio y corto

plazo, los responsables políticos deberían centrarse en la mejora de las infraestructuras, particularmente en los distintos nodos de tránsito de mercancías entre los países del Magreb.

Además, los acuerdos de asociación firmados por los países del Magreb con la UE suponen la precarización del comercio con los países de África subsahariana, pues se concentran en el comercio exterior hacia el continente europeo. La escasez de exportaciones hacia África subsahariana –en proporción a su potencial– se debe también a la carencia de una estrategia comercial concreta y a la ausencia de voluntad política para reforzar las relaciones comerciales. Los países del Magreb deben multiplicar las iniciativas y redoblar sus esfuerzos para fomentar el comercio exterior con los países subsaharianos, lo que facilitaría a los operadores económicos el acceso a esos nuevos mercados. El desarrollo del comercio magrebí con África subsahariana reduciría la dependencia del crecimiento económico de las exportaciones a la UE, que sigue siendo bastante elevada en el caso de Túnez. Asimismo, multiplicaría las oportunidades comerciales y posibilitaría el desarrollo de nuevas industrias, así como el establecimiento de una red comercial regional. Todo ello garantizaría una mejor integración del Magreb en las CVM.

A través de la ZLCAAP, los gobiernos magrebíes deben imperativamente negociar para alcanzar una asociación estratégica que reduzca la dependencia de la demanda europea y la fuerte especialización en sectores volcados en la exportación a la UE. Concretamente, la cuestión de la integración regional del Magreb debería estar presente desde la misma gestación de esta ZLCAAP magrebí. Los países del Magreb no deben embarcarse en estas negociaciones individualmente, sino que deberían consultar e intercambiar un mínimo de información. Una mayor integración con la UE deberá ir acompañada, asimismo, de una armonización de la política comercial magrebí, a fin de incrementar el valor añadido de las exportaciones intramagrebíes y crear una cadena de valor regional que permita abrir nuevos mercados. ■

Argelia y Marruecos: ¿rivales o enemigos?

Luis Martínez

El conflicto del Sáhara Occidental bloqueó el desarrollo económico de la región del Magreb y paralizó todo proyecto de integración regional

La rivalidad se expresa en el Sahel: si Argel quiere hacer perder a Marruecos el Sáhara Occidental, Rabat puede plantear la cuestión tuareg y su reivindicación del Azawad

Argelia y Marruecos no han conseguido, tras medio siglo, superar las diferencias. La cuestión de un conflicto abierto entre ambos países está sobre la mesa

La ruptura de las relaciones diplomáticas con Marruecos, anunciada por Argelia el 24 de agosto de 2021, culmina un largo proceso de desconfianza hacia el Reino. Acechada por un aumento de la Covid-19 y por dramáticos incendios en la Cabília este verano, se acusa a Marruecos de complicidad en los fuegos que han devastado los macizos de la zona. Los incendios se analizan como “actos hostiles” que formarían parte de un complot cuyo fin es desestabilizar el país. Para justificar su decisión, se enumera una larga lista de agravios que incluye a las víctimas argelinas de la guerra de las Arenas de 1963, el conflicto del Sáhara Occidental, para acabar con el peligro que supone para Argelia y la región la normalización de las relaciones entre Israel y Marruecos.

En definitiva, las autoridades argelinas ya no ven en Marruecos un país rival, sino un enemigo en potencia que aspira a desestabilizar un régimen debilitado por una economía en apuros desde la caída del precio del barril del petróleo en 2014 y por una situación política estancada desde la aparición de *Hirak* en febrero de 2019, un movimiento pacífico que reivindica una transición democrática. Las autoridades argelinas acusan a Marruecos de financiar al *Mak*, un movimiento cabileño, fundado en 2001, que reclama la autodeterminación de esta región de Argelia. Los dirigentes militares argelinos interpretaron las palabras del embajador marroquí en Naciones Unidas como la

prueba de que se prepara el enésimo intento de desestabilización de Argelia. En efecto, en una reunión virtual de los Países No Alineados, el 13 y 14 de julio de 2021, el embajador de Marruecos, tras las declaraciones de su homólogo argelino sobre el pueblo saharauí, aludió al derecho del pueblo cabileño “a disfrutar plenamente de su derecho a la autodeterminación”. Argelia, enfurecida, llamó a su embajador de Marruecos.

Esta crisis en torno al apoyo a la Cabília no es una novedad. De hecho, en 2015, la delegación marroquí en la ONU ya había planteado la cuestión del “derecho a la autodeterminación de Cabília”, también en respuesta al apoyo argelino al derecho del pueblo saharauí. El incidente diplomático se había mantenido circunscrito a reacciones en la red. En 2016, la emergencia de un movimiento de protesta en el Rif, región de habla bereber del Norte de Marruecos cuya historia con el Reino es convulsa, había planteado el riesgo de un efecto bumerán en Marruecos de la problemática del derecho a la autodeterminación del pueblo cabileño en Argelia.

Un legado colonial disputado

Caracterizadas desde siempre por la desconfianza, las relaciones entre Argelia y Marruecos degeneraron progresiva-

mente en recelo. Las razones de esta suspicacia se remontan al conflicto del Sáhara Occidental. En 1976, fue Marruecos quien decidió romper relaciones diplomáticas con una Argelia por aquel entonces confiada en su desarrollo económico. Argelia estaba totalmente decidida a debilitar la monarquía de Hassan II (1961-1999), enfrentada a intentos de golpes de Estado militares (1971 y 1972) y a una violenta represión de sus oponentes políticos. La marcha precipitada de España del Sáhara Occidental (1884-1976) ofrece al reino alauí la oportunidad de anexionarse ese territorio y de convertir su defensa en una causa sagrada para la monarquía. Desde que arranca el conflicto, la Argelia de Huari Bumédián (1965-1979) se posiciona a favor de los saharauis, para no ver a su vecino ampliar su territorio en el Sáhara, cuyo potencial económico y energético está por explotar. En cuanto a la monarquía de Hassan II, considera que gran parte del territorio de Argelia es un regalo que la Francia colonial (1830-1962) hizo a Argel a expensas de Rabat. No comprende la aversión de Argelia a ver a Marruecos gozar también de profundidad en el Sáhara, que representa para el país una recuperación de su territorio después del entreato del protectorado español. Se considera traicionado por el incumplimiento de los compromisos de 1961, que estipulan: “El gobierno provisio-



Guardias fronterizos argelinos patrullan la frontera con Marruecos.

Noviembre de 2021./FADEL SENNA/AFP/VIA GETTY IMAGES

nal de la república argelina reconoce por su parte el problema territorial planteado por la delimitación impuesta arbitrariamente por Francia entre los dos países, que se resolverá en negociaciones entre el gobierno del Reino de Marruecos y el gobierno de la Argelia independiente” (Convención sobre los compromisos recíprocos de Marruecos y de Argelia firmada en Rabat el 6 de julio de 1961). Habrá que esperar al viaje a Argel de Hassan II en 1968 para presenciar una renuncia de las pretensiones territoriales marroquíes: “Las reivindicaciones de Marruecos sobre los territorios argelinos y mauritanos eran utópicas y suponían un freno a una colaboración provechosa en la región” (Khadija Mohsen Finan, *Sahara Occidental: les enjeux d'un con-*

flit régional. París: CNRS, 1997). Una renuncia que permite un “deshielo” de las relaciones argelino-marroquíes.

En 1963, la guerra de las Arenas había demostrado que Marruecos cuestionaba el legado territorial de Argelia, diseñado por Francia. Primero por parte del Istiqlal, que apelaba a la restauración del gran Marruecos, y luego por la monarquía de Hassan II. El contencioso territorial entre Argelia y Marruecos había hallado una salida en el Tratado de Ifrán de 1969, en virtud del cual ambos países se habían comprometido a respetar las fronteras heredadas de la colonización. En la práctica, este enfrentamiento entre dos Estados a penas independientes alimenta la desconfianza y el rencor. Sin embargo, cuando Marruecos recupe-

ra hábilmente el Sáhara Occidental tras la marcha de las tropas españolas, Argelia se enfrenta a un dilema: el reconocimiento del hecho consumado o la guerra. Argel opta por la guerra por delegación, apoyando económica y militarmente al Polisario. Los beneficios financieros procedentes de la nacionalización de los hidrocarburos y de la primera crisis del petróleo refuerzan el poder económico de las autoridades argelinas. Los gastos derivados de la compra de armas también siguieron el curso del precio del barril de petróleo: entre 1973 y 1977, ascendieron a 710 millones de dólares, para incrementarse muy notablemente entre 1978 y 1982 hasta alcanzar los 3.200 millones; entonces se estabilizaron, de 1983 a 1987, en 2.500 millones de dólares y, de 1987 a 1991, en 2.000 millo-

nes. La URSS fue el principal proveedor de Argelia, a quien vendió aproximadamente tres cuartos de su material militar. A muchos observadores les preocupó esa carrera armamentista en la región. No obstante, a diferencia del conflicto entre Pakistán e India, o entre Irak e Irán, el enfrentamiento argelino-marroquí, con la interposición del Frente Polisario, sigue limitado a una guerrilla en el desierto y, a fin de cuentas, al erario le resulta asequible. La anexión del Sáhara por Marruecos se le indigesta a Argelia y, sin duda, esa es una de las principales razones de la longevidad de este conflicto. Con unos abundantes ingresos procedentes del petróleo, Argelia puede permitirse el lujo de mantener a las poblaciones saharauis en campamentos improvisados y de denunciar la indiferencia de Marruecos ante los derechos de los pueblos a la autodeterminación.

De 1975 a 1991, de la anexión al alto el fuego, Argelia obliga igualmente a Marruecos a incurrir en importantes gastos militares en relación con su PIB, para mantener el control del Sáhara. Esta guerra de desgaste costó unos 10.000 millones de dólares a la monarquía, obligada a mantener gran parte de su ejército (de 130.000 a 160.000 hombres), desplegado en el Sáhara. Según afirma Fuad Abdelmumni, “el coste de este asunto es sencillamente la ausencia de desarrollo de Marruecos”. El conflicto del Sáhara Occidental bloqueó, por lo tanto, el desarrollo económico de la región del Magreb. La posición de principio argelina sobre el Sáhara –derecho del pueblo saharauí a un referéndum sobre la autodeterminación– condujo a un estancamiento diplomático y, por consiguiente, a una tensión militar. En su rivalidad económica con Marruecos, Argelia, cegada por las ilusiones de los beneficios petrolíferos, creyó que el tiempo jugaba a su favor. La abundancia de ingresos procedentes de los hidrocarburos le permite librar una “guerra privatizada” interminable que, sin duda, arruinará al reino alauí, causará revueltas internas y en definitiva, volverá a cuestionar la decisión de la anexión. Sin embargo, la crisis del crudo de 1986, que se tradujo en el hundimiento del precio del

barril, hace saltar en pedazos esta estrategia, revela el peligro de la crisis económica y provoca el estallido de revueltas en Argelia. Entre 1991 y 1993, el país solo destina 145 millones de dólares a la compra de armamento y el apoyo a los saharauis se relega al olvido, ante la amenaza que representan los islamistas del FIS (Frente Islámico de Salvación) para el régimen. Para Argelia, los ingresos petrolíferos no han sido un recurso suficiente para vencer el proyecto de anexión del Sáhara por Marruecos, que contó con la ayuda y el apoyo de Arabia Saudí. Simbólicamente, a finales de los años ochenta, ambos países están endeudados y ofrecen a sus poblaciones un bajo nivel de vida. Durante la guerra civil de Argelia (1991-1999), Marruecos sospecha que su vecino ha sido cómplice en el atentado del 24 de agosto de 1994 en Marrakech y decide imponer un visado a los ciudadanos argelinos. Argel reacciona ordenando el cierre de la frontera con Marruecos, con el consiguiente bloqueo de las exportaciones de productos marroquíes a Argelia.

En 1999, la llegada de Abdelaziz Buteflika a la presidencia de Argelia suscitaba la esperanza de que se resolviera el conflicto. La campaña marroquí a favor de una autonomía del Sáhara había tenido sus efectos: Francia, Estados Unidos y España le apoyan. Queda por convencer a Argelia de que se resigne. En marzo de 2005, el encuentro entre el presidente Buteflika y el rey de Marruecos, Mohamed VI, parece la premisa de una renovación. La prensa se hace eco del rumor que anuncia la reapertura de la frontera entre Argelia y Marruecos, primer gesto simbólico del reencuentro. En ese contexto, Libia, que preside la Unión del Magreb Árabe (UMA), anuncia la fecha de una cumbre de jefes de Estado los días 25 y 26 de mayo de 2005 en Trípoli. Poco dura el entusiasmo. Mohamed VI anuncia que no participará en la cumbre, lo que provoca de hecho que se anule. Las afirmaciones de Buteflika, tiempo atrás, sobre el derecho de los saharauis a la autodeterminación sirven de excusa para volver a cuestionar los intentos de reconciliación argelino-marroquí. El discurso

oficial de Argelia sobre el Sáhara no ha cambiado, como se encarga de recordarlo el ministro delegado responsable de Asuntos Africanos y del Magreb, M. Messahel, en marzo de 2006: “La resolución del conflicto reside en el ejercicio por parte del pueblo saharauí de su derecho sagrado a la autodeterminación... Es la posición definitiva de Argelia... La situación de bloqueo pasa, en primer lugar, a manos de la ONU, que debe moverse y asumir sus responsabilidades”. Una postura que subraya Mohamed Bedjaoui, ministro de Asuntos Exteriores, en junio de 2006, en el periódico *Liberté*, insistiendo en el Plan Baker y el apoyo a la resolución 1675 sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo saharauí... Para Marruecos, el regreso de la abundancia financiera a Argelia explica su desinterés económico por la región. De hecho, el cierre de la frontera le sale más caro a Rabat que a Argel. Y en efecto, gracias a la tercera crisis del crudo, la Argelia de Buteflika recupera una bonanza financiera que le aporta los medios con que defender sus pretensiones en el Sáhara. A partir de 2011, con la emergencia de las “revueltas árabes”, el problema del Sáhara Occidental se vuelve marginal tanto para Argelia como para Marruecos. Los movimientos contestatarios en el seno de los países (levantamiento del 22 de febrero en 2011, *Hirak* en el Rif en 2016, *Hirak* en Argelia en 2019) centran la atención de las autoridades. El conflicto –olvidado, congelado, bloqueado– del Sáhara Occidental es presa de un enfrentamiento entre dos potencias rivales, hoy convertidas en enemigas. Esta rivalidad se expresa en el Sahel.

Del Sáhara Occidental al Sahel

El derrocamiento del régimen de Muamar el Gadafi y la intervención militar francesa en el Norte de Mali sitúan a esos dos países en el centro de las preocupaciones regionales. De Bamako a Trípoli, Marruecos ansía desempeñar un rol,

como lo subraya la Declaración de Rabat del 14 de noviembre de 2013 y se compromete, principalmente, a “Aumentar el intercambio, entre los Estados de la región, de información relativa a la seguridad de las fronteras y la coordinación, con el fin de hacer frente a las amenazas identificadas (...); intensificar las capacidades de los Estados de la región en materia de equipos y de nuevas tecnologías (...); movilizar los recursos financieros adecuados (...)” (2ª Conferencia Ministerial Regional sobre la Seguridad de las Fronteras, Rabat, 14 de noviembre de 2013).

Con sutileza e inteligencia, el reino alauí logró obtener beneficios diplomáticos de la operación Serval, como muestran estas propuestas. Marruecos anhela un papel de liderazgo tanto en Malí como en Libia. La creación de un “Centro regional de formación y entrenamiento destinado a los funcionarios encargados de la seguridad de las fronteras en los Estados de la región” le brinda el instrumento necesario para desplegar su influencia. Además, para Argelia, el deseo de responder a las “necesidades concretas de las poblaciones de las zonas fronterizas” insinúa una posible inclusión en la agenda de “la cuestión tuareg”. Frente al apoyo incondicional de Argelia al movimiento saharauí, Marruecos cuenta hoy con un instrumento de represalia considerable con “la cuestión tuareg”. Resumiendo, si Argel aún cuenta con hacer perder a Rabat el territorio del Sáhara Occidental, Marruecos puede plantear “la cuestión tuareg” y su reivindicación del Azawad, que incluye parte del territorio de Argelia. Muy influyente en Mauritania y Senegal, Marruecos amplía, en pro de la lucha contra el terrorismo yihadista, sus redes de hermandad en el Sahel y en todo el África oriental. Por si eso fuera poco, el reino alauí mantiene excelentes relaciones con las monarquías del Golfo, algunas de las cuales, como Catar, tienen vínculos con milicias locales en Libia. Para Argelia, después de la independencia, el mayor reto es salvaguardar la integridad territorial. Las fragmentaciones territoriales que

atravesaban el mundo árabe vuelven a plantear esta inquietud: de Libia a Irak y el Sur de Sudán, las amenazas separatistas se han convertido en realidades políticas. Asimismo, para el ejército, las reivindicaciones de los movimientos del Azawad y, como corolario, “la cuestión tuareg” siguen viéndose como un intento de privar a Argelia de su Sáhara: desde la creación de la OCRS (Organización Común de las Regiones Saharianas) en 1957 y la no participación de los tuaregs de Hoggar en la guerra de la independencia (1954-1962) (Vallet, Michel. “Les Touaregs du Hoggar entre décolonisation et indépendance [1954-1974]”, *Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée*, n.º 57, 1990) hasta las revueltas tuaregs, las autoridades argelinas perciben en las reivindicaciones tuaregs una amenaza a su integridad territorial. Para ellas, la declaración de independencia de Azawad en 2012 fue una declaración de guerra.

En 2017, Marruecos se reincorpora a la Unión Africana, que había dejado en 1984. Desde entonces, el país hace gala de un activismo diplomático en África que exaspera a Argelia, tanto más cuanto que la presidencia de Donald Trump reconfortó a Rabat con respecto a la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. Marruecos presiona en vano a sus socios europeos para que hagan lo mismo.

Este conflicto olvidado ha creado las condiciones propias de la desconfianza entre estos dos grandes países del Norte de África y ha paralizado todo proyecto de integración regional. Argelia y Marruecos, siendo vecinos, no han conseguido, al cabo de medio siglo, superar las diferencias que los enfrentan. Todo lo contrario: cada uno ha hecho lo posible por instrumentalizar, en las etapas de graves crisis políticas y sociales, la amenaza que representa su vecino, para obligar a guardar silencio a los opositores políticos. El conflicto del Sáhara Occidental se muestra como el principal factor político del bloqueo en la construcción de una integración regional. Ilustra la incapacidad de Argelia y de Marruecos de dejar atrás una relación

de recelo, incluso de hostilidad, desde la guerra de las Arenas de 1963. El contencioso del Sáhara occidental ha sido sobre todo, para ambos, una formidable oportunidad política de afianzar su autoridad. La monarquía marroquí ha podido apropiarse del sentimiento nacionalista cuyo estandarte era el movimiento del Istiqlal, que convertía la causa del gran Marruecos en una de sus batallas políticas. El Sáhara Occidental ha permitido al régimen argelino justificar el poder del ejército y alimentar el sentimiento nacionalista. La ventaja del conflicto sahariano era evidente: la instauración, so pretexto de un sentimiento nacionalista, de regímenes políticos autoritarios. Durante los años setenta y ochenta, ese conflicto era una excusa para establecer relaciones hostiles entre ambos países. Enfrentados a críticas internas sobre la violación de los derechos humanos, la corrupción, la concentración de la riqueza y la ausencia de libertad, Argelia y Marruecos encontraron en el conflicto del Sáhara Occidental la ocasión de difundir, a través de una prensa complaciente, prejuicios y clichés sobre el otro, con la esperanza de sumar a su causa a una población frustrada por la degradación de las condiciones de vida.

Hay que señalar que en 2021, al cabo de casi 60 años de la independencia de Argelia, Marruecos ya no es solo un rival: se ha convertido en un enemigo en potencia para los dirigentes militares argelinos. La cuestión de un conflicto abierto entre ambos países está sobre la mesa. ■

Consecuencias para Europa de la ruptura entre Argelia y Marruecos

Karima Benabdallah

Las relaciones económicas UE-Magreb prevalecen sobre la diplomacia y otras cuestiones que obstaculizan la construcción de un espacio económico magrebí

La no renovación del contrato del GME tendrá un coste económico para Marruecos, pero también para España, pues Argelia es su principal proveedor de gas vía el GME

Si la crisis entre Argel y Rabat se agrava, habrá serias consecuencias para la UE, que lleva mucho tiempo subestimando a la región a la que le une un destino común

En sus relaciones con los vecinos del Sur, la Unión Europea (UE) se ha mostrado negligente, al concentrarse en los aspectos económicos en detrimento de otras cuestiones que plantean amenazas diversas y tensionan el conjunto del Mediterráneo. Su incapacidad para aplicar una política exterior coherente hacia la región, sobre todo en lo referente al Sáhara Occidental, la gobernanza y el respeto a las libertades individuales, ha contribuido a aumentar la inestabilidad en esta zona, sin rebajar el resto de las amenazas que sobre ella pesan. Sin embargo, son numerosos los factores desestabilizadores: las tensiones militares, la amenaza terrorista, el conflicto libio, las crisis políticas, las dificultades económicas y sociales, etcétera.

La combinación de todos estos factores hacen del Magreb un auténtico polvorín, cuyo potencial estallido tendría graves repercusiones para la UE. El objetivo es evitar a toda costa un conflicto armado, cuyas consecuencias serían dramáticas para unos y otros.

La escalada entre Argel y Rabat

La ruptura de las relaciones diplomáticas de Argelia con su vecino marroquí, a finales de agosto de 2021, enésimo episodio de una crisis que se prolonga desde la guerra

de las Arenas de 1963, no sorprende teniendo en cuenta las tumultuosas relaciones entre ambos países.

Son numerosos los factores que han contribuido a esta escalada entre los dos países: la rivalidad por el liderazgo regional, la formación de un eje Washington-Tel Aviv-Rabat en favor del reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, el caso Pegasus o el espionaje de los servicios secretos marroquíes, el cierre de fronteras, el hipotético apoyo al derecho de autodeterminación de la región de la Cabília. Incontables razones han llevado a esta situación, rayana en la declaración de guerra.

Hay que señalar que, décadas después, ninguno de los dos países ha sido capaz de superar las viejas divisiones, ligadas a las diferencias entre sus sistemas políticos, la visceral defensa de la soberanía y las dificultades socioeconómicas estructurales. La Unión del Magreb Árabe (UMA), que en su día trajo esperanzas para el futuro de la región, parece estar en un perpetuo estado de letargo.

Las debilidades del Magreb

En efecto, en la década de los ochenta, dos factores comunes llevaron a ambos países a plantearse una alianza: por un lado, la conciencia de la crisis vinculada al en-

deudamiento; por otro, las dificultades económicas, que ejercieron un efecto similar en la movilización social.

El tratado de Marrakech de 1989, por el que se fundó la UMA, habría aportado a los cinco países miembros (Mauritania, Marruecos, Argelia, Libia y Túnez) el equivalente al 5% de su producto interior bruto (PIB) acumulado, según la Comisión Económica para África (CEPA).

La relación entre ambos países, tensa de por sí, ha dado un nuevo giro que deja pocas esperanzas de reactivación de la UMA.

En efecto, cada país ha buscado acuerdos comerciales externos, fundamentando la cooperación en la economía, lo que constituye un error. Las relaciones económicas son la base de los intercambios entre la UE y el Magreb, que prevalecen sobre la diplomacia y otras cuestiones igualmente importantes, lo que dificulta la construcción de un espacio económico magrebí.

La ruptura, un duro golpe

Marruecos tiene todos los motivos para preocuparse por la decisión argelina, que tendrá un coste económico y, además, consecuencias en la política interior y, por tanto, sobre la ciudadanía.

A Marruecos le inquieta la decisión tomada por el presidente argelino, Abdelmayid Tebún, de no renovar el contrato de transporte gasístico a través del Gasoducto Magreb-Europa (GME), en virtud del cual Argelia suministra gas a Europa desde 1996, y que expiró el 31 de octubre. El mercado marroquí verá reducirse su consumo interno y perderá los gravámenes que, por der echo de paso, se cobran por metro cúbico de gas transportado.

En efecto, el GME desempeña un papel trascendental desde el punto de vista económico, pues antes de llegar a España –su destino final– abastece a la producción eléctrica marroquí. Según las cifras presentadas, el gas argelino permite a Marruecos producir hasta el 17% de su electricidad para alimentar las centrales térmicas. Este país, además, se beneficia de los peajes, gracias a los cuales se embolsaría entre 50 y 200 millones de dólares anuales.

Antes de que Argelia decidiera “revisar” y, más tarde, romper relaciones diplomáticas con Marruecos, Rabat era partidario de mantener el GME.

Además, esta crisis se produce en un mal momento para Marruecos, que acaba de sufrir un varapalo tras dos sentencias del Tribunal General de la UE (09/2021) que anulan sendos acuerdos comerciales sobre pesca y agricultura. El Tribunal considera dichos acuerdos inaplicables en el Sáhara Occidental, pues considera que este territorio no está bajo la soberanía de Marruecos. Se trata de un duro revés para Marruecos que, no obstante, puede aún blandir la amenaza de la migración, reduciendo los controles fronterizos y obligando a la UE a respaldar sus reivindicaciones sobre el territorio saharauí. Hasta ahora, la UE, presionada por Francia y España, ha seguido firmando con Marruecos acuerdos comerciales que incluían aguas y tierras del Sáhara Occidental en disputa, sin que se haya reconocido, no obstante, la soberanía del reino sobre este territorio (80% del cual está bajo control marroquí).

Europa se encuentra, de hecho, en la delicada tesitura de tener que elegir



El 24 de agosto de 2021, el presidente argelino Abdelmayid Tebún (en la imagen de archivo) anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Marruecos, cuyas consecuencias para la UE pueden ser preocupantes../BILLAL BENSELEM/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

entre sus intereses económicos y el respeto al derecho internacional.

Repercusiones diplomáticas para Argelia

Por lo que se refiere a la no renovación del contrato del gasoducto GME, Argel tiene una alternativa para el transporte de gas hasta España, a través del gasoducto Medgaz.

Para Argelia, las hostilidades de Marruecos tendrán, ante todo, consecuencias diplomáticas. A Argel le interesa en gran medida reactivar su política exterior, aletargada desde hace años, para recuperar el lugar perdido en el escenario global.

Con la decisión de no renovar el citado contrato, el presidente Tebún quiere recuperar el control, enviando un mensaje a la comunidad internacional. Esta maniobra forma parte de una estrategia para la recuperación de protagonismo argelino en el escenario internacional.

Argel intentaría así demostrar que ha recuperado el dinamismo, pese a la actual situación interna, el gradual cierre del país, la crisis sanitaria y el *Hirak*. El gobierno argelino necesita recuperar su legitimidad.

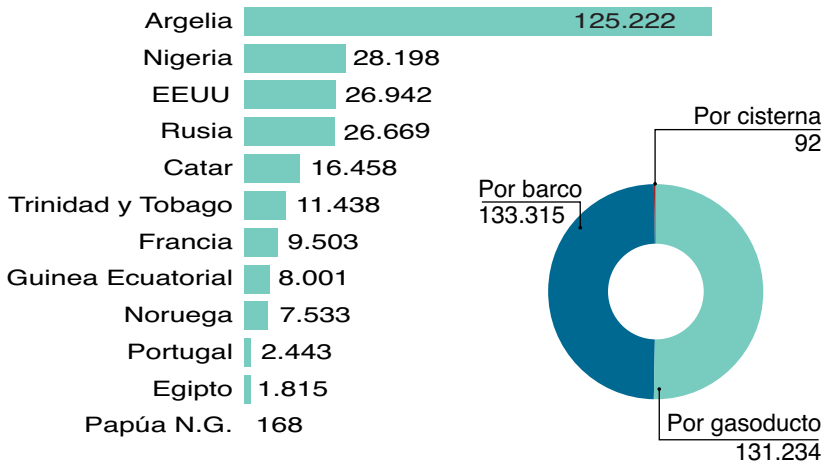
Argelia siempre ha querido proteger su independencia. Es muy probable, por tanto, que siga su camino en solitario y continúe participando en diversas organizaciones internacionales para hacer oír su voz. Son de esperar enfrentamientos entre ambos países en el seno de la Unión Africana (UA), la Liga Árabe y Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales de las que son miembros.

Consecuencias para la UE

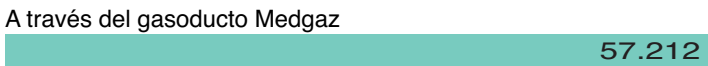
La Unión Europea ha minusvalorado en gran medida las fricciones en el Magreb a la hora de plantear sus posturas políticas y eco-

Importaciones de gas natural a España

Total por países (en gigavatios hora).
De enero a agosto 2021



De todas las importaciones de Argelia:



El resto llegó por barco

Fuente: Cores.

La ausencia de una política exterior europea coherente refleja las disparidades en la percepción de los diversos problemas inherentes al Magreb. Se observa, en efecto, un interés voluble por parte de las autoridades europeas en relación con los distintos problemas que atraviesa la región. El Parlamento Europeo, más sensible a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la democracia, cree necesario encontrar una solución al conflicto saharauí, mientras que la Comisión tiene la sartén por el mango, y se preocupa ante todo de cuidar los asuntos económicos en beneficio de la UE.

Francia, protagonista indisoluble del Magreb

Por sus vínculos históricos con su zona de influencia, Francia ocupa una posición central en la UE y se muestra partidaria de intensificar la cooperación, al tiempo que se asegura de salvaguardar su posición frente a otros socios contra los que compete. Esta actitud no está exenta de sospechas por parte del resto de los Estados miembros, que temen una hegemonía que serviría principalmente a los objetivos franceses.

Marruecos es, sin duda, el socio privilegiado. Se le sigue considerando un régimen moderado, ligado a Occidente, que no amenaza en modo alguno las relaciones económicas y diplomáticas.

En el análisis del papel jugado por Francia, es evidente que la cuestión saharauí ilustra este extremo: el Elíseo respalda el plan de autonomía propuesto por Marruecos y su oposición a las resoluciones de la ONU a favor del derecho de autodeterminación saharauí.

Francia afirma mantener una "neutralidad" oficial, pero la realidad es que los sucesivos gobiernos franceses han apoyado mayoritariamente la política de Rabat a este respecto.

En cuanto a Argelia, teniendo en cuenta la historia colonial comparti-

nómicas, subestimando las repercusiones directas generadas por la permanente tensión entre los protagonistas.

Esto se debe a que sus Estados miembros mantienen posiciones heterogéneas y hacen política según sus intereses particulares y su esfera de influencia. En efecto, la competencia entre los 27 Estados miembros da lugar a disparidades en las relaciones con países terceros, que dependen de la intensidad de los vínculos compartidos.

El revés infligido a la UE por la justicia europea no ha impedido al jefe de la diplomacia, Josep Borrell, recalcar la importancia de los acuerdos con Marruecos: "Se tomarán medidas para asegurar un marco jurídico que garantice la continuación y la estabilidad de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos". En resumen, se trata de no poner en peligro la estrecha relación con Marruecos.

La cuestión saharauí no es el único asunto de fricción entre Argel y Rabat, pero debe ser tomada muy en serio por la UE.

En cuanto a Argelia, Borrell ha reiterado recientemente la importancia de las relaciones con el país, "un socio importante por su tamaño, su ubicación estratégica y su potencial humano, pero también por los lazos que unen a los dos socios".

Una vez más, la UE se muestra obcecada con los acuerdos comerciales cuyo fin es facilitar la inversión y mejorar el clima empresarial. Aunque en las reuniones entre altos funcionarios europeos y argelinos se tratan temas relacionados con la gobernanza, los derechos humanos, el medio ambiente, la energía, la seguridad o la cuestión saharauí, lo cierto es que del dicho al hecho, hay un trecho.

La UE hace gala de cierta hipocresía al ejercer una política desequilibrada en la región, en función de sus intereses.

da, las relaciones con Francia pueden calificarse de complejas e inestables hasta hoy. Sin embargo, Argelia querría emanciparse totalmente de Francia y dejar atrás su condición de país útil en cuestiones sensibles para la política francesa (seguridad, islamismo, energía). A esto hay que añadir el relevante rol de la diáspora argelina, muy movilizada en el apoyo a su país de origen.

En el marco de sus relaciones con Francia, Argelia sigue enfrentándose a numerosos retos tanto internos como externos, para lo cual debería construir relaciones pacíficas y trabajar por un futuro constructivo en común.

El pragmatismo político de España

España siempre ha dado prioridad al Mediterráneo en su política exterior. En el Magreb, concretamente, ejerce un pragmatismo que le permite mantener el equilibrio con sus socios sin dejar de hacer avanzar sus peones.

Después de Francia, España es el segundo socio comercial de Marruecos y, pese a las tensiones que caracterizan a la relación hispano-marroquí—sobre todo en materia de inmigración, narcotráfico y terrorismo—, Madrid siempre ha priorizado una relación estrecha con Rabat.

Lo mismo ocurre con Argelia, socio regional clave en los ámbitos de la seguridad y la energía. Argelia es el principal proveedor de gas de España, a través del GME. Tras el vencimiento del contrato de este gasoducto, Argel ha garantizado a su socio europeo que seguirá suministrando gas.

Las declaraciones de José María Albares, ministro de Asuntos Exteriores, confirman la sólida relación de cooperación entre ambos países: “Argelia siempre ha sido un socio fiable y ha cumplido sus compromisos”. “España está dispuesta a seguir trabajando para profundizar en la relación entre Argelia y la UE, lo que resultaría beneficioso para todas las partes”.

Además, Madrid trabaja activamente en la identificación de sectores innovadores que permitan ampliar y profundizar la relación bilateral argelino-española, especialmente en los sectores de las energías renovables, la agricultura y la construcción naval, en apoyo de la asociación económica.

Conclusión

Ya sea desde el punto de vista político, económico, de seguridad o humano, las consecuencias de la ruptura entre Argel y Rabat pueden calificarse de preocupantes y, a largo plazo, con un alto coste para la UE.

El peligro es real. En efecto, aumentan las nuevas amenazas transnacionales, principalmente en materias sensibles como el terrorismo, el fanatismo religioso, los flujos migratorios y la inseguridad de las fronteras.

Es difícil predecir el impacto que tendrá esta crisis en el futuro, pero lo cierto es que las relaciones entre los vecinos se alejan del apaciguamiento tan deseado por los socios.

Es esencial, en cualquier caso, evitar un conflicto armado, cuyas consecuencias serían dramáticas para la población del Magreb. Los muchos ciudadanos que tienen vínculos con ambos países no quieren que la situación siga agravándose.

El enfrentamiento entre los dos vecinos tendrá asimismo un importante impacto en la diáspora, muy presente en Francia y España. Las perspectivas serían igualmente dramáticas para el conjunto del Mediterráneo.

No faltan motivos de tensión, pero el conflicto del Sáhara Occidental sigue siendo uno de los temas más candentes del polvorín regional.

En descargo de la UE, se ha de llamar la atención sobre el hecho de que Argelia y Marruecos no han sido capaces de poner en marcha proyectos ni organizaciones conjuntas que mitiguen las fricciones existentes desde la descolonización, y que

podrían haber apuntalado la construcción magrebí. El GME, que atraviesa territorio marroquí y cuyo futuro es incierto, es uno de esos proyectos.

Además, el Magreb debe resolver imperativamente los problemas estructurales inherentes a la modernización económica y social. Lo mismo ocurre con las cuestiones relativas al respeto de las libertades fundamentales, la gobernanza y la lucha contra la corrupción.

Por otro lado, existen otras alternativas de asociación al margen del acercamiento a la UE. La diversificación de socios representa una oportunidad para el Magreb, que ya pertenece a la UA, la Liga Árabe y la ONU. Con el claro declive de la influencia de Francia, otras potencias como China, Turquía, Rusia o Catar podrían convertirse en importantes aliados en la región. Marruecos diversificó muy pronto sus alianzas, optando por tener un vínculo sólido con Occidente, mientras que Argelia mantiene relaciones de cooperación muy avanzadas con China o Rusia, especialmente en el ámbito de la defensa en el caso ruso.

Para terminar, como países afroárabes temerosos de ceder al neocolonialismo, los Estados del Magreb no quieren dar demasiada prioridad a la UE, pues esta se ha mostrado ineficaz a la hora de reducir las fuertes tensiones en el Norte de África.

Queda por ver en qué marco se definiría el “estatuto avanzado” en términos políticos, sin socavar la identidad del Magreb y manteniendo la democracia como condición última, siempre y cuando esta continúe siendo un criterio importante para Bruselas. ■

Desde América Latina y para el mundo



POLÍTICA EXTERIOR



Último número
#PolExt204
¡CONSIGUELO!

Inicio Actualidad ▾ Política Exterior ▾ Informe Semanal ▾ Afkar-Ideas ▾ Libros ▾ Eventos [Suscríbete](#) 🏠 (1) 👤 🔍

LATINOAMÉRICA ANÁLISIS



De la fatiga al agotamiento democrático en América Latina

MANUEL ALCÁNTARA | 25 de noviembre de 2021

La pandemia está cronificando la fatiga democrática en América Latina hasta llevarla al borde del agotamiento, con unos sistemas políticos desbordados incapaces de atajar la desconfianza ciudadana.



Chile: incertidumbre, abstención y polarización

JULIETA SUÁREZ CAO | 23 de noviembre de 2021

Inmersa en una crisis de representación, la ciudadanía chilena se mantiene alejada de las urnas, propiciando la fragmentación y, sobre todo, una polarización asimétrica donde la extrema derecha, con Kast a la cabeza, cosecha votos con la promesa de orden.



El colapso de la industria petrolera venezolana

RAFAEL RAMÍREZ | 19 de noviembre de 2021

El origen del colapso de la producción de petróleo en Venezuela es político. Solo volviendo al Estado de Derecho se podrá gobernar de nuevo con éxito la actividad petrolera y los recursos nacionales, aliviando la crisis humanitaria y social que vive el país.

politicaexternior.com

Facebook - Twitter

64	Política de asilo: de la interceptación al abandono
68	Clima y refugiados
71	El nacimiento de las ciudades regionales



Refugiados afganos viajan en autobuses con destino a un alojamiento temporal tras llegar al aeropuerto internacional de Tesalónica Makedonia vía Kabul. Tesalónica (Grecia), noviembre de 2021./BYRON SMITH/GETTY IMAGES

La UE ante la crisis de refugiados

Mientras el número estimado de migrantes internacionales aumenta constantemente –281 millones de personas vivían fuera de su país de origen según el *Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020* de la OIM– empujados por los conflictos y las consecuencias del cambio climático, entre otros, la crisis afgana ha vuelto a poner de manifiesto la falta de coordinación y de una política migratoria europea.

Ante el temor a la llegada masiva de inmigrantes afganos –finalmente no se ha producido por el cierre de fronteras del país–, cada Estado ha actuado por su cuenta, intentando que el problema se quede en los países vecinos. Al contrario de lo que sucedía en 2015, cuando la

Unión Europea abrió sus puertas a los refugiados sirios, en esta ocasión los afganos parecen haber sido abandonados a su suerte. Esta débil respuesta deja al descubierto las pretensiones de cooperación exterior y de seguridad en materia de políticas migratorias.

Hacia el Mediterráneo, la política europea ha estado dominada por el eurocentrismo y el centrismo occidental. Para llevar a la práctica los valores del Proceso de Barcelona –diálogo, cooperación y coordinación– es necesario incorporar a las ciudades, que pueden ayudar a impulsar una gobernanza de la emigración mediterránea más descentralizada y a tener una visión más holística e integrada del sistema migratorio.

Política de asilo: de la interceptación al abandono

La débil respuesta de la UE a la crisis afgana deja al descubierto las pretensiones de cooperación exterior y de seguridad en materia de políticas migratorias.

Brad Blitz

Durante más de 20 años, en la Unión Europea (UE), los afganos han figurado entre el mayor grupo de demandantes de asilo. No obstante, tienen más del doble de probabilidades de recibir tan solo protección subsidiaria, en vez de la condición de refugiados con pleno derecho. Por qué el destino de los afganos tiene que ser tan diferente del de los sirios, millones de los cuales fueron recibidos por los vecinos de Siria –y en un grado menor, aunque notable, por países de acogida de la UE–, es parte de una larga y trágica historia de ciudadanos que han vivido cuatro décadas de conflicto. Este relato se complica aún más por la interacción de la geopolítica, la inestabilidad del diseño de la política comunitaria y la tendencia creciente a tratar a los migrantes forzosos como fuentes útiles de mano de obra, en vez de como a personas que precisan protección internacional.

En abril de 2002, solo siete meses después de la retirada de los talibanes, los Estados europeos empezaron a estudiar la opción de programas de retorno “voluntarios” por los que los migrantes recibirían una ayuda con la condición de que volvieran a su país de origen. Posteriormente, no tardaron en llegar iniciativas de repatriación, incluyendo vuelos organizados conjuntamente entre Londres y París con destino a Afganistán. Mientras que los países de acogida justificarían más adelante el regreso por su condición de inmigrantes –solicitantes de asilo rechazados, “migrantes ilegales”, a los que se sacaba de Europa como parte de la guerra contra los “contrabandistas” y “traficantes”–, a principios de la década de 2000, los retornos los determinaba en gran medida el deseo de aliviar la carga en los Estados de acogida, así como las políticas exteriores y de seguridad. Entre estas, había ante todo un compromiso por parte de los Estados de la OTAN de “reconstruir” Afganistán. Los retornos, pues, se utilizaron para justificar el éxito de la misión de la OTAN, así como para presentar Afganistán como un país “seguro”.

En muchos sentidos, el trato que recibieron los afganos por parte de los anfitriones europeos no tuvo nada de nuevo. Mientras algunos países ofrecían el estatus de refugiado a aquellos cuyas solicitudes de asilo

eran aceptadas, Austria y Alemania, que se habían llevado la parte del león en cuanto a refugiados de Bosnia, Croacia y Kosovo, tendían a ofrecer protección temporal, que al final acababa cancelándose. En el lustro transcurrido desde el final de estas guerras, cientos de miles de antiguos refugiados fueron devueltos y muchos entonces pidieron entrar en nuevos países de acogida, incluido Australia. La novedad, sin embargo, fue el cambio en política migratoria, marcado por el deseo de instituir una serie de políticas más homogéneas en toda la UE. Estas acabarían estableciendo condiciones para contener a los migrantes y a muchas personas les dificultaría aún más el proceso de solicitud de asilo.

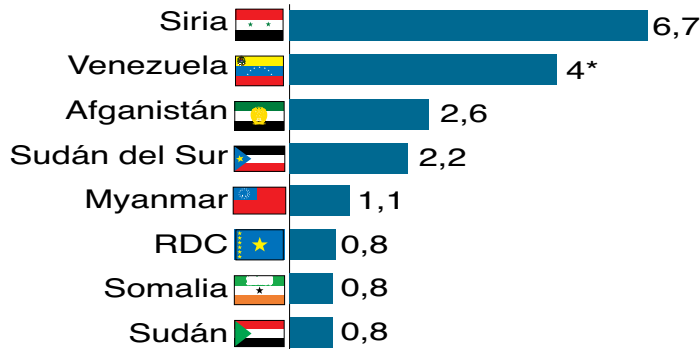
Nuevas políticas migratorias

Las guerras en la antigua Yugoslavia tuvieron gran influencia en el diseño del acervo migratorio comunitario, empezando con la Convención de Dublín de 1990 (regulación posterior). En 1999, el Tratado de Ámsterdam y el Consejo Europeo de Tampere sentaron las bases de un nuevo programa de colaboración, que dotaría de mayor consistencia las políticas interiores y exteriores de la UE. Hasta entonces, las cuestiones migratorias giraban principalmente en torno al reto de promover la libre circulación de personas en el seno de la UE, o eran los gobiernos nacionales los que establecían sus propias políticas de inmigración y asilo.

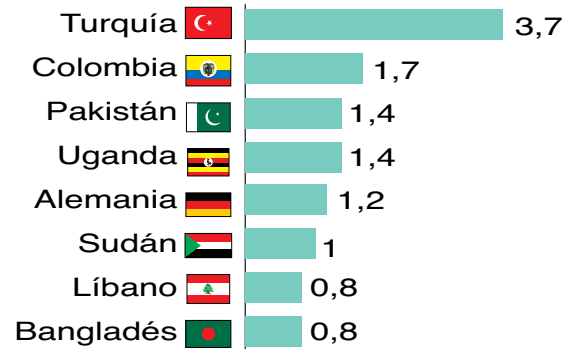
Una característica definitoria de la nueva propuesta fue la voluntad de vincular políticas de desarrollo y políticas humanitarias, que en el pasado habían sido distintas. Las inquietudes humanitarias se incluían en las políticas en materia de refugiados y migratorias relacionadas, que diseñaban los Estados miembros y variaban notablemente en cuanto a solicitudes de asilo y resultados. El desarrollo, en cambio, era parte del programa multilateral comunitario, y se canalizaba por medio de instrumentos normativos específicos que beneficiaban algunos acuerdos entre Estados y entre regiones, en particular el Acuerdo de Asociación de Cotonou ACP-UE (2000) y posteriores acuerdos de asociación económica entre la UE y agrupaciones regionales y organiza-

Situación de los refugiados

Principales países de origen



Principales países de acogida



* Incluye 3,9 millones de venezolanos desplazados en el extranjero. Fuente: ACNUR 2020.

ciones interregionales (por ejemplo, la CEDEAO y la SADC).

La tentativa de vincular políticas interiores y exteriores se reflejó en la expansión del sistema de Dublín y el mayor hincapié en la lucha contra la “inmigración ilegal”, como se señaló en el Consejo Europeo de Sevilla en 2002. Por consiguiente, ya no se veía a los migrantes en conjunto como una amenaza potencial para la seguridad. El nuevo régimen comunitario incluía la ampliación de acuerdos de readmisión con terceros países, lo que a su vez allanó el terreno para la creación de un Enfoque Global de la Migración (EGM), un programa basado en ayudas a cambio de colaboración de terceros países que controlarían la entrada y la salida. Reformado en 2011, el EGM se rebautizó para que incluyera “movilidad” en su denominación. Pasó a designarse “EGMM” y a reflejar el nuevo interés en “acuerdos de movilidad”. Estos acuerdos ofrecían cierta agilización de visados a algunos ciudadanos muy cualificados pero se basaban en la capacidad de devolver a migrantes a sus países de origen. Junto con el EGMM, la UE introdujo diálogos regionales, y ofreció fondos para apoyar la gestión de fronteras, extendiéndose mucho más allá de su frontera sur. Los más relevantes para el Mediterráneo fueron los procesos de Rabat y Jartum, que se aplicaban, y siguen aplicándose, en el Norte de África y el Cuerno de África, respectivamente.

Mientras las agencias de ayuda nacionales e internacionales “desvinculaban” crecientemente la ayuda y cuestionaban la inferencia potencial de intereses políticos en la prestación de asistencia humanitaria y al desarrollo, tanto el EGMM como los acuerdos regionales se basaban en la condicionalidad: los “paquetes de medidas” ofrecidas consistían en ayuda a cambio de colaboración para combatir el tráfico y la migración irregular. Había poca movilidad real y, en la práctica, muy pocos ciudadanos de terceros países, Estados que habían firmado acuerdos de movilidad con la UE, se be-

neficiaban del acceso al mercado europeo. El uso de acuerdos de movilidad se ha criticado también porque no parecen ir acompañados de progresos notables en el cumplimiento de objetivos de desarrollo comunes. Sin embargo, la lógica de la condicionalidad influyó en el diseño de nuevos acuerdos políticos, en particular la Agenda Europea de Migración de la UE de 2015 y la Declaración UE-Turquía y el Plan de Acción de 2016, que de entrada ofrecía a Turquía 3.000 millones de euros, y utilizaba a su vecino para prevenir el flujo de migrantes, incluidos miles de potenciales demandantes de asilo, a la UE. Junto con este acuerdo, la Unión introdujo un plan de reubicación para determinadas nacionalidades de demandantes de asilo. En lugar de eso, Turquía se convirtió en uno de los mayores Estados de acogida de refugiados del mundo.

Mientras más de un millón de sirios desplazados llegaban a Europa antes de que se cerraran las fronteras en 2016, la mayoría de afganos no pudo acogerse al plan de reubicación de la UE ni a las ofertas de asilo, sobre todo de Alemania y Suecia, que seguían dando prioridad a sirios e iraquíes. Otros países erigieron sus propias barreras y quebrantaron los objetivos del sistema de Dublín. En varios casos presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos, la policía nacional y las fuerzas de control fronterizas fueron condenadas por participar en expulsiones colectivas. Empujaron literalmente a migrantes en la frontera en dirección a Estados vecinos que competían por restringir la presencia de migrantes en sus países. Los afganos estaban en doble desventaja, ya que pocos contaban con las cualificaciones educativas, profesionales y ocupacionales que habían suscitado el interés de gobiernos de acogida, especialmente Alemania, que atrajo a un número significativo de personas altamente cualificadas y “repuso sus existencias” de mano de obra de edad avanzada.

Las grietas en el funcionamiento del sistema de Dublín, que ponían de manifiesto las políticas nacionali-



Campamento de desplazados internos en Kabul. Septiembre de 2021./BULENT KILIC/AFP VIA GETTY IMAGES

zadas de la gestión de la migración, se reflejaron más adelante en el acuerdo entre la UE y Turquía, que permitió a cada vez más inmigrantes cruzar el Egeo. A medida que nuevas olas de migrantes irregulares alcanzaban las costas europeas –y proseguían el viaje hacia el Norte–, el enfrentamiento entre los Estados sobre sus responsabilidades no hizo más que agravarse. A partir de 2018, la imagen de miles de afganos en pequeñas lanchas, saliendo de las playas francesas para atravesar el Canal, puso aún más de manifiesto la ruptura de la colaboración entre los gobiernos francés y británico, así como los límites de la condicionalidad.

Respuesta a la crisis afgana en 2021

Un capítulo reciente y especialmente vergonzoso es la respuesta colectiva de los Estados europeos tras la caída de Afganistán en manos de los talibanes en agosto de 2021. Mientras que más de una docena de Estados miembros de la UE formaban parte de la misión de la OTAN en Afganistán, las evacuaciones de ciudadanos afganos, en previsión de la retirada de Estados Unidos el 31 de agosto, fueron caprichosas y selectivas, puesto que solo se dio prioridad a determinadas categorías. Quienes habían trabajado con las fuerzas militares de la OTAN en un puesto técnico, a menudo solo los contratados formal

y directamente por gobiernos extranjeros, estaban entre los primeros a los que se propuso marcharse. A miles de afganos, que habían corrido peligro al asistir a las fuerzas internacionales, y que podían ser candidatos a la reubicación, los dejaron atrás. Los gobiernos que anteriormente habían patrocinado la construcción de la paz, el empoderamiento de la mujer, la democracia local y otras iniciativas de desarrollo de capacidades o bien no enviaron correos electrónicos convocando al aeropuerto a los antiguos compañeros y proveedores afganos o bien esas convocatorias llegaron demasiado tarde y solo alcanzaron las bandejas de entrada cuando los talibanes ya habían tomado el control del aeropuerto de Kabul, en la última semana de la presencia estadounidense en Afganistán. Miles de correos destinados a gobiernos extranjeros no obtuvieron respuesta. A partir del 1 de septiembre de 2021, no había prácticamente ninguna posibilidad de salida para nadie, salvo un puñado de personas de máxima prioridad. Los países con larga experiencia en la acogida de refugiados, como Alemania y Suecia, formularon ofertas individuales de entrada, pero no facilitaban ningún medio de reubicación. Algunos países, como Reino Unido, no destinaron personal para que se ocupara de la tarea que ellos mismos se habían impuesto y, en octubre de 2021, seguían sin poner en marcha el Plan de Reubicación de Ciudadanos Afga-

nos. Sencillamente, no había voluntad de ayudar a los afganos cuando más lo necesitaban.

La política de ‘pies secos, pies mojados’

El abandono de los afganos por parte de la UE y sus aliados de la OTAN contrasta con la admisión reciente de sirios. Si bien su tragedia no tiene paralelismos obvios en la historia posterior a la guerra, pueden extraerse algunas reflexiones de otros casos en gestión de migración y política de refugiados. Un aspecto interesante es el diseño de la política de refugiados estadounidense actual, y en especial el favoritismo mostrado a los cubanos, a diferencia de los haitianos y centroamericanos.

A raíz del prolongado conflicto entre La Habana y Washington, los cubanos se han beneficiado históricamente de “asilo político” en EEUU, una categoría de protección nunca concedida a los haitianos como colectivo. Desde los años sesenta, cuando el conflicto entre los dos Estados desembocó en una avalancha de migrantes de clase media, los cubanos han sido bien recibidos en EEUU. Su acogida se vio enormemente influenciada por las decisiones políticas en el país receptor y en el emisor. Cabe señalar que, después de que los vuelos entre La Habana y Miami se suspendieran a raíz de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, la oportunidad de demandar asilo estuvo inicialmente garantizada por el acuerdo de Fidel Castro, en virtud del cual quienes tuvieran parientes en EEUU podían ser recogidos libremente de las costas de la isla. La aprobación por parte del gobierno estadounidense de la Ley de Ajuste Cubano (LAC) de 1966 aceleró entonces los derechos de residencia de los isleños en EEUU en tan solo un año. Justificaron esta ley por razones de protección de la seguridad nacional, facilitación de refugio a víctimas de persecución y también como modo de atraer a cubanos cualificados como mano de obra estadounidense durante una época de expansión económica.

Castro se aprovechó de la LAC y, en 1980, quiso cargar a EEUU con más olas de cubanos abriendo las cárceles y alentando la migración masiva de 125.000 personas. Los interceptados en el mar eran llevados a EEUU, donde gozaban de asilo político. No sería hasta 1995 cuando la administración Clinton buscó acabar con la práctica de interceptación marítima, y enmendó la LAC, que pasó a conocerse popularmente como la “política de pies secos, pies mojados”. En virtud de la ley revisada, los recogidos en el mar eran devueltos a Cuba; en cambio, a quienes lograban cruzar se les concedía el derecho de asilo. La importancia de la interceptación reflejaba las prácticas migratorias en general, pero la aplicación de esta política activó la capacidad de controlar las aguas internacionales, y en la práctica favoreció a quienes podían navegar en pequeñas barcas. En cambio, los haitianos y otros que llegaban a EEUU por canales irregulares eran objeto de expulsión.

El ejemplo estadounidense ilustra en qué medida la política exterior y de seguridad de ese país influyó en el

diseño de políticas de asilo muy particulares, y fueron posibles por las acciones de un Estado emisor de refugiados. Aquí encontramos varios puntos de coincidencia: mientras que los sirios sufrían un conflicto brutal, uno de los objetivos bélicos de Bashar al Assad era obligar a los opositores a huir en masa del país. Con la ayuda del presidente ruso, Vladimir Putin, y como resultado directo del bombardeo de zonas civiles, el dirigente sirio también alentó la salida de millones de sirios desplazados por el conflicto.

Afganistán vio a su población desplazarse internamente, pero, a diferencia de Siria, en 2021 los talibanes sellaron las fronteras del país, lo que impide que los afganos se marchen. Sus vecinos les han prestado una gran colaboración, al negar la entrada a los afganos. En este caso, el deseo de los talibanes de contener a sus connacionales encaja con los intereses de la UE y otros Estados, que ya no quieren recibir migrantes de Afganistán, ni tan siquiera a quienes tienen razones para solicitar asilo.

La política de “pies secos, pies mojados”, por la que llegar a “tierra seca” es responsabilidad de la persona, también señala los límites de la hospitalidad. En el caso de Afganistán, deja a la vista la vacuidad de la protección, no en vano varios Estados europeos, así como Canadá, han sugerido que los afganos que puedan llegar a sus territorios respectivos, tendrían derecho a ser aceptados. Se trata de una promesa imposible para una población encerrada, que en cualquier caso tendría que recorrer muchas fronteras nacionales.

Lo que está claro en esta historia es que, justo cinco años después de que la UE recibiera a más de un millón de sirios, trabajara para poner en marcha una agenda migratoria común e ideara un nuevo léxico en torno a la movilidad, los Estados europeos ya no quieren recibir más oleadas de refugiados, ni siquiera en números mucho más reducidos. Mientras los talibanes irrumpían por todo el país, los Estados europeos seguían repatriando afganos, y no tardaron en abandonar incluso la retórica de la protección humanitaria, que un día encamó el eslogan “Refugiados bienvenidos”.

Este episodio deja al descubierto las pretensiones de cooperación exterior y de seguridad de la UE en materia de políticas de migración y seguridad, que lleva más de 15 años intentando conjugar. No solo se registran niveles asombrosos de actuación independiente estatal por parte de los miembros de la UE, sino que también se desvirtúan sus propios objetivos en cuanto a políticas. El abandono de los afganos plantea ahora el riesgo de nuevas olas de migrantes irregulares, y no hará sino alentar a contrabandistas y traficantes a aprovecharse de quienes no pueden abandonar Afganistán por otros medios. Por encima de todo, envía el mensaje inequívoco de que la lógica de colaboración entre la UE y los países de origen no depende únicamente de la prestación de ayuda, sino también del establecimiento de la confianza, que se ha visto tan claramente hecha añicos por gobiernos donantes y países tradicionalmente de acogida. ■

Clima y refugiados

El cambio climático provocará desplazamientos forzados. Sin embargo, hay que matizar el discurso catastrofista sobre las perspectivas de los movimientos migratorios internacionales.

Etienne Piguet

El riesgo de desplazamientos de población masivos ligados al cambio climático se menciona en los primeros informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), pero podemos datar exactamente en 2007 la amplia sensibilización sobre este tema, coincidiendo con la publicación de su cuarta edición. En su influyente informe *La economía del cambio climático*, Nicholas Stern señala que “la escasez de recursos cada vez más grave, la desertificación, los riesgos de sequía e inundaciones y un aumento del nivel del mar podrían empujar a millones de personas a emigrar”. Varias ONG publicaron ese mismo año informes preocupantes, y lo mismo hicieron los círculos militares. En Estados Unidos, el Centro de Estudios Navales, una ONG formada por exgenerales, sitúa los movimientos de solicitantes de asilo y refugiados que huyen de las catástrofes climáticas en un puesto destacado entre los peligros futuros para la seguridad de Estados Unidos. Este proceso de introducción en el orden del día culminó el 17 de abril de 2007, durante la primera reunión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada al cambio climático: el tema de las migraciones fue central, junto con la seguridad alimentaria, los recursos hídricos y los conflictos. En su libro más vendido de 2009, *Guerras climáticas*, el sociólogo alemán Harald Welzer describe un futuro apocalíptico recurriendo a “metáforas acuáticas” comunes en el discurso sobre los refugiados: “En el futuro, Estados Unidos y Europa tendrán que protegerse más eficazmente contra el creciente flujo de refugiados expulsados por el cambio climático: la hambruna, los problemas del agua, las guerras y la devastación ejercerán una enorme presión sobre las fronteras de [estas] islas de prosperidad”.

Con la publicación en 2022 del sexto informe del IPCC, el vínculo clima/migración/seguridad seguirá estando a la orden del día. La preocupación por las consecuencias del cambio climático sigue aumentando, pero la mayoría de los expertos en migración matizan ahora

las perspectivas de los movimientos internacionales de población y las consecuencias catastróficas que podrían conllevar. Revisaremos tres fenómenos ambientales que el IPCC considera muy probables y que tienen un impacto potencial sobre la migración: intensificación de los ciclones tropicales, agravamiento de las sequías y aumento del nivel del mar. Abordamos principalmente la cuestión del vínculo directo de estos procesos con los desplazamientos de población provocados por la destrucción de recursos (agua, alimentos) y de capital (edificios, infraestructuras). Al final del artículo se menciona brevemente la cuestión de la relación indirecta por efecto de la degradación medioambiental en las guerras y conflictos que luego generan desplazamientos de población.

Los ciclones tropicales

Los ciclones son depresiones atmosféricas marcadas por una gran evaporación del océano en zonas tropicales. Provocan precipitaciones intensas y fuertes vientos. La mayoría de los estudios predicen un aumento en la intensidad de estos fenómenos aunque no en la frecuencia, con la subida de las temperaturas oceánicas asociadas al cambio climático. Los ciclones provocan desplazamientos de población, cuya magnitud varía considerablemente en función de si las zonas afectadas están densamente pobladas o no. Una ciudad a unas decenas de kilómetros puede salvarse o no, lo que dificulta cualquier pronóstico. Según varios estudios detallados, los ciclones causan principalmente desplazamientos internos de corta duración, en lugar de migraciones a gran distancia o de larga duración. A menudo, las poblaciones afectadas no tienen medios para desplazarse muy lejos y muchas regresan para reconstruir sus hogares en la zona siniestrada. Paradójicamente, los eventos extremos de corta duración pueden incluso atraer a los migrantes: después del paso de un ciclón, los familiares se instalan en la región para

Etienne Piguet, Universidad de Neuchâtel (Suiza). Este artículo resume y actualiza: Piguet, E. 2019. « Aléas climatiques et migrations - Quels risques futurs ? » en *Les gestions des transitions - Anticiper, subir, réagir, planifier*, eds. F. Padovani y B. Lysaniuk, 165-179. París: L'Harmattan.

ayudar a sus familias y los proyectos de reconstrucción atraen a trabajadores de otras regiones.

Sin embargo, las encuestas a gran escala muestran que, por lo general, un área sometida a desastres repetidos presenta tasas más altas de emigración. Varios estudios muestran que una alta frecuencia de inundaciones, tormentas o huracanes impulsa a los habitantes a dejar su ciudad o país. En general, aunque se ha demostrado que los ciclones tropicales, las inundaciones y las lluvias torrenciales frecuentes pueden generar migraciones a largo plazo y de larga distancia, el fenómeno sigue estando limitado a determinadas zonas geográficas o a determinados segmentos de la población afectada. El nivel de vulnerabilidad puede ser extremadamente diferente de una región a otra y, para que se produzca una migración significativa, es necesario que la sociedad afectada dependa en gran medida del medio ambiente para su supervivencia y que los factores sociales exacerben el impacto de la catástrofe.

Las sequías

El último informe del IPCC de 2021 considera que en muchas partes del mundo el empeoramiento de las sequías estará asociado al cambio climático. En comparación con los ciclones, la escasez de agua para el consumo humano y el riego tiene un impacto mucho menos repentino y genera una movilidad más gradual. Los datos empíricos sobre la materia son dispares. Por un lado, hay muchos casos documentados de movimientos masivos de población atribuidos a la sequía en África (Sahel, Etiopía), Sudamérica (Argentina, Brasil), Oriente Medio (Siria, Irán) y Asia Central y Meridional.

En esta misma línea, muchos trabajos recientes basados en grandes bases de datos documentan el impacto de las variaciones de temperatura y, en menor medida, de las precipitaciones, en las migraciones de corta y larga distancia. Sin embargo, muchos investigadores dudan de la relación automática entre sequía y migración e insisten en la multiplicidad de las causas que determinan la migración y en otras estrategias de supervivencia que se abren a las poblaciones afectadas. El ejemplo más citado se basa en encuestas realizadas en las zonas rurales de Malí a más de 7.000 personas antes y después de una serie de sequías que afectaron al país. La reducción de los recursos para financiar la migración llevó a una disminución de la migración internacional, aunque aumentó la migración interna y de corta duración. Los estudios de casos locales, realizados entre otros en el marco de los proyectos de investigación europeos EACH-FOR (www.each-for.eu) y WRF (<http://wheretherainfalls.org/>), confirman que la escasez de agua y la desertificación repercuten en los flujos migratorios, pero principalmente en los de corta distancia. Su impacto está condicionado por muchas otras variables, sobre todo las políticas implementadas para ayudar a las po-

blaciones afectadas, pero también la diversidad de recursos y las alternativas a la migración.

Podemos concluir que, de hecho, existe una relación entre el déficit pluviométrico, las temperaturas y las migraciones, pero que sigue dependiendo en gran medida del contexto; sería peligroso especular sobre un aumento inevitable de la migración internacional ligada a la sequía.

Aumento del nivel del mar

La relación entre el aumento del nivel del mar y la migración definitiva parece mucho más directa que la de los ciclones y las sequías. De hecho, el aumento del nivel del mar es en gran medida irreversible debido a las acciones humanas y se manifiesta de forma más o menos lineal durante un largo periodo de tiempo. La falta de infraestructuras de protección (diques, pólderes), hace inevitable la migración definitiva, a la vez que permite salidas graduales y planificadas. El aumento del nivel del mar también se asocia a algunas de las manifestaciones más espectaculares y mediaticizadas del cambio climático, como la posible desaparición de Estados insulares o una modificación significativa del litoral de los Estados continentales.

En comparación con otros fenómenos climáticos, la fluctuación del nivel del mar es un fenómeno para el que existen pocas analogías históricas recientes. Por otro lado, las consecuencias se pueden predecir y localizar de forma fiable mediante teledetección, pues la configuración de las costas, su altitud y su población se integran en sistemas de información geográfica (SIG) que permiten realizar simulaciones y proyecciones. Por lo tanto, es posible calcular a escala mundial el número de personas que viven en zonas costeras bajas amenazadas por el aumento del nivel del agua, las mareas altas, las grandes olas, la salinización o la erosión costera.

Generalmente se consideran Zonas Costeras Bajas las situadas a una altitud de menos de 10 metros. Aunque representan solo el 2,2% de la superficie terrestre del planeta, estas zonas están habitadas por el 10,5% de la población mundial, es decir unos 602 millones de personas, de las que 438 millones viven en Asia y 246 millones en los países más pobres del mundo. En la actualidad, estas poblaciones están aumentando drásticamente y se prevé que hacia finales de siglo alrededor de mil millones de personas vivirán en estas zonas.

Estas cifras son preocupantes, pero sería prematuro concluir que todos se verán obligados a abandonar sus hogares en un futuro próximo y, *a fortiori*, a cruzar largas distancias. Desde luego, se puede considerar un aumento masivo del nivel del mar si la capa de hielo de Groenlandia o la de la Antártida se derriten, pero este escenario, probablemente, solo se produciría al cabo de varios siglos. Por tanto, es más bien un aumento del nivel del mar de entre 0,3 y un metro lo

que debe tenerse en cuenta para finales del siglo XXI. De modo que parece razonable considerar que solo las poblaciones que vivan a una altitud de menos de un metro (alrededor de 150 millones de personas) serán directamente vulnerables en un primer momento. Tres cuartas partes de estas poblaciones viven en los deltas de los grandes ríos y estuarios del Sur de Asia (Indo, Ganges o Brahmaputra) y en Asia (Mekong, Yangtzé, río de las Perlas). Aunque mucho menos pobladas, algunas islas están más amenazadas a corto plazo, ya que se encuentran a pocos centímetros sobre el nivel del mar. Cuando estas islas son Estados independientes, su inmersión podría dar lugar a fomas sin precedentes de apatridia. Según nuestros estudios, el riesgo existe, pero no debe sobreestimarse: entre los 39 Estados miembros de la Asociación de Pequeños Estados Insulares, solo tres tienen una altitud máxima de menos de 10 metros: las Maldivas (300.000 habitantes – altitud máxima 2 metros), Tuvalu (10.000 habitantes/5 metros) e Islas Marshall (63.000 habitantes/6 metros). Las Bahamas (346.000 habitantes/63 metros), Nauru (10.000 habitantes/65 metros) y Kiribati (100.000 habitantes/81 metros) tienen altitudes máximas inferiores a 100 metros. En el caso de Bahamas, el relieve general, pero también los medios de que dispone el país para adoptar medidas de protección, hacen muy improbable la desaparición del Estado. Nauru y Kiribati podrían volverse parcialmente inhabitables, porque el primero consiste en una meseta central árida que rodea una estrecha franja costera, mientras que el punto más alto de Kiribati está en una isla desierta y la altitud media de los otros atolones es de tres a cuatro metros. Sobre esta base, podemos estimar en cinco los Estados amenazados de desaparición (Maldivas, Tuvalu, Islas Marshall, Nauru y Kiribati) y en 500.000 el número de posibles apátridas.

A corto plazo, se pueden utilizar métodos tradicionales de protección contra la erosión (sacos de arena, trípodes, espigones, reconstrucción de playas). A más largo plazo, hay dos parámetros cruciales: la geomorfología de las costas y los recursos económicos disponibles. Dependiendo del caso, hacen posible una protección muy eficaz de las poblaciones (en Países Bajos, por ejemplo, el mar está “domesticado” desde hace mucho tiempo); en otros casos, el suelo cambiante hace que las infraestructuras sean más problemáticas y muy caras.

Conflictos y migraciones

Algunos estudios recientes han arrojado luz sobre los vínculos entre medio ambiente, violencia y conflictos que podrían añadir una relación indirecta al impacto directo del medio ambiente en la migración. Algunos investigadores han establecido una relación entre la guerra civil siria y los riesgos climáti-

cos: la sequía de agosto de 2007 había empujado a las poblaciones rurales hacia las ciudades y exacerbado la competencia por los recursos y las tensiones comunitarias en un contexto de liberalización económica brutal. Las revueltas de 2011 serían su consecuencia, igual migratoria de mediados de 2015. Sin embargo, hay numerosos estudios más prudentes sobre el vínculo entre clima y conflictos y subrayan la complejidad y el carácter condicional de la variable climática respecto a los factores contextuales políticos y económicos. Aunque, a pesar de todo, algunos autores atribuyen parte de las fluctuaciones en las solicitudes de asilo a las variables climáticas, debemos desconfiar de cualquier extrapolación general sobre la relación entre clima, conflictos y migraciones.

Conclusión

Nuestro resumen confirma que la degradación ambiental contribuye a generar flujos migratorios y que el calentamiento global provocará importantes desplazamientos forzados. Sin embargo, matiza algunos discursos catastrofistas mencionados en la introducción: el desplazamiento de poblaciones seguirá siendo principalmente en el interior de los países (desplazados internos) o entre países vecinos y se realizará en distancias cortas. A menudo seguirán siendo reversibles. El aumento del nivel del mar podría tener, a la larga, consecuencias semiduraderas y masivas, pero las medidas de protección podrían moderarlas. Varios estudios recientes también han demostrado que la movilidad no es solo el último recurso de las poblaciones sometidas a degradación ambiental, sino que también podría ser una respuesta eficaz que permita, por ejemplo, por medio de transferencias de fondos al lugar de origen, hacer frente mejor a los peligros del clima. Asimismo, una consecuencia desafortunada de los riesgos climáticos puede consistir en bloquear a las personas en zonas de riesgo, pero no en empujarlas a huir. Hablamos entonces de *trapped populations* (poblaciones atrapadas), porque, por falta de recursos, los más vulnerables no pueden moverse.

Estas observaciones matizadas no restan valor a la naturaleza muy preocupante del calentamiento global en lo que respecta a la seguridad humana en general. Sin embargo, invalidan la idea de que la migración internacional repentina y masiva podría arrasar a los países más ricos y requerir medidas de protección. La imagen popular del “refugiado climático”, con su connotación de urgencia e inevitabilidad, debe abordarse con prudencia. Puede favorecer la sensibilización de los medios de comunicación y del público en general sobre los retos “al dar un rostro humano” al cambio climático, pero también corre el riesgo de alimentar reflejos xenófobos al señalar que todos los movimientos de población constituyen un riesgo para la seguridad. ■

El nacimiento de las ciudades regionales

Los centros urbanos pueden ayudar a tener una visión más holística e integrada del sistema migratorio y a potenciar la identidad y los valores mediterráneos.

Ricard Zapata-Barrero

Las políticas euromediterráneas se han centrado básicamente en las relaciones geopolíticas entre la Unión Europea (UE) y los Estados a través de programas europeos multinivel de gobernanza y política de vecindad llenos de condiciones y multilateralismo. Las ciudades son potencialmente más sensibles a los retos humanitarios, están política y socialmente mucho más cerca de la gente y son más pragmáticas en lo que se refiere a procesos de diagnóstico y adopción de medidas para la resolución de problemas.

Este enfoque basado en la ciudad para el apoyo a la migración en el Mediterráneo se justifica actualmente desde un punto de vista contextual: en la orilla norte de la cuenca mediterránea, las ciudades se están convirtiendo en nuevos agentes e interlocutores en el seno de la Unión Europea en relación con los desafíos de la movilidad humana, las políticas de integración y la gestión de la diversidad; en la orilla sur se acepta de manera generalizada que las llamadas “revoluciones árabes” de 2011 fueron un fenómeno fundamentalmente urbano, unas acciones que se desarrollaron en los espacios públicos de las ciudades, donde las plazas y las calles se han convertido en símbolos de las revueltas.

El objetivo principal de este artículo es iniciar una reflexión amplia sobre cómo podemos incorporar la gobernanza urbana en materia de migración a la agenda mediterránea sobre migraciones. Partimos de la premisa de que hoy en día las ciudades pueden fomentar una nueva retórica mediterránea basada en valores, preocupaciones y marcos comunes. Las ciudades pueden ser los nuevos impulsores para llevar a la práctica los ideales del Proceso de Barcelona (1995) de acuerdo con los principios del diálogo, la cooperación y la coordinación de la acción (Zapata-Barrero, 2020). Los centros urbanos pueden ayudarnos a tener una visión más holística e integrada del

sistema migratorio y a potenciar la identidad y los valores mediterráneos.

El giro local en el Mediterráneo: nuevas tendencias de análisis

El proceso de reconocimiento de las ciudades como actores en la gobernanza de las migraciones se está consolidando en este comienzo del siglo XXI. Esta tendencia implica dejar de lado los enfoques nacionalistas de la gobernanza hegemónicos en la metodología y abrirnos al “giro local” (Zapata-Barrero *et al.*, 2018) a una nueva escala geográfica: el Mediterráneo. Con ello se refuerza la idea de que las ciudades pueden contribuir a la formación de dominios regionales. Este programa de redimensionamiento de la escala (Zapata-Barrero, 2020) supone que existe un incipiente “movimiento de ciudades intermediterráneas (MedCities)” que puede dar lugar a nuevas formas de gobernar la emigración en el Mediterráneo (MedMig), y en particular a decisiones y acciones que inauguren formas nuevas (e innovadoras) de entender la gobernanza mediante el fomento de las prácticas externas de las ciudades.

A continuación esbozaré las premisas teóricas de una tendencia empírica que llamaré “ciudades regionales”, y mostraré de qué modo este concepto puede constituir un marco de análisis que contribuya a cambiar la escala y la distribución de poder de la gobernanza de las migraciones en el Mediterráneo al crear un cordón umbilical entre el pensamiento urbano y el pensamiento regional.

El punto de partida de mi argumentación es el siguiente: la presión creciente de los flujos migratorios en el Mediterráneo y los consiguientes procesos de urbanización (He. C., 2013; UN-Habitat, 2016) empujan a las ciudades a establecer alianzas a múltiples escalas con organizaciones internacionales de la sociedad civil, así como lazos

Ricard Zapata-Barrero es profesor titular del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra (UPF-Barcelona), director del GRITIM-UPF, así como del programa de máster en Migrations Studies de la UPF. Forma parte del comité de dirección de IMISCOE, coordina *EuroMedMig* y la red *Jean Monnet EUMedMi*.

transnacionales con otras ciudades, para poner en común objetivos, preocupaciones, prácticas y conocimiento. Con ello se crea un sistema urbano de actores interconectados en el Mediterráneo que sirve de base a un proceso de formación de regiones. Esta tendencia actual exige un cambio de paradigma en la gobernanza mediterránea de las migraciones que reajuste la discordancia entre el constructo con profundas raíces históricas del Mediterráneo como una zona geográfica de ciudades regionales interconectadas y la actual asociación vertical euromediterránea de creación de regiones basada en los Estados.

Hoy, en esta segunda década del siglo XXI, las ciudades mediterráneas externalizan su agenda sobre migración: construyen relaciones con otras ciudades y otros actores sociales/internacionales, se unen a redes centradas en cuestiones relacionadas con la emigración en las que promueven relatos y prácticas alternativas, y se comprometen en asociaciones bilaterales con otras ciudades vinculadas entre sí por algún grupo migratorio. A nivel de base, las ciudades constituyen los bloques de construcción de un sistema topográfico relacional conectado a través de los corredores por los que se desplazan los emigrantes. Este programa de redimensionamiento de la escala de la gobernanza de la emigración (Zapata-Barrero, 2020) arroja luz sobre los retos migratorios regionales en el Mediterráneo, pero también pone de relieve que estos se experimentan localmente. De ahí la necesidad de conectar lo local y lo mediterráneo, el pensamiento urbano y el pensamiento mediterráneo.

Dentro de esta primera visión general, propongo centrarse en la implicación normativa que estos vínculos entre ciudades están creando desde abajo. Considero que este pensamiento normativo es fundamental para una mejor delimitación conceptual de la noción de ciudades regionales, o ciudades que contribuyen a la creación de regiones. Además, de acuerdo con el enfoque del pensamiento mediterráneo (Zapata-Barrero, 2020), esto demuestra que el debate sobre las ciudades intermediterráneas no se puede separar de la discusión general de las peculiaridades de la región (Minca, 2004). La idea de las ciudades intermediterráneas como ciudades regionales pertenece a esta vertiente del debate, que se propone analizar los valores añadidos (y regionales) de estas prácticas relacionales externas.

La topografía relacional de las ciudades de emigración del Mediterráneo

Sigo como un mantra la visión braudeliana del Mediterráneo como una “región de ciudades” (*région de villes*) (Braudel, 2017 [1949]). El sistema urbano mediterráneo de núcleos de ciudades (Gottman, 1990) es un marco de análisis que parte de la concepción de un espacio geográfico compuesto por múltiples conexiones entre ciudades. En la época premoderna, la idea podía hacer referencia a una agrupación de ciudades dentro de

una red comercial, un imperio o una zona productiva local (Sigler *et al.*, 2020). De hecho, Braudel ya intentó establecer una tipología de ciudades mediterráneas según su función en la economía comercial de la cuenca, distribuyéndolas por especializaciones. Hoy tenemos una topografía relacional de ciudades mediterráneas conectadas por corredores migratorios.

Llama la atención que, mientras que en cualquier mapa de corredores migratorios del Mediterráneo, la visibilidad de las ciudades es obvia (ver, por ejemplo, ACNUR, 2019), no existe una reflexión urbana sobre esos corredores. Por poner algunos ejemplos, el último informe mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), publicado en 2020, e incluso el de 2019 de Naciones Unidas sobre Migraciones Internacionales o el informe regional de la OIM sobre el Mediterráneo de 2015 hablan de corredores, pero siempre con una metodología que toma como referencia el ámbito nacional. Nos encontraríamos ante otro claro ejemplo de cómo el conocimiento generado sobre la migración mediterránea sigue demasiado centrado en los Estados, al tiempo que ignora otras escalas de la producción de conocimiento. Este hecho resulta tanto más sorprendente cuanto que parece muy presente en la mente de los emigrantes que circulan por los corredores humanitarios (Gois y Falchi, 2017). La visión mediterránea urbana de los corredores de migración conecta dos tendencias. La primera se basa en el hecho de que las ciudades están conectadas a través de los procesos migratorios por los mismos migrantes; la segunda en que cuando las ciudades se encuentran conectadas entre sí a través de los corredores, tienden a ubicar espacialmente las cuestiones relacionadas con la migración dentro de un área mediterránea más amplia. Las ciudades asumen normativamente que los retos no pueden resolverse por sí solos, o solo con el Estado respectivo, sino que requieren la coordinación y la cooperación con las ciudades agrupadas por los desplazamientos de los migrantes, lo cual reclama directamente un enfoque mediterráneo desde abajo.

Entrelazar el pensamiento urbano mediterráneo y los corredores migratorios nos invita a analizar las conexiones entre ciudades a través de la función que desempeñan unas con respecto a las otras, como por ejemplo entre Argel y Marsella (Clochard y Lemoux, 2017), Casablanca/Rabat/Tánger y Barcelona, Trípoli y Roma o Esmirna y Atenas. Esto nos permite ir más allá de la definición simplista de las ciudades como lugares de tránsito, destino y recepción, siguiendo la misma lógica que para los Estados. Imaginar el Mediterráneo como un lienzo de encrucijadas urbanas y rutas de paso nos ayuda a entrar mejor en la mente de un emigrante durante su viaje y a tazar la complejidad de las conexiones entre ciudades y cómo estas están configurando el Mediterráneo como un sistema de centros y nodos urbanos, como “ciudades regionales”.

La mayoría de las ciudades incluso ha desarrollado un sector productivo relacionado con la migración que influye en su desarrollo urbano (Gammeltoft-Hansen y Sørensen, 2017).

rensen, 2013). Por ejemplo, en Argelia hay concentraciones urbanas, como Tamanrasset, que son la puerta de entrada para la emigración procedente de Malí y Níger (OIM, 2015). Desde Tamanrasset, los emigrantes se distribuyen a otras ciudades de la costa, la mayoría de las veces a través de Gardaya y Uargla. Para la emigración procedente del Este de Argelia, la puerta de entrada es Constantina. Además, las ciudades varían dependiendo de a dónde se quiera emigrar. En Argelia, por ejemplo, la última parada puede ser la ciudad de Sidi Salem si lo que se quiere es ir a Italia, mientras que si el destino es España, es mejor parar en Beni Saf. Además, Djanet o In Amena son dos accesos cuando se viene de Libia, y Béchar desempeña el mismo papel en la frontera con Marruecos (Chena, 2018). A esto se añaden Uchda y Maghnia, dos ciudades conectadas por las rutas migratorias en esta zona norteafricana. La mayoría de los migrantes procedentes de Túnez hacen una primera parada en Annaba.

La dependencia de ciertas ciudades de una función concreta se está generalizando en el Mediterráneo, creando así una topografía regional, que puede variar con la aplicación de medidas de control de la emigración. Es el caso, por ejemplo, de la ciudad turca de Esmirna, que entre 2014 y 2016 era la última parada en Asia para muchos refugiados de Siria, Irak y Afganistán que intentaban llegar a Europa por la ruta de los Balcanes occidentales. En 2016, la policía de los Balcanes y las guardias costeras griega y turca empezaron a tomar medidas contra el tráfico de personas. A raíz de ello, Esmirna se convirtió en una ciudad puente en la que quedaron atrapados miles de migrantes que no podían permitirse pagar el precio cada vez más alto de su traslado ilegal a Europa (Tan D., 2016; Ogli, N., 2019).

Esta primera caracterización del patrón espacial regional entre ciudades puede sentar las bases de la categoría de “ciudades regionales” que intentamos fundamentar teóricamente.

Las ciudades de emigración del Mediterráneo como ciudades regionales

El concepto de “ciudades regionales” nos ayuda también a desnacionalizar nuestra forma de entender las dinámicas mediterráneas, hasta ahora fuertemente dominada por la talasocracia de la UE. En términos de poder, el estudio de las ciudades mediterráneas inspirado por el faro de la obra seminal de Çaglar y Schiller (2018), *Migrants and city-making: dispossession, displacement, and urban regeneration*, nos invita a desplazar el centro de gravedad de la autoridad e imaginar la posibilidad de una descentralización del poder en el Mediterráneo. Este enfoque regional de las relaciones entre ciudades también puede contribuir a apartarse de una perspectiva dominada por la preocupación por la seguridad y por una atmósfera cada vez más xenófoba que empuja a la mayoría de los Estados, e incluso a la UE, a infringir los derechos

humanos básicos y los valores universales fundamentales, construyendo con ello un entorno mediterráneo hostil, o a legitimar la violación de los derechos humanos en los países extracomunitarios del Mediterráneo a través de la externalización de las políticas de la UE.

En lo que respecta a las teorías de la construcción de regiones procedentes de las relaciones internacionales y la geografía, siento afinidad con la mayor parte del enfoque de Pace (2005) sobre la construcción de la identidad mediterránea, el cual, a grandes rasgos, plantea dos maneras diferentes de explicar la formación de regiones: la teoría materialista y la constructivista. Por mi parte, sostengo que es necesario combinar ambas. Los sistemas urbanos que están surgiendo a consecuencia de la presión de la gobernanza de la emigración compaginan las necesidades de recursos (económicos, jurídicos y políticos) con las narrativas constructivistas, que a menudo adoptan la forma de reivindicaciones contra las limitaciones estatales y de solidaridad con las ONG humanitarias que operan en el Mediterráneo. También estoy en deuda con los geógrafos que conciben la construcción de regiones como la suma de relaciones, conexiones, materializaciones, narrativas y prácticas espaciales en las que participa toda una serie de actores de diferente escala (Paasi y Metzger, 2017). Esta visión relacional de la creación de regiones suele vincular la política, el territorio y el poder (Martin, 2009) a través del papel desempeñado por diferentes redes que pertenecen a distintas jurisdicciones estatales, e incluso, y este es el caso de la zona mediterránea, a regímenes políticos y a ideologías religioso-nacionalistas muy distintas.

Ambas perspectivas conceptualizan las regiones como constelaciones complejas de materialidad, narrativas, capacidad de acción, relaciones sociales y poder. Esto hace del Mediterráneo un entramado compuesto de encuentros/desencuentros, la mayoría de las veces dominado por la hegemonía estatal del espacio (para el Mediterráneo hablamos de talasocracia) y el choque de intereses, incluso cuando las ciudades podrían llegar a acuerdos con otras ciudades. Las ciudades mediterráneas se pueden interpretar como lugares nodales insertos en un proceso de construcción espacial mediterránea física y virtual. Asimismo, se pueden entender como un nodo informativo, pero también como nodos de movilización contra las narrativas estatales, además de nodos organizativos de apoyo a los procesos migratorios. La noción de “ciudades regionales” supone que la ciudad es depositaria de las preocupaciones regionales y puede desempeñar un papel decisivo para las posibles soluciones. Las ciudades regionales son ciudades que reclaman un alcance regional, que emprenden prácticas externas y que expresan una nueva agenda regional. Además, existe una abundante bibliografía sobre versiones particulares de la política urbana, ciudades fronterizas, de refugiados, de entrada, coloniales, de tránsito; ciudades santuario, ciudades interculturales, ciudades de solidaridad y de bienvenida, las cuales, a fin de cuentas, ilus-

tran cómo los sistemas urbanos están moldeando formas nuevas y específicas de pensar en el Mediterráneo.

La idea central de las ciudades regionales es sencilla. Se trata, en primer lugar, de regionalizar las relaciones externas entre núcleos urbanos, y luego sus motivaciones y preocupaciones. La importancia de las ciudades mediterráneas como ciudades regionales no es producto solo de su posición dentro del ámbito mediterráneo, sino también de los esfuerzos políticos e ideológicos por encontrar un espacio para la elaboración de políticas que superen las limitaciones del Estado y las conmociones provocadas por la llegada imprevista de migrantes y refugiados. Las ciudades regionales se hacen sitio en el espacio geomigratorio del Mediterráneo generando contranarrativas y estrategias conjuntas de gobernanza, y reclamando un espacio para ponerlas en práctica, como las ciudades solidarias o de acogida. Por ejemplo, el gobierno italiano del primer ministro Enrico Letta puso en marcha la misión *Mare Nostrum* en respuesta a la crisis. El 10 de julio de 2014, dado el aumento de la presión sobre las ciudades italianas, el gobierno central negoció un acuerdo en el marco de una Conferencia de las Regiones que reconocía oficialmente la importancia de las comunidades locales en el proceso: “La gestión de la acogida generalizada (*diffusa* en italiano) ... sin la participación de los territorios (locales) corre el riesgo de generar incomodidades y tensiones” (Ministerio del Interior italiano, 2017, citado por Tobia, 2019).

Estas relaciones exteriores de las ciudades no son exclusivamente europeas. Por ejemplo, los alcaldes libios unieron fuerzas contra Europa alegando que no se debía descargar la crisis sobre sus espaldas (Elumani, 2017). Un informe destaca la falta de infraestructuras locales en las ciudades mediterráneas libias, y en consecuencia su imposibilidad de que se hagan resistentes, lo que da lugar a la aparición de redes de tráfico de personas. El informe deja claro que el tráfico no es una iniciativa libia, sino una consecuencia de la falta de instrumentos locales para la gobernanza de la emigración (El-Kamouni-Janssen *et al.*, En la mayoría de las veces, estas iniciativas externas no europeas no llegan hasta nosotros, y existe una necesidad real de incluirlas en un análisis mediterráneo para garantizar la expresión de “múltiples voces” consustancial al “pensamiento mediterráneo” (Zapata-Barrero, 2020). Todas estas presiones empujan a la mayoría de las ciudades a incrementar sus relaciones externas con otras ciudades, contribuyendo con ello a la construcción de regiones.

¿Estamos en el umbral de un nuevo paradigma de la gobernanza de las migraciones en el Mediterráneo?

Una vez celebrado el 25º aniversario de la primera asociación regional de la UE en el Mediterráneo, el escenario inicial de la gobernanza de la geomigración parece estar en punto muerto dado el actual bloqueo de la creación de regiones. El Proceso de Bar-

celona de 1995 es una iniciativa europea de creación de regiones que siempre ha estado centrada en el Estado, llegando a tratar a las ciudades al mismo nivel que las organizaciones de la sociedad civil. La concepción del Mediterráneo como una zona dinámica parece reducirse a un “anhelo romántico” del presente y el pasado de esta zona geográfica. El “imaginario” de paz, estabilidad, prosperidad y valores comunes, así como de libre circulación de personas, bienes e información es de gran importancia, ya que constituye el horizonte normativo del mecanismo de la creación de regiones. El hecho es que, pasado el 25º aniversario, prevalece el diagnóstico de fracaso.

El proceso regional mediterráneo ha estado dominado por varios aspectos que conforman la ortodoxia del actual paradigma de gobernanza de la migración, un paradigma que es nacional, basado en el Estado y dominado por el eurocentrismo y el centrismo occidental. Es necesario incorporar a las ciudades, con la esperanza de que ello impulse una gobernanza de la migración mediterránea más descentralizada, pero también con el temor de que esta demanda pueda reproducir a otra escala las actuales relaciones de poder en el Mediterráneo. De hecho, si observamos cómo funciona actualmente la participación de las ciudades en la Asociación para la Movilidad bilateral (Collet y Ahad, 2017), vemos que este es el caso. Las ciudades del Norte del Mediterráneo tienen tradiciones más sólidas de autogobierno y autonomía municipal. En algunas ciudades del Sur, los alcaldes prefieren nombrar a funcionarios con un espacio fiscal y un poder de toma de decisiones limitados. La diversidad y la heterogeneidad de las redes internacionales de ciudades se reconocen como problema, y las ciudades trabajan para aumentar la cooperación por encima de las divisiones institucionales estatales del Mediterráneo.

La vinculación entre el pensamiento urbano y el pensamiento regional arroja una nueva luz sobre la dinámica y las tendencias actuales de la gobernanza de la migración mediterránea. Las conclusiones pueden imprimir nuevo ímpetu a la actual situación de estancamiento del proceso euromediterráneo entendido como un proceso de creación de regiones mediterráneas. Tomar en serio el pensamiento urbano con una visión holística del Mediterráneo puede contribuir a establecer las premisas iniciales para un cambio de paradigma de la gobernanza de la migración en la zona, dominada por los Estados eurocéntricos y sus narrativas políticas de control y seguridad de la ciudadanía de la UE, y a articular nuevos fundamentos y nuevas líneas de investigación de la migración mediterránea. ■

Leído en AFKAR/IDEAS



Tisser le temps politique au Maroc. Imaginaire de l'État à l'âge neoliberal

Béatrice Hibou y Mohamed Tozy. Ed. Karthala, 2020
656 pág.

Hacia tiempo que una obra como esta era necesaria. Tras décadas de trabajo, Béatrice Hibou y Mohamed Tozy, dos de los mayores conocedores de la sociología política de Marruecos, reorganizan y ponen en común su amplio conocimiento y perspectiva sobre el Marruecos contemporáneo.

En este libro el cometido es claro: presentar en toda su profundidad histórica y geográfica una teoría bicéfala, pausada y entretrejida de la gobernanza. ¿Por qué se obedece como se obedece? ¿Por qué se gobierna como se gobierna? Desde la transición generada tras el cambio de monarca en 1999, hasta las esperanzas creadas por las *primaveras árabes* y su posterior desencanto, los autores se separan de las prisas y las rupturas para poner el foco en la continuidad y en los cambios más lentos, aquellos anclados en la historia sociocultural que impregna y explica las relaciones de poder.

Para ello, el libro se erige contra el dualismo orientalista al que se ha sometido el estudio de las sociedades árabomusulmanes: tradición-modernidad; autoritarismo-democracia; imperio-Estado moderno. El gobierno imperial, al contrario de lo que se presenta normalmente, no es un anacronismo ni está en contradicción con la modernidad. Las dos lógicas de gobernanza son complementarias, necesarias y útiles de movilizar en función del caso, y conllevan no solo dispositivos e instrumentos de gobernanza concretos, sino imaginarios gobernante-gobernado distintos.

En cuanto a la diferencia entre estos dos registros de gobernanza, un gobierno imperial como el jerifiano precolonial no pretende controlar todo el territorio ni toda la sociedad directamente, sino aprovechar las formas locales existentes. Así, la intermediación, delegación o negociación facilitan una pluralidad de maneras de gobernar la discontinuidad y la diferencia. El Estado-nación, en cambio, busca la unidad, el monopolio, la continuidad territorial y homogeneizar las prácticas y relaciones de poder.

Un ejemplo de la simultaneidad de esas dos formas de gobernar nos remonta al reinado de Hassan I (1873-1894). La ciudad de Tetuán está entonces definida como *taghr*, ciudad-cuartel donde la idea de frontera y, por tanto, de territorialidad, viene dada por el mar y por la existencia de la alteridad cristiana. El Estado es allí omnipresente, se comporta como un Estado-nación, centralizador, con una “comprensión territorializada y directa de la acción pública” (p.43). Al mismo tiempo, en el Sous, el *majzén* busca lazos de lealtad, no tanto la obediencia, y su gobierno es indirecto, delegado, negociado. Así, el *majzén* es capaz de desplegar a la vez instrumentos y relaciones de poder y de dominación adaptadas a las circunstancias, sin que exista *per se* una jerarquía entre esas dos concepciones de gobernar.

La riqueza de casos que el libro presenta ilustra estas sincronías que encontramos hasta el día de hoy, no solo por motivos geográficos, o por división rural-urbano, sino en proyectos de intervención política de distinta naturaleza. Lo más actual de esta perspectiva lo encontramos en la tercera parte del libro. Aquí despliegan los autores la hipótesis de que el modo imperial explica la fácil adopción del neoliberalismo en Ma-

rruecos. El caso de TangerMed encarna esa naturalización del neoliberalismo. El éxito del puerto internacional, con sus zonas industriales y la zona franca más celebrada del continente africano, reside en el partenariado público-privado (PPP), el interés de la voluntad real y la “visión ingeniera” del desarrollo, un modelo naturalmente marroquí y coherente con el histórico registro imperial de gobierno por delegación.

Sin embargo, el argumento de que por esa naturalización, las tensiones ante la imposición del modelo neoliberal han sido menos que en otros países, me parece más débil. Aunque no se articulen desde una pérdida del Estado del bienestar como en otras geografías, la cantidad de resistencias y protestas de carácter socioeconómico no es despreciable. Del mismo modo, la fácil acomodación de élites, intelectuales u ONGs al modelo neoliberal no parece ser muy distinta de la otra orilla del Mediterráneo.

La propuesta de Hibou y Tozy abre nuevas formas de pensar la gobernanza desde una vocación teórica universal, aunque su potencial transformativo y crítico deberá quizás profundizarse en la literatura posterior. Lo que les interesa a los autores aquí no es la crítica al autoritarismo, o a los estragos neoliberales y, como ellos mismos describen, la obra tiene cuidado de no ofender a nadie en Marruecos. Se trata sobre todo de presentar una gran teoría política que nos permita pensar sin jerarquías sobre las relaciones de poder, y cómo los elementos y las lógicas de una y otra forma de entender el poder se entremezclan para la dominación.

El gran mérito de este libro, pues, además de su valor documental e historiográfico, es el de explicar las lógicas de poder detrás de muchos de los capítulos de la historia de Marruecos. Cualquiera que pretenda ex-

plicar, o analizar el mundo social y las relaciones de poder en Marruecos debería consultar esta obra, aunque solo sea para cuestionarse sus propios planteamientos.

Blanca Camps-Febres-Universitat Autònoma de Barcelona



Otro hueso para el perro de la tribu

Sargon Boulus, edición y traducción del árabe de Luz Gómez, Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2021
192 pág.

Los lectores de la mejor poesía árabe contemporánea estamos de enhorabuena porque este año han visto la luz dos antologías de una de sus voces unánimemente aclamadas. Junto a esta cuidada edición bilingüe que reseñamos, ha aparecido *El humo de la brújula*, en traducción de Ahmad Yamani y María Luisa Prieto, para Olifante Ediciones.

Sargon Boulus (1944-2007) nació en Habbaniya, al Oeste de Bagdad, en el seno de la comunidad asiria, una de las civilizaciones más antiguas y perseguidas, incluso a día de hoy. A los 22 años, cruzó a pie el desierto entre Bagdad y Beirut, sin dinero ni pasaporte, con una simple mochila conteniendo una versión inédita en árabe de *El rey Lear* y un cuaderno de notas y poemas del que nunca dejó de beber. Se frotó bien los ojos llenos de polvo y, sin intención ni opción de regreso, echó a andar por el país de los otros: Nueva York, Atenas, Berlín, pero sobre todo California, donde escribiría y pintaría durante casi media vida y donde hoy reposan sus huesos.

Aunque voluminosos, publicó solo cinco poemarios en vida y uno póstumo. Fue un prolífico traductor de literatura inglesa, particularmente norteamericana, y autor de una colección de relatos. Esta antología de 50 poemas toma el título de su última colección, cuyos poemas representan casi la mitad de esta panorámica. Aquí la lengua árabe se expresa con la mayor economía posible, sin pudor ni timi-

dez, vaciada de su consustancial retórica, destazando la carne de los huesos con el buen hacer de un avezado carnicero, según expresión del poeta. La versión de Luz Gómez tiene la modestia de no temer la literalidad y la valentía de no dejarse arrastrar por el gesto retórico o el falso brillo en castellano. Dejar que el poema actúe por sí mismo es el mejor favor de quien traduce. No es sencillo trasladar el acento y el tono personal de Boulus, su ritmo propio, ese que nace al escribir y no preexiste a la mano. La traducción, escribe Miguel Casado en *La experiencia de lo extranjero*, es “un territorio que se define por dejar siempre un resto inexplicado”. Los lectores de traducciones aceptan esa experiencia y el traductor no es sino uno de ellos.

La de Boulus es una poesía que aparentemente no exige esfuerzo al lector pero que encierra tal proceso de elaboración, de condensación y fermentación de la lengua, que puede provocar la parálisis del traductor. Una poesía alejada del surrealismo y la palabrería, una poesía que sugiere, esboza e ilumina más que dice o dibuja. Está hecha de sueños de barro y de infancia, de zigurats que se pierden en las nubes, de mares milenarias que nos aguardan. En su obra está representado lo cotidiano, con toda su sencillez y crudeza: el sacrificio innecesario de un halcón, el castigo físico de un niño, un aborto, la tortura de un cadáver, gente que se mata a trabajar, moliendo pobreza para abastecer el granero del tirano, gente que duerme abrazada a la tierra, después de guerras y bloqueos... Es también una poesía recorrida por símbolos que no conocen fronteras: de Gilgamesh a Gargantúa, de Isis y Don Quijote a Billie Holliday...

En la fragua de la lengua árabe, Boulus cinceló infatigable un modo de decir nuevo, reconocible y propio. Su poesía tiene mucho de asunción irredenta, de clamor atenuado, de genialidad sin arabescos ni alharacas; mucho de esa humanidad de la que siempre andamos necesitados. Sus versos, como tantas veces el arte, tienen la capacidad de hacernos sentir escuchados, de aliviarnos, de sanar incluso. Sargon Boulus, que ha-

bía nacido de padres analfabetos pero decidió ver el mundo solo a través de las palabras, al final de sus días decía haber encontrado algo más allá del dolor, decía haber logrado algo más que roer los huesos de la historia, decía haber sido y hecho lo que le habría gustado ser y hacer.

Lejos de ver la lengua árabe como una lengua pura inalterada, la ve como una amalgama en la que se asientan en más de un 70% el siríaco (su segunda lengua materna), el arameo e incluso el sánscrito. Al escribir un poema en árabe hace a esta lengua la receptora de todas las lenguas, autores y obras que ha conocido, abriéndola creativamente a nuevas formulaciones idiomáticas. “Hablo todas las lenguas, pero en yiddish”, dijo Kafka. Así Boulus, pero en árabe. Esa fue su meta: hacer avanzar la lengua, hacerlo en silencio, de modo riguroso y constante, casi apartado del mundo. La lengua fue su patria. Lo demás, simples etapas del camino.

Su poesía es heredera de la ruptura formal de Sayyab, del genio innovador de Abu Tammam y bebe en las fuentes de Du Fu, James Joyce, Henry Miller o la generación Beat. No solo fue desde niño un gran lector de poesía traducida, tan “decisiva en el aprendizaje de los poetas”, como dice Carlos Barral en *Los años sin excusa*, sino que el ejercicio de la traducción al árabe de la literatura en lengua inglesa –incluidos Jalil Yubran o Ethel Adnan– marcó el ritmo de sus días. De hecho, no llamaba versiones a las suyas sino “poemas después del poeta”. Imaginaba cómo sonaría, cómo habría expresado un poeta árabe esa idea, esa emoción, y así lo escribía. Eso le llevó a inventar nuevas mecánicas para traducir los sonetos de Shakespeare, por ejemplo. Esta poética es la propia de su escritura, donde lo capital es el cómo se ha dicho, algo que a menudo ha sido incapaz de comprender la crítica.

Si con sus versos pudiera resumir esta nota, solo quedaría añadir que la vida de Sargon Boulus buscaba un rincón en el que dormir; y su poesía, una hoja blanca en la que las palabras no mientan.

Luis Miguel Cañada-Universidad de Castilla-La Mancha



**La terre, l'étoile,
le couteau – Le 2
Août 1936 à Alger**

Christian Phéline,
Chihab Editions, Argel, 2021
287 pág.

Este libro-investigación arroja luz sobre los pormenores de un episodio que tuvo lugar hace 85 años y aporta una nueva lectura de los hechos históricos tomados de los archivos de la administración, de los informes judiciales y policiales de la época colonial.

Según el autor, esa madrugada del 2 de agosto de 1936 el futuro de la presencia francesa en suelo argelino iba a quedar marcado por un hecho inédito inesperado por los organizadores del acontecimiento y que a los informantes de la policía colonial les pasó inadvertido. El Congreso musulmán argelino –la Federación de los Elegidos, los ulemas, los comunistas y los socialistas– organiza un mitin en el estadio municipal, situado en Belcourt, para informar a los militantes y a la población musulmana del contenido de las conversaciones que acababa de tener con el gobierno en París, en presencia de Léon Blum, jefe del gobierno.

Una personalidad política inesperada desembarca del paquebote “Ville d’Alger”, que recorría la travesía Marsella-Argel: Messali El Hadj, dirigente del partido Étoile nord-africaine, que agrupaba a la emigración magrebí en la metrópolis. Iba acompañado de su mujer, francesa, y de su hijo de seis años. Messali pisa Argel por primera vez y lo único que de él se conoce es su reputación. Un solo hombre le esperaba a su llegada. Antes de celebrar el mitin, el dirigente de Étoile nord-africaine había intentado convencer al Congreso y su presidente Bendjelul de abandonar la perspectiva de la “anexión de Argelia a Francia”, así como la búsqueda “de los derechos en el límite de la Cité francesa”. Tras numerosas negociaciones en vano, propone que se le deje dirigir un breve mensaje de saludo al público. Messali el Hadj improvisa entonces un discurso que contradice sus tendencias asimilacionistas, proclamando alto y claro: “¡Es-

ta tierra no está en venta!”. Unos 15.000 espectadores ocupaban las gradas. Entre vítores y *sagarits* de las mujeres presentes, pasean a un Messali triunfante tres veces por la pista.

Christian Phéline insiste en lo que confiere a este acto simbólico un carácter fundacional de la lucha nacional: “Por primera vez, el lema de la soberanía se deja oír en un encuentro propio de los musulmanes y de una amplitud de masas sin precedentes”. Con la particularidad de que ninguno “de los miembros del Congreso de 1936 había, en realidad, ni transgredido el marco francés ni previsto la hipótesis de la independencia”. En cambio, Messali abogaba por la necesidad primordial de “la creación de un parlamento argelino, elegido por sufragio universal, sin distinción de raza ni de religión”.

El tercer hecho de esa madrugada fue el asesinato del muftí de Argel, Benali Amor –conocido como Kahul–, apuñalado no lejos de su domicilio, en la baja Casbah. Representante del clero “procolonial”, regresaba, con el apoyo de sus compañeros, de dirigir a París un telegrama destinado a desacreditar a los delegados del Congreso musulmán argelino ante el gobierno. La Administración no tarda en achacar su muerte a una “venganza política” organizada por Cheikh el Okbi, principal figura argelina del reformismo musulmán, y financiada por el comerciante Abbas Turki, uno de los miembros influyentes del Círculo del Progreso (Nadi Ettaraqui), foro de debates políticos.

Si la información hubiese llegado antes de que acabara el mitin a los responsables del Congreso, ¿habrían conservado tal cual el proyecto de resolución final que, rindiendo “homenaje al trabajo de la Delegación”, exigía “la revocación inmediata de los rebeldes indígenas que han enviado el telegrama a París, con el fin de sabotear las gestiones”? se pregunta el autor.

La acusación provocadora del gobierno culmina en un desastre político-judicial, en el juicio penal de 1939 que se convertirá en “denuncia pública de los métodos de investigación de la Seguridad”; un juicio valerosamente cubierto en *Alger Républicain* por

el joven Albert Camus. Los dos acusados serán absueltos; los ejecutantes, tres en total, serán condenados a notables penas. Tras consultar a historiadores y leer escritos recientes sobre el verdadero culpable, y una vez examinadas todas las hipótesis, el autor se decanta por la acción aislada de un joven militante impulsivo, conocido en los círculos argelinos y cubierto luego por el silencio, lo que deja el asunto intacto con todo su misterio.

Ni los asimilacionistas, ni los independentistas, y aún menos la administración colonial sabían que esa jornada presagiaba una gran agitación. Ese acontecimiento originó la creación del PPA, partido messalista ganador de las elecciones al cabo de tres años. De este modo, el aprendizaje de las prácticas democráticas se vio prolongado por el MTLD y la UDMA de Ferhat Abbas hasta su adhesión-disolución en el FLN, que declara la lucha armada una década después de los hechos sangrientos del 8 de mayo de 1945.

El autor no se priva de señalar que esa fecha está por explorar y observa que “desde luego, en el propio Argel, memorias, tesis y obras no han dejado de estudiar esa etapa de los años 1930. Sin embargo, la persistencia, hasta nuestros días, de los problemas de legitimidad que genera han dificultado que sus autores se mantuvieran al margen de las diversas presiones apologéticas. En efecto, la partida que se juega entre junio y agosto de 1936 para luego prolongarse hasta la declaración de guerra ha seguido siendo motivo de vergüenza para la mayoría de las fuerzas políticas de la Argelia independiente”.

Christian Phéline, historiador y autor de varias obras sobre causas judiciales durante la ocupación francesa de Argelia, va más lejos en su análisis, y considera: “Un Estado-FLN, forjado bajo un régimen unipartidista y que confiscaba en su propio beneficio la memoria de la lucha nacional, tenía que sufrir los efectos de la evocación precisa de semejante episodio histórico. Y es que, mucho antes del periodo que supuestamente arrancó el 1 de noviembre de 1954, se da a la vez un gran vigor pluralista de la expresión de la población musulmana, un

modo de reagrupación que respeta las diversas fuerzas políticas existentes y la expresión pública de un primer partido organizado según la perspectiva independentista.”

El autor va aún más allá, al afirmar que la leyenda oficial, que privilegia los lejanos hechos de armas del emir Abdelkader o de Cheikh el Mokrani en la insurrección de 1871, pasa por alto toda la experiencia política de movilización y de organización acumulada por las primeras fuerzas de origen musulmán, a través de los “Jóvenes-Argelinos” de antes de 1914, en tomo al emir Jaled transcurrido el 1919, y a partir de los años treinta y cuarenta en el movimiento messalista.

A modo de epílogo, Christian Phéline evoca con interés admirado la capacidad de los jóvenes argelinos de hoy, “Les Ouled el Bahdja” (Los Hijos de la Radiante) de juntarse para reivindicar sus derechos legítimos, pese a sus diferencias políticas e ideológicas, aspirando con voluntad pacífica a una “segunda independencia”. ¿Quién va a negar que el *Hirak*, ese movimiento de llamada a la democracia, nació en las gradas de los estadios? ¿Que el estribillo paródico “La Casa de la Mouradia”, así como “La libertad, a nosotros no nos da miedo...”, se han convertido en el himno de las movilizaciones surgidas el 22 de febrero de 2019? ¿Acaso todo eso no se hace eco de lo que ocurrió ese 2 de agosto de 1936 para hacer valer el derecho y el poder de la mayoría?

Sadjia Guiz—periodista—Argelia



Mi hogar es cualquier parte

Carla Fibla García-Sala,
Editorial Libros.com,
Madrid, 2021
446 pág.

Con *Mi hogar es cualquier parte*, la periodista Carla Fibla nos invita a pensar en el “Otro” y en el concepto de hogar a partir de una aproximación que sitúa a las personas en primer plano. Personas que han emprendido un trayecto migratorio,

que han dejado atrás un hogar, con la esperanza de poder construir uno nuevo en la sociedad que los acoge. Una propuesta coherente con la trayectoria de Carla Fibla que parte de una lógica clara: cuanto más conozcamos a las personas que consideramos “Otros”, más cercanos nos serán. Por consiguiente, desaparecen los prejuicios, con ello el rechazo hacia el “Otro” y esto facilitará la construcción de este nuevo hogar. Hay un hilo conductor que une este libro con una obra anterior, *Mi nombre es nadie* (elaborado con el periodista Nicolás Castellano) donde el testimonio en primera persona nos acercaba al trayecto migratorio.

Es importante seguir la propuesta de lectura que hace la autora al principio del libro, puesto que no es necesario leerlo ordenadamente, sino que el lector puede dirigirse a uno u otro capítulo según sus prioridades. El contenido, sin embargo, sí sigue una lógica. Desde un foco amplio donde se explica el fenómeno migratorio en España y su evolución en los últimos años, este se va cerrando para aproximarnos a personas, experiencias, testimonios etc. Todo ello para hacernos presente la mirada de estas personas que buscan construir un nuevo hogar en el país que los acoge y cómo, para ello, es preciso que haya un proceso de reconocimiento e interacción con la sociedad de acogida.

La autora también nos hace partícipes del proceso de elaboración del libro. Nos remite a la bibliografía, la información, los pensamientos, las ideas y las reflexiones que se acumulan en los libros que ha ido leyendo durante años, y que acumulan un conocimiento al que ha recurrido para tejer la presente obra. Desde la biblioteca a las estanterías de su casa ha recopilado y recuperado una bibliografía para tener una buena base sobre el concepto del “Otro” y de los movimientos humanos y lo que ello conlleva, sobre todo el hecho de abandonar el hogar, los dos conceptos centrales del libro. En este sentido, nos habla de dos libros que la acompañan, uno de Fatima Mernissi y otro de Ryszard Kapuscinski, que refuerza esta invitación y además nos impulsa la curiosidad de seguir estos temas

más allá de la lectura de *Mi hogar es cualquier parte*.

El libro se abre con una larga conversación precisamente con Nicolás Castellano, que permite unir, tras 15 años, con *Mi nombre es nadie* que mencionábamos antes y que se centraba en el trayecto migratorio, mientras que *Mi hogar es cualquier parte* se centra en el proceso de acomodación, convivencia e incorporación en el país donde ha finalizado este trayecto migratorio.

Destacan también las distintas reflexiones alrededor del concepto del “Otro”, cómo este se desarrolla en nuestra sociedad actual y su impacto para reconocer, incorporar e interactuar con estas personas (a quién se consideran “Otros”) y sus hogares. Un concepto que desde antiguo ha ido ligado al extraño, al extranjero, al que suele rechazarse y sobre el cual se desarrollan temores y se le asignan actitudes preconcebidas. Una frase resume la importancia de replantearnos la interacción con el “Otro” y así llegar al necesario reconocimiento mutuo: “La exclusión de hoy es el conflicto de mañana”.

“Lugares en casa o lejos de casa”, con este título se adentra la autora en el concepto de hogar, cómo se construye y qué importancia tiene. Aquí se da voz a expertos, activistas, periodistas, colectivos, asociaciones y personas que nos acercan lugares y testimonios para poder captar en primera persona y en toda su complejidad no solamente los elementos que hay alrededor de la idea de hogar, sino también de las migraciones y el hecho de que las personas cambian con el trayecto migratorio, a la vez que los espacios que reciben estas migraciones también cambian y se enriquecen.

La última parte reúne reportajes y experiencias colectivas, dibujando una rica geografía de lugares, nombres e iniciativas que plasman de manera práctica muchos de los conceptos acumulados a lo largo de las páginas, y que nos acercan a este proceso de “construcción del hogar y las dificultades para sentirse en él” que no es sino la principal idea de fondo que movió a Carla Fibla a elaborar este libro.

Xavier Aragall—IEMed

COLECCIONES

Joint Policy Study

IEMed Policy Study

IEMed. Mediterranean Yearbook

Papers IEMed

Papers IEMed joint series with EuroMeSCo

Euromed Survey of Experts and Actors

Quaderns de la Mediterrània



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Nombre **Apellidos**

Dirección **Localidad**

Provincia **C.P.** **País**

Teléfono **e.mail**

Deseo suscribirme a **afkar/ideas** desde el número

- | | | |
|--|--------------------------|------------------|
| al precio para España de | <input type="checkbox"/> | 15 € (3 números) |
| al precio para Marruecos de | <input type="checkbox"/> | 15 € (3 números) |
| al precio para Túnez de | <input type="checkbox"/> | 15 € (3 números) |
| al precio para Argelia de | <input type="checkbox"/> | 15 € (3 números) |
| al precio para Europa de | <input type="checkbox"/> | 30 € (3 números) |
| al precio para resto del mundo de | <input type="checkbox"/> | 30 € (3 números) |

FORMA DE PAGO

Contra reembolso del primer número + 6€ de gastos de envío.

Domiciliación bancaria (sólo para España, hasta nuevo aviso)

Banco.

IBAN

Transferencia bancaria a:

Estudios de Política Exterior SA

Entidad: OF 1815-C/ Serrano, 64 – 28001 MADRID

Nº IBAN: ES44 2038 1815 8168 0008 4016

SWIFT / BIC: CAHMESMMXXX

TODA LA INFORMACIÓN EN **politicaexterior.com**

LLÁMANOS O ESCRÍBENOS:

Tel.: 0034 91 431 27 11 // suscripciones@politicaexterior.com

ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR SA y el INSTITUTO EUROPEO DEL MEDITERRÁNEO le informan de que los datos de carácter personal que voluntariamente ha proporcionado serán incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de prestarle satisfactoriamente nuestros servicios, informarle acerca de publicaciones, promociones y productos de nuestras sociedades y hacerle llegar otras informaciones comerciales que puedan ser de su interés por cualquier vía, incluido el correo electrónico y/o medio equivalente. Al entregar sus datos usted consiente expresamente su tratamiento con dichas finalidades. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose, junto con una fotocopia de su DNI, a nuestras oficinas en Núñez de Balboa, 49 - 5ª planta - 28001 Madrid.



a f k a r / i d e a s - a f k a r / i d é e s

				
 <p>Factores de cambio en Argelia</p> <p><small>Caja de Butelkha ◊ Juventud ◊ Economía ◊ Europa</small></p> <p><small>Laurence Tassin ◊ Amel Mazi ◊ Miguel Ferrnandez de Lencastre ◊ Leila Benkhal</small></p> <p>Sudán, Israel, Irán</p> <p><small>Wafiq Louadi ◊ Ali Toubi ◊ Aïme Benabou</small></p>	 <p>Migrants dans les pays arabes</p> <p><small>Le Liban et le système de la 'Kafala' ◊ Travailleurs dans le Golfe</small></p> <p><small>Subalternités au Maroc ◊ Réfugiés</small></p> <p><small>Charrat Bouchra ◊ Boussouf Brahim ◊ Haddad Houssein ◊ Talha Jassi</small></p> <p>Récupérer le patrimoine syrien</p> <p><small>Amel Barho-Faouzi ◊ Mounir Akbach ◊ Ismaïl Sahine</small></p> <p><small>Jean-Jacques Baudry ◊ Mounir Akbach</small></p>	 <p>Nuevo pulso en la calle</p> <p><small>Libano ◊ Egipto ◊ Túnez ◊ Irak ◊ Argelia</small></p> <p><small>Georges Corbi ◊ Corinne Saha ◊ Ricard González ◊ Lilla Wessary</small></p> <p>Las izquierdas en el Mediterráneo sur</p> <p><small>Laura Páez ◊ Fátima Espinosa ◊ Nuria Escá-Pineda ◊ Laura Soler ◊ Víctor M. Arana</small></p>	 <p>Pandémie et autoritarisme</p> <p><small>Ignacio Abizaco-Oviedo ◊ Pierre Vermeire ◊ Louise Eric-Abi Nemrahoucha</small></p> <p>Normalisation arabe avec Israël ?</p> <p><small>Accords d'Abraham ◊ Maroc ◊ Palestine ◊ USA</small></p> <p><small>Guillaume Daifallah ◊ Elizabeth Markez ◊ Rainer Dominguez</small></p> <p><small>Maria Pitaru ◊ Elise Lohman</small></p>	 <p>Sahel, la otra frontera de Europa</p> <p><small>Demografía ◊ Migración ◊ Terrorismo ◊ GS del Sahel</small></p> <p><small>André M. Ollivier ◊ Catherine Ollivier ◊ André Mour ◊ M. A. Pélissier de Maréchal ◊ Marwan Sidi</small></p> <p>Marruecos, Turquía, Jordania</p> <p><small>Samuel Lohay ◊ Miguel Ferrnandez de Lencastre ◊ Carlos Rodríguez ◊ Nicolas Ben-Said</small></p>